



Las lógicas de Chávez

Acercamiento al proceso político venezolano
(Papeles para la discusión)

Wladimir Ruiz Tirado

¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otros. Inventamos o erramos.

SIMÓN RODRÍGUEZ, *Inventamos o erramos*

Introducción

Sin duda, la razón occidental, su *logos*, cultivada desde la época griega antigua, codificada por Aristóteles como lógica formal, usada por Agustín en el siglo XIII para intentar conciliar razón y fe, asimilada por Descartes en la modernidad y, en tiempos contemporáneos, altamente refinada por el desarrollo científico-técnico, ha sido soporte y pilar para fundamentar el dominio cultural.

Ahora, es válido plantearse: ¿es posible otra razón, otra racionalidad, otras lógicas, incluso sin desterrar definitivamente la bivalente occidental? No solo afirmamos que sí es posible, sino que, en la construcción de estas se juega la vida de «muchos». Nos dice Edgar Morin: «En nuestra opinión, esta lógica debe ser a la vez probabilística, flexible, dialógica, dialéctica, pluralista y generativa».¹ Aun cuando esta exploración teórica nos lleva al centro de un debate inconcluso, el mismo autor nos lleva a la siguiente afirmación: «El concepto de lógica parece perder su racionalidad absoluta, bien sea permaneciendo desmembrado y relativo, bien sea abriéndose a la ambigüedad, la contradicción, el error, la creación».²

Pues bien, la supuesta locura de Chávez ha sido la de plantear y explorar, por la senda de la revolución, otra vía, una salida distinta, al yugo prepotente

1. *Ciencia con consciencia*, p. 326

2. *Ibíd.*, p. 337

de la razón imperial. Valga decir, la búsqueda de una lógica distinta a la del capital y sus agentes, tanto nacionales como internacionales. Si esta disidencia a la razón omnipresente de Occidente es locura, como pérdida de la razón occidental, bienvenida sea. Pero, habría que agregar, si esta es la locura de Chávez, ella es, a la vez, colectiva y asumida por quienes lo acompañamos en esta empresa de intentar cambiar a Venezuela: militares, trabajadores, mujeres, jóvenes, campesinos, intelectuales, amas de casa, pensionados, clase media, estudiantes, entre otros «muchos».

Este libro no es una biografía de Chávez ni tampoco un estudio psiquiátrico de su personalidad, más bien, podemos señalar que reúne un conjunto de textos que, aunque fueron escritos en tiempos distintos, aparecen unificados alrededor de un propósito común: acercarse a la comprensión, el análisis y el seguimiento de los diferentes temas que han brotado en el devenir del proceso político venezolano reciente. Nos referimos a una temporalidad asociada al acceso al Gobierno y al poder por parte de las fuerzas patrióticas y revolucionarias liderizadas por Hugo Chávez Frías.

Son, además, como consecuencia de lo anterior, textos elaborados sin un patrón metodológico determinado o único, aun cuando utilizamos como herramientas permanentes tanto la reflexión teórica y política en el propio desarrollo de los acontecimientos, como la evaluación de la perspectiva histórica y el estudio de la confrontación que tienen entre sí los actores en pugna en la Venezuela contemporánea.

Hemos dividido la presentación de los mismos en tres partes diferenciadas en el tiempo y en el agrupamiento temático. Un primer capítulo, “Las lógicas de Chávez”, fue elaborado en el año 2001 y constituyó para nosotros un ejercicio para examinar lo que entonces denominamos «la era Chávez».

Un segundo capítulo, “Golpe de Estado, proceso político y situación internacional”, abarca cronológicamente el período comprendido entre 2002 y 2004, es decir, entre el golpe de Estado de abril y el Referendo Revocatorio. Esta quizá sea una de las secciones más polémicas de este volumen, porque no solo su presentación es poco convencional, sino que también, a diferencia de lo que normalmente hacen los historiadores, nosotros formamos parte activa de la lucha política y generamos una serie de documentos o papeles de trabajo, con análisis para la discusión de diversos equipos y para el propio Gobierno, generalmente antes de ocurrir los hechos en la realidad, es decir, invertimos la metodología clásica de Herodoto y de Clío. Publicamos estos

escritos tal cual fueron presentados en su momento para la discusión. Vistos *a posteriori* nos sorprendemos de su alta precisión en el análisis y los desenlaces reales de los acontecimientos.

Y, finalmente, un tercer capítulo al que hemos denominado “El Modelo”. Aquí agrupamos aquellos textos estrechamente vinculados con la discusión actual en torno al modelo de sociedad que aspiramos construir. Cronológicamente están ubicados entre fines de 2004 hasta la fecha presente. Tocamos temas referidos al socialismo del siglo *xxi*, una propuesta de gestión para el área de la salud y una breve incursión en el pensamiento de Alfredo Maneiro, cuyos aportes para la revolución son invalorable.

Finalmente, queremos hacer unas consideraciones que, tal vez, puedan ser útiles para el lector. En primer lugar, es ahora cuando cobra mayor importancia el debate en el campo de los revolucionarios, los retos son descomunales, su importancia está implícita en la posibilidad de acceder a formas superiores de organización popular y de dirección política, las cuales no serían posibles si caemos en la vorágine inmediateista del ejercicio del poder por el poder. Y, en segundo término, si este libro contribuye a tal tarea me daré por satisfecho.

CAPÍTULO I

Las lógicas de Chávez*

Este ensayo, en el sentido literal del término, hace suya la interpretación de José Jiménez en cuanto a su fragmentariedad. Cuando comenzamos a escribir notas sucesivas acerca del contenido y la perspectiva de la «era Chávez» no teníamos un programa escritural en sentido estricto, es decir, no nos colocamos camisa de fuerza alguna para desarrollar el tema. Pero, aun en ausencia de esta previa intencionalidad, no podemos decir que partimos de «un grado cero». Teníamos en nuestra memoria la impronta de la obra de José Manuel Briceño Guerrero, especialmente la confrontación discursiva de *El laberinto de los tres minotauros*; donde el entrecruzamiento del pensamiento racional de Occidente, denominado razón segunda por el autor; con el pensar mantuano y el salvaje, provocan una angustiada interrogante a la hora de definir nuestro sino.

De igual forma, veníamos de inmiscuirnos en la obra científica y filosófica de Humberto Febres Rodríguez, lo que nos había obligado a acercarnos a los problemas del saber en el mundo contemporáneo. Febres nos introdujo en la senda de la averiguación sistemática de la denominada crisis paradigmática del conocimiento, es decir, el estudio y la evaluación de los instrumentos del saber occidental, su grado de confiabilidad, sus limitaciones, las diferencias con otras ópticas de acercarse a la comprensión de los hombres y su mundo.

* Nota: texto escrito a finales de 2001.

Nos llevó al estudio de autores como Edgar Morin, uno de los artífices de la teoría del pensamiento complejo; en fin, a intentar una tarea ciclópea, la de buscar herramientas de conocimiento apropiadas para el examen de nuestra realidad.

Y en el 2001, el profesor y filósofo, Massimo Desiato, en las páginas del diario El Nacional, comenzó a escribir una serie de artículos que ofrecían una sugestiva línea de análisis con respecto al proceso político que vivimos en nuestro país, planteando un conflicto discursivo similar al del filósofo de Palmarito. Con la diferencia que en Desiato se identifican claramente y con crudeza los dramas del presente y sus actores, en particular el presidente Chávez y el pueblo de Venezuela.

Es por ello que el presente escrito es un intento de reflexión donde se interceptan diversas fuentes de información y de fuentes. Pero, en cualquier caso, la preocupación es básicamente la misma: intentar comprender el proceso político que está en curso y sus implicaciones diversas.

Chávez según Desiato

La línea de análisis propuesta por Massimo Desiato, abre la posibilidad de una discusión fructífera en relación con el contenido y las perspectivas de desarrollo del proceso de cambios iniciados en el país en lo que pudiéramos denominar «la era Chávez». Es en esta dirección como podemos aprovechar la extraordinaria oportunidad que nos brinda un nivel de discusión alejado del debate bastardo y carente de imaginación e inteligencia en el cual nos pretende encallejonar la oposición a ultranza al «proceso».

Primero debemos delimitar: ¿a qué lógica, o lógicas, se refiere Desiato? El propio autor nos da una pista bastante clara, cuando en su respuesta al profesor Jacinto Dávila, señala que por «lógica» entiende no solo el discurso, sino «unos procesos sociales económicos, culturales que muestran cierto grado de cohesión». En general, estamos de acuerdo con esta propuesta, pues a nuestro modo de ver la «era Chávez» no puede ser interpretada con el instrumento de análisis formalista de la lógica bivalente occidental.

Creo que debemos hacer un gran esfuerzo teórico para generar y construir nuestras propias herramientas de conocimiento. Necesitamos una epistemología que dé cuenta de las realidades que se han tejido luego de la ruptura de

los sistemas coloniales, a la par que evaluar atentamente lo que Walter Mignolo llama epistemologías fronterizas, es decir, aquellas que se producen entre los diseños globales de los imperios y los legados coloniales. Cobra fuerza la idea según la cual la fuerza de nuestro pensamiento puede vigorizarse a la luz de la doble experiencia que significa, por un lado, el haber estado sujetos a la concepción moderna, de corte colonialista y, por el otro, y al mismo tiempo, al pensamiento en construcción desde la óptica de nuestras historias concretas, desde nuestras naciones.

No está de más señalar que, así entendido el asunto, puede decirse que las cosas de la lógica no siempre son equivalentes o similares a la lógica de las cosas. Como muy bien lo decía Nietzsche: «¿Cómo ha llegado a existir la lógica en la cabeza del hombre? Sin duda a partir de lo ilógico, cuyo dominio debió ser originalmente inmenso». Con esto queremos decir que la «era Chávez» debe incorporar, para su análisis e interpretación, el instrumento, si es que se puede denominar así, de la o las «lógicas informales», y todos aquellos legados y herencias culturales que se han generado en nuestras realidades.

¿Ahora, significa lo anterior renunciar a la lógica? Pues no, y Humberto Febres Rodríguez nos dio la clave: «Así pues, la lógica bivalente y su disyunción acuciante no son hoy los monarcas absolutos de la ciencia, como antes fueron, pero tampoco están desterrados de ella y es altamente improbable que sean echados alguna vez». A nuestro modo de ver esto significa, ni más ni menos, que no debemos desdeñar ninguna herramienta del conocimiento, pero sí establecer la debida «vigilancia epistemológica» que reclama el conocimiento de nuestra realidad.

Lo inédito, lo original y lo *sui géneris* de este proceso así lo reclaman. Dicho de otra manera: no debemos tratar de empaquetar o etiquetar las cosas a la medida de las camisas de fuerza de metodologías ya conocidas como insuficientes. Lo de las lógicas informales podemos discutirlo más adelante, por lo pronto, basta decir que la «era Chávez» plantea interrogantes atinentes, no solo al contenido del proceso en sí, sino también a la producción de herramientas apropiadas para su conocimiento. Desiato nos habla de tres lógicas, las cuales se conjugan, articulándose o yuxtaponiéndose algunas veces, a saber: la popular, la moderna y la revolucionaria. Hagamos pausa en cada una de ellas para evaluar el alcance de la propuesta.

Lógica popular

La denominada lógica popular ocupa, en primer momento, la atención de Desiato. Para él, lo político popular rechaza la economía, en tanto que actividad esencialmente moderna, y provoca un gran desencuentro con lo moderno, lo cual, a su vez, es «irrespetuoso» del modo de ser popular. La política popular refiere a lo afectivo, lo solidario, lo comunitario, y a la ruptura con las formalidades. Chávez sería símbolo de esta política.

En segundo término, la lógica popular es una respuesta de los sectores populares a la desestructuración cultural producida por la globalización. Según esta apreciación, lo popular, más que conducirnos por la senda del «crecimiento», nos conduce a una afirmación de identidad. La modernidad aparece así escindida con respecto a lo popular y no solo no responde a las expectativas del pueblo, sino que da pie para que Chávez aparezca como una suerte de justiciero social.

Por lo anterior, Desiato concluye en adjudicarle un carácter protagónico al «pueblo», por la recuperación de su capacidad de actuación, la que se ve limitada y obstaculizada por la implacable impersonalidad de la administración y el Estado. Así, el Gobierno puede perder su ímpetu popular a través de la acción administrativa, la cual deviene en enemiga del proceso. Considera Desiato que el «sujeto» revolucionario de la «era Chávez» está personificado en los sectores más depauperados de la población, sin embargo, a aquel le acechan, al menos, dos serios adversarios: por un lado, la administración inoperante y, por el otro, el pueblo mismo «cuyo corazón tal vez no sea tan puro como se cree».

Comentemos estos planteamientos de Desiato. Por una parte debemos decir que la modernidad en América Latina es, como lo dice Enrique Gómez, «una particularidad» no semejante al modelo moderno de las metrópolis occidentales. Para decirlo de otra manera: tenemos una modernidad inconclusa, derivada de los sucesivos procesos coloniales y neocoloniales a los cuales hemos estado atados. Ello explicaría lo que José Manuel Briceño señala en cuanto al carácter laberíntico de los discursos presentes en América, es decir, al hecho de la coexistencia contradictoria de al menos tres discursos, donde ninguno de ellos ejerce una tutela y un predominio sobre los restantes. A saber: el salvaje, equivalente al popular de Desiato; el mantuano, vinculado a la implantación del imperio español; y el europeo segundo equivalente a la

modernidad occidental. Como lo dice El Chivo, uno de los personajes de la obra *El llano en voces*, de Nelson Montiel: «[...] esta multiplicidad nos tiene en un laberinto, no sabemos cuando somos occidentales, cuando somos criollos y cuando somos salvajes, uno de esos polos nos domina, no podemos abandonar esas polaridades, estamos frente a un conflicto de identidad».

Es por lo anterior que la carga y el contenido popular presentes en la «era Chávez» tienen la pegada y la presencia que no solo no habían tenido antes, sino que ahora aparecen desplegados en una magnitud desconocida. El discurso popular tiene ahora vocero, interlocutor válido. Chávez se ha convertido para los sectores populares en punto de encuentro, referencia natural, de aspiraciones y anhelos de redención social siempre olvidados o postergados por las clases políticas que han hecho suyo el proyecto moderno en Venezuela. En otras palabras, con Chávez es posible, o, al menos, es factible resolver ese conflicto de identidad mencionado por El Chivo.

Es evidente que la oposición de esta lógica al proyecto moderno, sea espontánea o deliberada, representa un dato de la realidad que debemos considerar en la perspectiva del proyecto Chávez, sobre todo, porque asistimos justamente en los tiempos de hoy a una quiebra de los principales paradigmas del pensamiento y de la «lógica moderna». La gran pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿vale la pena sacrificar el enorme potencial popular que representa y contiene la «era Chávez» para asumir la construcción de un proyecto verdaderamente «moderno»; o, por el contrario, debemos tomar la extraordinaria energía del pueblo y dedicarnos por entero a la construcción y diseño de un modelo propio, el cual, si bien puede tomar prestados algunos elementos modernos no sucumba ante su inevitable decadencia?

Interrogantes que nos surgen: ¿es posible acoplar o asimilar elementos de lo moderno a un proyecto popular? ¿Cómo construir una epistemología desde lo popular y lo nacional en tiempos del capitalismo global? ¿Está Chávez atento al carácter laberíntico, en el sentido que le adjudica Briceño Guerrero, a su pensar y a su actuación? ¿Hasta dónde puede llegar un proyecto de corte popular en los tiempos del capitalismo global? Como vemos, sin agotar las interrogantes, la cosa no es sencilla. Pero, de lo que sí estamos seguros es de la necesidad de reflexionar y actuar en consecuencia. Aquí sí cabe aquella tesis de Marx: no bastan las interpretaciones, es indispensable actuar.

Lógica moderna

Los paradigmas de la modernidad han sido resumidos muy apretadamente por Fernando Mires. Estos serían: el principio de determinación; el naturalismo, el esencialismo, el racionalismo, la lógica dicotómica, la idea de trascendencia, la creencia en un orden universal objetivo, y la separación abrupta entre objetividad y subjetividad. Por ser un resumen apretado, nos parece un buen marco de referencia para saber de qué estamos hablando cuando decimos modernidad.

Existe, como bien lo señala el profesor Desiato, una lógica económica del capitalismo, asociada a una ética del trabajo, a un orden que va desde la alta gerencia de la tecnoestructura dirigente hasta la organización de base y la producción misma, pero, en nuestra opinión, la lógica moderna no se circunscribe al ámbito económico, de allí que incorporar los aspectos de orden conceptual, valga decir, de las concepciones teóricas que han servido de guía al sistema capitalista, nos proporciona un marco más completo de lo moderno.

Sin embargo, todo ello aún no es suficiente para identificar los patrones de la modernidad. Debemos ubicarnos, además, en el marco del capitalismo global, donde se ha estructurado una relación centros-periferias, que constituyen, no solamente una distribución de espacios geográficos sino también una codificación de los centros de poder con sus respectivas áreas de influencia. Estas relaciones han servido de trampolín para potenciar el dominio económico, político, militar y tecnológico, e incluye también los mecanismos de dominación de la producción de conocimientos. Es por esa vía por donde se exportan paquetes epistemológicos, concepciones ya elaboradas, por los centros imperiales del poder a sus respectivas periferias. Allí vienen las recetas: teorías del conocimiento, planes de «desarrollo», tecnologías educativas, concepciones políticas e ideologías.

Además, hay que agregar que el capitalismo global ha derivado en un capitalismo sin fronteras nacionales; ya al gran capital no le es indispensable tener base nacional, puede operar tranquilamente fuera de sus países de origen sin perder su racionalidad económica; inclusive así funciona más impunemente, traspasa los límites de su propia nacionalidad y se expande cada vez más en la realidad económica del mundo. Ello le permite desplegar toda la panoplia de su poder hacia los lugares más recónditos del planeta e intervenir abierta o encubiertamente en cuanto asunto se proponga. Interviene

selectivamente en sus áreas de interés orientando reformas, bloqueando revoluciones, en fin actuando activamente en los asuntos internos de los países donde tenga interés. Pero, esta etapa del capitalismo global, de igual forma ha posibilitado el surgimiento de fuertes movimientos de arraigo nacional y popular que buscan redefinir sus historias, sus culturas, sus propias concepciones de lo político, sus propias elaboraciones teóricas y epistemológicas, fuera de la tutela de los centros de poder imperial. En esa línea andamos y creo que también el proceso que vivimos. De allí que nos llaman la atención las ideas sobre una vuelta a la modernidad, emprendida por el profesor Desiato.

Creo que él orienta su visión hacia la conformación de un «país moderno». Así lo interpretamos cuando escribe: «Si no se dispone de una administración pública moderna, hay que modernizarla y esto se hace colocando a las personas adecuadas en los lugares oportunos». La pregunta obligada es entonces: ¿desea o propone Desiato orientar todo este extraordinario esfuerzo hecho por el pueblo venezolano y por el liderazgo de Chávez hacia el modelo «moderno» hoy en bancarrota?

No se requieren pelotones de fusilamiento, ni guillotinas, para cambiar la conducta y la cultura de los hombres, como él lo dice. Es cierto, están demasiado arraigados vicios u obstáculos económicos, sociales y políticos provenientes del pasado y ellos tocan, no solo a las clases populares, sino en mayor grado a quienes han tenido la responsabilidad de la conducción del país. De eso no se puede hacer tabla rasa, estamos de acuerdo, pero caer en el pesimismo y en la desesperanza nos parece un craso error. Más que eso nos debe preocupar: ¿hacia dónde vamos y qué modelo aspiramos?

Inventamos o erramos, afirmó Simón Rodríguez. Pienso que por allí anda la cosa, porque la complejidad de los problemas planteados, sobre todo los que tienen que ver con los fundamentos de un nuevo proyecto, para América Latina, y en particular para Venezuela, en un mundo en el cual no prevalecen las antiguas teleologías maniqueístas y donde la occidental predominante está resquebrajada, nos obliga a pensar en alternativas por construir, por diseñar, por pensar. Este es el gran reto que tenemos por delante.

¿Quiere decir esto que desdeñamos la impronta de la modernidad en nuestro proceso? No, sabemos de su arraigo, de sus raíces y de su implantación, pero, eso sí, confrontémosla con Nuestros propios intereses como pueblo y como nación. De verdad, debemos contribuir con un esfuerzo teórico, científico o de cualquier índole, para la edificación de un proyecto para

América Latina, para Venezuela. El camino está plagado de incertidumbres, de contradicciones y de rémoras, pero, la alteridad al modelo moderno está precisamente en la convicción de nuestra indoblegable lucha por definirnos y consolidarnos como sociedad con perfil propio.

Así, también en esta gran encrucijada epistemológica en la que nos encontramos, nos hemos topado obligatoriamente con la discusión postmoderna, la cual hay que asumir como una exigencia de los tiempos actuales en América Latina.

Como bien lo señala Santiago Castro Gómez, la postmodernidad no es una discusión ajena a América Latina. Por un lado porque esta «no nos viene de la mano del neoliberalismo» y, de igual forma, «no puede ser equiparada sin más con la razón instrumental», es decir, ya es obligante asumir sus implicaciones porque, quierase o no, la crisis de la modernidad ya nos ha tocado, no somos ajenos a ella, independientemente de la calificación que hagamos de «nuestra» modernidad. Al respecto, este autor discute algunos de los «clichés» incrustados en esta discusión entre nosotros.

Hay quienes asumen definitivamente «el fin de la modernidad» como la asumió Vattimo, sin embargo, hay quienes entre nosotros difieren de esa apreciación y hablan más bien de una crisis reflexiva de la modernidad para referirse a la posmodernidad. Dice Santiago Castro que «se trata, entonces, de un retorno reflexivo de la modernidad sobre sí misma y no de su rebasamiento epocal». En cualquier caso, y como ya lo hemos señalado con anterioridad, aún si consideramos el paradigma moderno como «inconcluso» en América Latina, la discusión acerca de la instalación en su seno, de las preocupaciones posmodernas, ya es un hecho insoslayable. Son los metarrelatos, las concepciones totalizantes y esencialistas de Occidente que están en cuestión. No así los contenidos emancipatorios de la modernidad, los cuales deben colocarse en «un nuevo contexto discursivo».

Otra de las versiones «más vendidas» entre los «clichés» en boga es el del «fin de la historia» planteado por Fukujama, quien sentencia que las democracias occidentales serían el fin último de la historia, en la más pura tradición hegeliana. Pero, en realidad, lo que está planteado es el fin de una concepción de la historia, precisamente aquella que emana de la tradición moderna eurocentrista, para dislocarse en múltiples historias, en una madeja interpenetrada por diferentes discursos, ideas, manifestaciones culturales y desiguales maneras de hacer sus historias concretas.

Otra de las consignas atribuidas a la posmodernidad es «la muerte del sujeto», es decir, el abandono de cualquier postura crítica y reflexiva ante la razón dominante y ante la omnipresencia del mercado, el cual se idealiza como el ente regulador de toda la vida económica, social y política. De igual forma, creemos que lo que ha estado muriendo es o son los «grandes sujetos» que sirvieron de hilo conductor a los grandes metarrelatos y a la concepción de la historia unilineal, tutelada por una razón única, bien sea un dios abstracto o la razón todopoderosa de Occidente. Asistimos más bien al período de la multiplicidad de sujetos, cada uno de ellos relativamente autónomos y con pluralidad de propósitos. Ello conlleva, de por sí, a una redefinición de las antiguas utopías, a una descentralización de los proyectos sociales y a la búsqueda de un orden político igualitario y equitativo en oportunidades y calidad de vida.

Lógica revolucionaria

La teoría y el concepto de «revolución», al menos tal como lo conocemos hoy día, es un producto básicamente moderno. Desde Maquiavelo hasta hoy, pasando por las revoluciones burguesas y las socialistas inclusive, el contexto económico y los actores protagónicos han estado signados por los paradigmas de la modernidad occidental: la conquista del poder político, valga decir, del Estado. La construcción del partido o la vanguardia revolucionaria, cuyo objetivo sería lo anterior. Y, luego, la potenciación del crecimiento económico con diversas fórmulas (liberales, mixtas, o estatistas), pero, a fin de cuentas, sin abandonar el marco económico capitalista. Incluso aquellos que en sus inicios escogieron el rumbo puramente estatista han retornado al camino del mercado.

Por lo anteriormente señalado no es posible etiquetar el proceso desencadenado a partir de la irrupción del liderazgo Chávez como una revolución marxista clásica. Por una parte, porque si bien es cierto que se invocan cambios radicales, estos no aparecen planteados en los términos del siglo XIX marxista, ni tampoco en la discusión contemporánea de la «izquierda». De otro lado, este no es un problema de terminologías, ni de asimilación directa a los modelos donde se ha implantado el sistema «socialista»; más bien, estamos en presencia de un proceso inédito, el cual toma como referencia el

pensamiento liberador de la independencia, así como el igualitarismo zamorano. En cualquier caso, aquí hay cambios no asimilables a ninguna receta en particular. Si alguna cosa hay que reconocer en esta experiencia es su sentido profundamente nacional, su fuerte carga popular. Si esto coincide o no con otras experiencias, es cuestión de examinar y comparar, pero, al menos hasta donde conozco este proceso, su origen y avance están referidos más a su originalidad que a la importación de fórmulas.

Desiato parece tener el empeño de encasillar este proceso en los moldes tradicionales de la izquierda. Sin embargo, es bueno indicar que desde la Revolución Francesa este concepto se ha ido redefiniendo para cada lugar y momento. Inclusive muchas de las grandes revoluciones del mundo contemporáneo se han hecho a contrapelo de las marxistas ortodoxas. En esta época autodefinirse de izquierda o marxista no es garantía de nada. Mucho más importante es comprender las condiciones del capitalismo actual y actuar en correspondencia con los cambios que reclamamos desde nuestras naciones. Definir para cada época y, sobre todo, en la que nos toca actuar, qué hacer y hacia dónde ir es una de las claves de los cambios posibles, no solo en la Venezuela de hoy sino en cualquier escenario. Desiato parece anclado en las fórmulas decimonónicas. Por ello, no es de extrañar que le adjudique al «binomio tecnología-capital» el carácter de fuerza motriz de la historia universal. Refutar ese enunciado no es cosa fácil en corto espacio; sin embargo, debemos acotar lo siguiente, al menos como una preocupación que hemos tenido durante hace algún tiempo: si el propio Marx le adjudicaba a las fuerzas productivas el papel de caballos de tiro de la economía y de las sociedades, ¿Por qué, entonces, preocuparse por construir una teoría y una práctica revolucionaria que le diera a la clase obrera o a cualquier otro «sujeto revolucionario» el protagonismo para conducir su propia historia?

Es el gran paradigma moderno el que está en cuestión y, por supuesto, ello incluye el productivismo del progreso a partir del binomio capital-tecnología, así como también al voluntarismo revolucionario de «la conciencia para sí». Con más razón en el mundo de hoy, donde una tendencia del pensamiento «posmoderno» intenta no solo liquidar el Estado, sino renunciar a todo proyecto de construcción de la sociedad. De allí que el esfuerzo que tenemos por delante es ciclópeo. Ya no se trata de copiar modelos precedentes, fracasados, que no conducen al bienestar colectivo, mucho menos en el mundo globali-

zado del presente, donde la voracidad del gran capital trasnacional cercena cualquier posibilidad de autonomía.

Como muy bien lo dijo Roberto Hernández Montoya, en una de sus intervenciones ante los artículos de Desiato: hay que superar las intolerancias del siglo XIX, trasladadas al XX y, casi me atrevería a asegurar, con fuertes resabios en el XXI. Supermercados llenos transitoriamente, en un país como Venezuela, rentista petrolero, son una ilusión del mercado único del Grupo de los Ocho, creo que lo planteado es una cosa mucho más radical. Para pensar de verdad en nuestro porvenir, no solo productivo, sino democrático, debemos construir una sólida concepción de quiénes somos y hacia dónde vamos. La gran reflexión de hoy en Venezuela y en América Latina anda por allí. No podemos estar supeditados, ni dando tumbos, alrededor de los proyectos globalizadores o de libre comercio continental como es el caso de la política norteamericana del *fast-track*.

Ahora, ante todo esto, ¿Con cuáles protagonistas, con cuáles actores? Eso precisamente es lo que debemos definir con claridad. Hasta ahora quiénes han sido?: el liderazgo Chávez, el pueblo llano, los militares, el «polo patriótico», algunos intelectuales, sectores obreros, en fin, todos aquellos quienes apostamos, no a un sueño, sino a una nación distinta, a una Venezuela diferente. Como muy bien lo resume Carlos M. Vilas, la construcción de una fuerza política propia en el proyecto Chávez está asentada en tres ejes fundamentales, a saber: la alianza electoral Polo Patriótico, las Fuerzas Armadas y la relación «personalizada» Chávez-masas populares.

Últimamente se ha planteado la reestructuración del Movimiento Quinta República y la conformación de una red de organizaciones populares aglutinadas alrededor del MBR 200. En cualquier caso, una cosa sí parece clara y evidente: el desarrollo de este proceso dependerá de la conformación de una dirección política con visión estratégica muy certera y la conformación de un sólido piso popular que le dé fortaleza y capacidad de movilización al Gobierno.

Lógica revolucionaria II

Saramago coloca en boca de Ricardo Reis, heterónimo de Pessoa, la siguiente y muy elocuente máxima: «Las revoluciones no son todas iguales ni quie-

ren todas lo mismo». Decimos elocuente porque las revoluciones que se hanpreciado de tales tienen una incuestionable característica: son inéditas, no son copias de otras ni pretenden las mismas cosas. Diríamos que ocurren en situaciones muy especiales y particulares y muchas veces en lugares y momentos inimaginables. Y esto es lo que está ocurriendo en la Venezuela de hoy. Contra todo pronóstico, aquí han ocurrido y continuarán ocurriendo cambios importantes en la vida nacional. Cualesquiera sean las mezquindades de los argumentos que se invoquen para negar este proceso, estarán en contra de esa realidad. Desde luego no caemos en el simplismo de decir que ya todo está hecho, pero, sí es preciso afirmar la voluntad de cambios que anima al pueblo de Venezuela y a su principal liderazgo encarnado en el presidente Chávez.

Decimos lo anterior para adelantar algunos criterios con relación al artículo del profesor Jacinto A. Dávila, titulado “La lógica revolucionaria del presidente”, *El Nacional*, 24 de agosto de 2001. En primer lugar, y en relación con el uso de la lógica formal, para descubrir la «lógica» que «gobierna» al presidente sostenemos lo siguiente: aún cuando reconocemos la «potencia» de este instrumento racional, como lo es la lógica bivalente, también denominada «razón segunda» por J. M. Briceño, reiteramos que este instrumento es insuficiente, no solo para elucidar la que «gobierna» a Chávez, sino, más aún, para comprender la naturaleza y el carácter del proceso que vivimos. ¿Por qué? Entre otras razones, porque dicho método forma parte de las herramientas cuestionadas en la ruptura paradigmática del conocimiento occidental. De allí que, sujetarnos a él, solo por comodidad intelectual, nos limitaría en la comprensión y proyección de nuestra realidad. Por eso, como también lo dije antes, hay que hacer un extraordinario esfuerzo para generar opciones teóricas y metodológicas que sirvan de puntos de apoyo para esclarecer y definir nuestro proyecto.

En segundo término, porque las contradicciones enumeradas por el profesor Dávila no son solo referentes a la personalidad o al liderazgo del presidente, sino que ellas están sembradas en nuestra realidad; están, por así decirlo, enraizadas en la herencia que hemos recibido de la anterior república. Desconocer esto es hacer un análisis muy alejado de las condiciones en las cuales se ha venido desarrollando este proceso de cambios. Es por esa razón que las comparaciones establecidas con el líder del Partido Laborista inglés, Tony Blair, actual premier de esa nación, nos parece una comparación abso-

lutamente descontextualizada, muy forzada, pensada más bien como atajo para arrimar argumentos a favor de un determinado modelo. Ahora bien, sí, estamos de acuerdo en la necesidad que tiene el presidente Chávez de aplicar lo que Dávila llama una «metarregla», consistente en el desafío y el cambio de las reglas tradicionales, ello sí implica el surgimiento de un nuevo orden, de una nueva «lógica», es decir, de las condiciones hacia donde debe avanzar el proceso. ¿O qué se aspira, que el presidente y el proceso sucumban ante las trampas del sistema precedente? Nosotros, por nuestra parte, insistimos en la necesidad, y allí también coincidimos con el profesor Dávila, de buscar un sólido piso colectivo para llevar adelante los cambios.

Sin embargo, para ponerse de acuerdo en los grandes temas y en las grandes decisiones que el país reclama, es preciso despojarse de los atavismos y las rémoras que todavía existen en los fantasmas del pasado.

De la misma manera, queremos comentar el artículo del profesor Desiato: “La política de la fe en Chávez”, *El Nacional*, 26 de agosto de 2001. Aquí el autor coloca en duda las posibilidades revolucionarias de carácter popular en Chávez al chocar estas últimas con «una empresa típicamente moderna» como lo es una política de la fe, es decir, aquella que se afinca en «la confianza puesta en la actividad de gobernar en aras a la perfección humana».

Ciertamente, toda empresa popular, cualquiera de ellas, tiene hoy más obstáculos que nunca para su concreción. Sin embargo, ello no es argumento suficiente para descalificar, no digamos su pretensión, sino sus posibilidades reales, aquellas que emanan de un gran esfuerzo que no es mesiánico, que superan una visión caudillesca de este proceso. Dicho de otra manera, no nos imaginamos una revolución o cualquier acción revolucionaria, al menos convincente en los hechos, como un simple acto de fe reducido a la ejecutoria de un salvador predestinado. Quien tenga un seguimiento del proceso histórico venezolano que desemboca en el ascenso de Chávez a la Presidencia tiene que concluir que ello fue posible gracias al protagonismo de muchos actores y a la maduración de una crisis de mucha profundidad en el acontecer nacional. Y esto lo decimos, no solo con respecto a lo que fue el ascenso de Chávez al gobierno, sino también a la acción política desde la conducción del Estado. Sí, reconocemos muchas debilidades, entre ellas, las dificultades para consolidar una dirección política del proceso, más allá del «gabinete» o del propio presidente. Las dificultades para crear bases de poder popular, entre otras, son problemas planteados y a resolver, pero, de allí a concluir que básicamente

son problemas de orden técnico como «la contabilidad, los registros, los libros contables, los archivos, los pasaportes los expedientes e índices...», nos parece más que una exageración, una falta de ponderación de las cosas más importantes.

En una de sus entregas, “Reforma de las instituciones”, *El Nacional* 12 de agosto de 2001, Desiato hace referencia a la necesidad de emprender una reforma de las instituciones apelando a una «moral provisional», en la más pura elaboración cartesiana. Señala el autor que suplantarlo viejo, es decir, las instituciones precedentes, requiere de un piso donde estar, en el cual permanecer, mientras se edifica lo nuevo, el Estado emergente, y este sería la moral cartesiana. Nuevamente hay un retorno a los conceptos de la modernidad.

La epistemología cartesiana fue el punto de referencia más importante para la fundación del actual capitalismo, le sirvió de ariete teórico para los diseños globales de sus políticas, de su implantación hegemónica. Es decir, para la definición de un «sujeto» similar a la «idea absoluta» hegeliana que se convirtió en espejo en el cual debían mirarse todas las historias y culturas del mundo. La elaboración teórica del capitalismo naciente, la constitución de sus disciplinas científicas y de conocimiento, tenían esas referencias filosóficas como sus principales fundamentos epistemológicos. Así, se construyó una teoría de la unilinealidad de la historia que colocó como modelo a seguir a los Estados europeos, particularmente Francia, Inglaterra y Alemania, ubicando a los pueblos del resto del mundo como estadios anteriores e inferiores a ellos.

Al respecto decimos que la «posmodernidad», vista desde nuestra perspectiva nacional, también tiene que estar asociada al «postoccidentalismo», es decir, a zafarnos de las camisas de fuerza a las que nos han sometido los centros imperiales, no solo en términos económico-mercantiles, sino además, en lo que respecta a la producción de la teoría y el conocimiento, los cuales estamos hoy obligados a elaborar desde nuestros territorios y lugares de origen. Por eso, el uso que hace Desiato de categorías eminentemente modernas nos parecen inapropiadas para pensar nuestra realidad y proceso actual. ¿Reforma del Estado, reforma de las instituciones? Sí, es cierto, las necesitamos. Pero, no debemos postrarnos nuevamente, cual sumisos intelectuales, a conceptos y teorías contrarias a la posibilidad de pensar nuestra propia experiencia y a producir una epistemología que dé cuenta de ella.

¿Cuáles extremos, cuál socialdemocracia?

En dos oportunidades Massimo Desiato ha expresado sus opiniones con relación a los límites que debe guardar el proceso político que vivimos. En una primera entrega, “Evitar los extremos”, *El Nacional*, 03 de junio de 2001, deja saber que «la asimetría de herramientas conceptuales» con las que los distintos sectores abordan este proceso resultan peligrosas para el carácter pacífico del mismo. Luego, en otra oportunidad, en su artículo: “Chávez y la historia”, *El Nacional*, 29 de julio de 2001, nos introduce en una reflexión similar en cuanto a la interpretación que hace Chávez del proceso histórico venezolano. En ambos casos la orientación de su pensamiento es el mismo: se deben evitar los extremos y buscar un punto de equilibrio e integración alrededor de una salida más apropiada a nuestra cultura política, esto es: una opción socialdemócrata o socialcristiana, ambas más cercanas a nuestra idiosincrasia.

Las preguntas obligadas ante una propuesta de análisis de esta factura son las siguientes: ¿Quién dijo o de dónde se genera esa visión según la cual la socialdemocracia sería nuevamente instrumento de transformación de nuestra patria? ¿Acaso no bastó el intento frustrado de los partidos y proyectos de la anterior República para evidenciar las insuficiencias de tal modelo? Si justamente la quiebra del intento modernizador socialdemócrata se manifiesta en su incapacidad para ser canal y expresión política de las grandes mayorías nacionales. Sí, además, el cuestionamiento a nivel mundial de esta referencia política se grafica en su excesivo europocentrismo, al margen completamente de las tendencias mundializadoras de una nueva conciencia y visión de la ciudadanía planetaria. Por eso, nos parecen extemporáneas y desfasadas en el tiempo y en la escena política actual las posiciones de Desiato.

No compartimos el criterio según el cual esta corriente de pensamiento sería el instrumento alternativo antiglobalizador. En ninguna parte de los escenarios antiglobalizadores y, más que eso, en la lucha en positivo por afirmar una nueva corriente política y social que le haga contrapeso a la tendencia tecnocrática-mercantil del Grupo de los Ocho, la socialdemocracia no ha hecho aporte alguno, de allí que presentarnos esta como una nueva panacea nos parece un anacronismo.

Ciertamente, una de las preocupaciones más urgentes a resolver, o al menos, a discutir, es precisamente la de cómo enfrentar los retos del mundo global

sin perder nuestra especificidad y nuestra capacidad para generar respuestas propias ante ese escenario. Si alguna originalidad está claramente definida en el actual proceso es precisamente la de emprender un camino inédito para el tratamiento de este problema. No podemos, por ejemplo, anotarnos en un plan de integración americano tutelado por Estados Unidos de América, sin antes plantearnos el problema del mercado regional latinoamericano. Mucho menos debemos estar copiando recetas ajenas para la edificación de nuestro modelo político, si precisamente ese ha sido el fundamento de nuestras frustraciones. Y, menos aún, volver al modelo del pasado reciente, suficientemente reconocido como responsable de gran parte de nuestros males.

Si alguna cosa debemos concluir en lo que respecta a este punto es la imperativa necesidad de no volver a estos esquemas, ni tampoco, desde luego, a intentar resucitarlos. Por ello, no deja de sorprendernos esta filosofía de Desiato.

Con bastante agudeza Tulio Hernández nos dice, también en un artículo escrito en *El Nacional*, "Fractura, Factura", 17 de junio de 2001:

El cemento ideológico —y la falta de dólares— con el que la socialdemocracia tropical adeca y su contraparte demócrata cristiana habían conservado pegado lo que era obvio que se separaba, cedió a la tensión. Y de ella con un costo elevado para la Nación, se ha nutrido Chávez para mantener su prestigio y su poder.

Costo elevado, claro está, no imputable a Chávez, sino precisamente a quienes aplicando el modelo socialdemócrata «tropicalizado» llevaron al país al cisma y a la fractura.

Ahora bien, si la reconstrucción nacional no pasa por la vuelta al pasado, ¿cuáles son entonces las exigencias del presente? Aquí, afortunadamente no podemos colocarnos la camisa de fuerza de dogmas y modelos ya superados, y es allí donde estamos obligados a producir un cambio de mentalidad y de modelo, propio, ajustado a nuestras necesidades y a nuestra realidad. ¿Difícil, utópico, imposible? No creemos que así sea, sino más bien, el requisito indispensable para que esa esperanza de las mayorías, de la cual nos habla Tulio Hernández, no solo sea respetada, sino además, para que cuaje como un proyecto nacional.

«Globalización» o «Revolución»

Uno de los grandes debates de nuestro tiempo, hablamos de la época de fines del siglo pasado y comienzos del presente, sin duda está referido al tema de la globalización. Para decirlo en términos más precisos, en las palabras de Carmen C. Lara, en su artículo: “Génova: un nuevo fantasma recorre el mundo”, *El Nacional*, 2 de agosto de 2001, en realidad la discusión debe centrarse con relación al capitalismo global, una definición más acorde con el contenido de la tan manida globalización. Tulio Hernández, también en su nota del pasado 12 de agosto de 2001, “Un debate”, igualmente en *El Nacional*, nos dice muy acertadamente que este tema será el centro obligado de la controversia intelectual mundial; en efecto, el volumen de información publicada en artículos, libros, revistas, es realmente impresionante y todo indica que será, no solo un torneo de rivalidades teóricas, sino al mismo tiempo, un fuerte componente de la disputa política y militar.

De igual manera, autores como Edgar Morin ya han señalado que el siglo XXI comenzó a fines del pasado, concretamente en Seattle, epicentro de los movimientos antiglobalizadores, y punto de partida de la concentración de ideas y esfuerzos unificadores de un movimiento planetario que tenga como referencia la mundialización de las distintas manifestaciones del quehacer humano. Es decir, se reconoce el proceso «globalizador» como un dato ineludible de la realidad, a la vez que se discuten y se proponen alternativas, tanto para los problemas comunes a la civilización planetaria, como a los atinentes a los rasgos particulares y específicos de las diferentes naciones y manifestaciones multiculturales diversas.

Este es el marco donde debemos ubicar el proceso que vivimos en Venezuela. El capitalismo global toca directamente a este proceso en varias de sus aspiraciones y realizaciones. ¿Cómo, por ejemplo, sacudirnos el yugo esclavizante de la deuda externa? ¿Cómo regular el flujo de los capitales transnacionales? ¿Cómo zafarnos del predominio del patrón dólar como principal divisa de referencia continental? ¿Cómo hacer valer nuestra autonomía e independencia a la hora de definir nuestras políticas domésticas y exteriores? ¿Cómo resguardar y fortalecer nuestro patrimonio económico? ¿Cómo resguardar y fortalecer nuestros patrimonios culturales? Estas, desde luego, son apenas algunas de las interrogantes que nos hacemos a la hora de calibrar las dificultades de un proceso que ha sorprendido a propios y a extraños. Porque

una cosa sí esta clara, al menos para nosotros: las cosas no son ni serán fáciles si de verdad le imprimimos mayor profundidad a algunas políticas de cambio «revolucionario».

Estamos también claros en que el gobierno nacional ha avanzado en ejecutorias importantes. Ejemplos fehacientes son el impulso a la carta democrática en la OEA.; la política de integración subregional previa a cualquier unificación del mercado americano, tutelado por Estados Unidos; el establecimiento de relaciones internacionales con plena autonomía; el fortalecimiento de la política petrolera alrededor de la OPEP; sin embargo, reconocemos que las debilidades y las dificultades son diversas y muy fuertes. Estos serían factores a evaluar a la hora de plantearse reformas y cambios más radicales.

Debemos avanzar en algunas áreas claves. 1°. Conformación de una Dirección Política que aglutine los liderazgos revolucionarios. 2°. Cambios de fondo en el aparato del Estado. 3°. Fortalecimiento de las organizaciones populares, (tener la Presidencia y el control de algunas instituciones no es tener aún el poder). 4°. Ampliar el piso político social del proyecto, (no bastan los militares y el pueblo llano). 5°. Definir líneas de política económica y social de impacto directo para las mayorías. Bueno, no quiero hacer un programa, solo algunas indicaciones que puedan ilustrar por dónde andan nuestras preocupaciones en este proceso.

Sabemos de las dificultades, de las debilidades y de las acechanzas, pero, si hacemos un gran esfuerzo que permita concentrar ideas y proyectos, la concreción de los cambios por los que hemos luchado toda la vida puede ser una realidad. Oportunidad como la que hemos labrado no es cosa fortuita, es de verdad un reto a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad creadora: a eso seguimos apostando. Si trabajamos duro en esta línea de pensamiento podemos hacer un extraordinario aporte a la civilización planetaria de la que nos habla Edgar Morin.

Chávez: una visión desde el llano

Explorar desde el Llano el proceso de la «era Chávez» es un ejercicio que tiene sentido desde varios ángulos. Por un lado, Chávez es nacido en el Llano, originario de estas tierras y fuertemente marcado por el acento popular de la cultura llanera. Desplegó buena parte de su profesión militar en el estado

Apure, específicamente en la población de Elorza, donde llegó a ser presidente en la organización de las fiestas de esta emblemática población llanera. Pero, además, porque la historia patria está muy marcada por el componente cultural llanero: no en vano la participación de los llaneros fue decisiva en el proceso de independencia nacional. E, igualmente, nos interesa esta visión por el porvenir, o al menos, lo que será el Llano en este proceso, su perspectiva.

Lo anterior tenemos que enmarcarlo en la yuxtaposición y entrecruzamiento de las líneas de pensamiento y de acción descritas anteriormente como las «lógicas de Chávez». Resulta obvio y evidente que el tinte popular de la lógica popular en Chávez está marcado por lo llanero. Las expresiones de esta cultura se manifiestan en su permanente referencia a sus antepasados, especialmente a Maisanta, su bisabuelo, guerrillero, luchador formado en las muchas iniciativas populares por derrocar el Gobierno de Juan Vicente Gómez. Pero, la referencia más emblemática es Zamora, quien vino de Cúa y supo unificar las guerrillas del Llano, escogiendo además este escenario para librar la contienda más democrática de los tiempos decimonónicos. Zamora, por supuesto, forma parte del ideario popular de Chávez: conocido como «valiente ciudadano», «general de hombres libres», entre otras denominaciones.

Hay otras manifestaciones, en este caso de índole personal, que nos hacen ver a un personaje muy identificado con diversos patrones de la cultura llanera. Una de ellas es su identificación con el canto llanero, con la música propia de estas tierras. En innumerables ocasiones, rompiendo todo protocolo, inclusive ya como presidente de la república, Chávez la interpreta, la baila, la hace suya como símbolo que no le es ajeno. Así como esta hay muchas otras que sería largo enumerar, sin embargo, basta esta muestra para ejemplificar lo que queremos decir.

Lo moderno en Chávez se nutre de dos elementos básicos. Uno, su formación militar de academia, institución que le marcará en una actividad y una cultura propia del proyecto modernizador implantado desde Gómez, con la profesionalización del ejército. Y el otro, su paralela vocación revolucionaria, asociada al contacto y a la vinculación con cuadros y partidos políticos de ese corte. Si al matiz popular de Chávez, le anexamos estos ingredientes, esto es, el militar y el revolucionario, no está muy lejana la conclusión acerca del origen del proyecto político que hoy encarna y que tuvo sus prolegómenos precisamente en esta síntesis.

Ahora bien, debemos distinguir el moldeado de su concepción moderna,

es decir, los orígenes de ella, de lo que es su actual aplicación y ejecutoria como gobernante. Aquí cabe destacar lo siguiente: aunque hay en Chávez un antecedente de fuerza, una rebelión, es por vía electoral, absolutamente pacífica, como accede al gobierno. Ello tiene necesariamente que incidir en las políticas del proyecto, pues él se encuentra con la herencia de un cuadro económico, social político y cultural (cuadro, desde luego, esencialmente moderno) que representa una rémora para el cambio radical. Aún cuando se desarrolló un proceso constituyente, todavía quedan muchas cosas por definir y por ejecutar, en lo que sería la profundización del proceso, como ya lo hemos dicho anteriormente. Sin embargo, en descargo de estas limitantes, debemos reconocer que este proceso se ha venido desarrollando en un marco internacional y «global» muy hostil, un dato de la realidad en el cual buscamos insertarnos sin perder nuestra originalidad.

En *Utopía*, revista de Douglas Bravo y otros, se señala el entreguismo de Chávez al capital transnacional. Al respecto decimos: esta es precisamente una de las camisas de fuerza de esta «revolución». El denominado «neoliberalismo» tiene múltiples tentáculos. Los componentes macroeconómicos de la administración, todo lo referente a categorías como control de cambio, doble tributación, deuda externa, relaciones con «la embajada», posición ante la inversión extranjera, balanza comercial, poderío militar, entre otras, obligan al Gobierno a tener sentido de sus proporciones. Este proceso, si quiere preservar la posibilidad de avance, de ampliar su rango de alternativas, tiene que ser bastante cauteloso; muy creativo en la búsqueda de opciones en un mundo bastante complicado. Definir el carácter de una revolución en estos tiempos, más que resolver un acertijo, es una tarea de imaginación e inteligencia. Por ello creo que las posibilidades de avances reales en este proceso estarán dadas por la comprensión de este entrecruzamiento de discursos, «lógicas», y datos del capitalismo global. Ya lo hemos planteado con anterioridad: es perentoria la definición de un rumbo y un modelo propio.

Con respecto a esto último el Llano y su cultura tienen mucho que decirnos, no solo como referencia histórica, o como nostalgia de un pasado épico, sino como paradigma de un proceso generado en las condiciones más adversas posibles, como lo fue la constitución de una sociedad y una cultura, en plena confrontación con el imperio de la época.

Claro está, lo que queda de aquel Llano mítico, una de las fuentes de la nacionalidad, es muy poco. Sin embargo, nos corresponde, si queremos ser

consecuentes con sus tradiciones libertarias, igualitarias y populares, no solo tenerlo como marco de referencia, sino, además, como afirmación permanente nuestra cultura. No nos imaginamos la edificación de un proyecto nacional sin este componente. Desde luego, no estamos idealizando el Llano, ni mucho menos pecando de anacrónicas añoranzas, solo indicando la importancia de reivindicar nuestro patrimonio en tiempos de reconstrucción de la patria. Creo que una de las claves para enfrentar con éxito los retos que exige el capitalismo global radica allí, en no abandonar nuestras especificidades.

La Revolución Bolivariana en el nuevo marco internacional

En forma lapidaria Luis Brito García titula su artículo del pasado domingo 16 de septiembre 2001, en el diario *El Nacional*, así: “Comenzó la cuarta guerra mundial”. La tercera fue la «guerra fría» y su característica básica fue desplazar los objetivos militares, de las grandes hecatombes hacia pequeñas guerras «limitadas». La cuarta, según este intelectual venezolano, se ceba en la población civil. En nuestra opinión esto es así, no solo por las implicaciones inmediatas que derivan de la atrocidad de los atentados perpetrados en Estados Unidos de América, sino, además, porque el «imperio» comienza a interiorizar que el fondo de la crisis, que ha conducido a estos actos terroristas, está mucho más allá de lo episódico y circunstancial.

Los reportes que nos llegan desde los círculos intelectuales y periodísticos de esa nación del Norte así lo indican. Las interrogantes que se formulan, entre otras son las siguientes: ¿qué falló en la comunidad de inteligencia? ¿De qué calibre debe ser nuestra respuesta? ¿Quiénes somos en el mundo? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Quiénes somos hacia adentro? Como vemos, preguntas que tocan los más sensibles temas de cualquier sociedad en trance de crisis, pero que aquí, en el epicentro de occidente, en la coyuntura actual adquiere una connotación dramática, pues está en juego la supervivencia de uno de los poderes más hegemónicos conocidos en la historia, pero además, están en duda los fundamentos identitarios de esa cultura.

Sus símbolos tradicionales, la libertad y la democracia, no son suficientes para intentar alinear al resto del mundo a su carreta imperial, pues una cosa son esos valores hacia adentro de la cultura «americana» y, otra, la dura realidad que le ha tocado vivir al resto del mundo, occidental o no, cuando en

nombre de esos valores se les sojuzga, atropella, domina, oprime, explota, y, a fin de cuentas, se les excluye de beneficios económicos y sociales, sin entrar a considerar otros.

Por lo señalado anteriormente, no basta la condena hecha exclusivamente al «terrorismo», en general, sin incluir, además, una condena igualmente drástica al «terrorismo de Estado», practicado en forma insolente y sostenida contra la mayoría de las naciones del mundo. Como observamos, el problema es esencialmente político, más que militar o de cualquier otra índole. Mientras exista una profunda desigualdad entre un grupo muy pequeño de naciones que usufructúan el poder y la riqueza a costa del padecimiento del resto del mundo, este será caldo de cultivo de conflictos cada vez más desgarradores. Como lo dice Heinz Dieterich: «Son costos que debe pagar Estados Unidos. No es posible explotar y reprimir a todo el mundo sin que algún día alguien, en su desesperación, decida golpear el corazón del sistema imperialista» (entrevista en *El Nacional*, Papel Literario, 15 de septiembre de 2001).

Lo anterior es preámbulo para ubicar la «revolución bolivariana» y, en particular su política exterior, en el marco de las relaciones internacionales, luego del 11 de septiembre del presente año (2001, N. del E.). Quizá sea prematuro para extraer conclusiones definitivas o para definir en términos concluyentes cuál será la ubicación de Venezuela en este escenario, sin embargo, hay que adelantar criterios y evaluar, al menos, el alcance de algunas posiciones ya esgrimidas por los adversarios al proceso político que vivimos.

Hay quienes sostienen que Venezuela debe alinearse en forma incondicional a la coalición tutelada por Estados Unidos de América. Postulan que nuestro país debe redefinir los lineamientos de su política exterior y despojarla de cualquier tipo de relación con aquellos países que adversen al país norteamericano o que, simplemente, difieran de su política exterior.

Colocar en blanco o negro las opciones de la política internacional no se corresponde con una lectura apropiada del mundo contemporáneo; por un lado, porque aún cuando se reconoce la imperativa necesidad de enfrentar la modalidad terrorista ejecutada en Nueva York y Washington, también se está ante el hecho cierto de la existencia de un mundo cada vez más acéntrico, menos dependiente de las directrices de una tutela mundial excluyente.

Como muy acertadamente lo señala Teodoro Petkoff:

Si algo demuestran los acontecimientos en curso es la necesidad de un

mundo menos unilateral. Si alguna conclusión deben extraer los Estados Unidos de la terrible ordalía que le ha tocado padecer es que en el planeta hay otros jugadores, cada uno de los cuales posee sus peculiares intereses y sus propios amigos y enemigos. (“Independencia”, *Tal cual*, 18 de septiembre de 2001).

Sin embargo, esa opinión no es compartida por las posiciones maniqueas de quienes, ante el nuevo escenario mundial, esgrimen la tesis del alineamiento incondicional y la solidaridad automática a las políticas que adelante Estados Unidos de América. Fausto Masó, por ejemplo, sostiene que:

Ahora sí Estados Unidos hará de policía internacional: buscará a sus enemigos donde se encuentren. Ya no disfruta de un espléndido aislamiento. No hay lugar para intentar crear un nuevo orden mundial, convocar a la unión latinoamericana alrededor de Cuba y Venezuela. Esa retórica hizo crisis [...] (“El mundo se puso chiquitito”, *El Nacional*, 15 de septiembre de 2001).

E, igualmente, Massimo Desiato, en la misma línea de opinión, señala:

El mundo se halla dividido en dos bloques: occidente por un lado, el terrorismo islámico por el otro junto a aquellos países que favorecen o simpatizan con dicho terrorismo. La pregunta es: ¿dónde está parada la «revolución bolivariana»? (“La revolución en el escenario internacional”, *El Nacional*, 16 de septiembre de 2001).

Paradójicamente, mucho menos drástica ha comenzado a ser la posición norteamericana, al comenzar a distinguir diferencias hasta entre los propios países islámicos, el presidente Bush en su país visitó una mezquita y la embajadora estadounidense en Venezuela hizo lo propio, lo cual revela la animadversión de los autores antes señalados a la «revolución bolivariana», más que un análisis ponderado de la situación internacional. E, inclusive, el ex canciller y ex embajador venezolano en Estados Unidos de América, Simón Alberto Consalvi, reconocido detractor del gobierno del presidente Chávez, ha sido bastante ecuaníme al decir:

Se abrirá un debate sobre cuál va a ser el papel de Estados Unidos en

esta nueva etapa, que todavía no podemos llamar nuevo orden mundial. Un reexamen: si se va a imponer la ley unilateralmente — cosa que yo creo que Estados Unidos no está en capacidad de hacer — o si se va a ir en efecto a un orden mundial producto de la concertación. Porque si ante la crisis de tolerancia que hay en el mundo no se recibe un impulso de los poderosos ¿cómo podemos reclamarle tolerancia a los demás? Ese es el punto de partida de la reflexión que suscita esta crisis. (Entrevista en *El Nacional*, 16 de septiembre de 2001).

El historiador Eric Hobsbawm dijo recientemente una sabia conclusión, al referirse al papel de los Estados Unidos de América en el siglo XXI:

[...] la exhibición de la fuerza ya no es suficiente para gobernar al mundo. Y no lo es ni para la superpotencia ni para las potencias regionales. Porque los pueblos de los países débiles no están dispuestos a doblegarse a sus intereses. (*Entrevista sobre el siglo XXI*, al cuidado de Antonio Polito, Barcelona, Editorial Crítica).

Estas opiniones tienen el peso y el rango que nos permiten concluir que la política exterior venezolana, aun en el nuevo marco de las relaciones internacionales, no tiene razón de ser modificada porque convenga o no a los intereses de los Estados Unidos de América. Una cosa es la condena a los atentados terroristas, la solidaridad expresada por el presidente Chávez al pueblo americano, la garantía del normal desenvolvimiento de las relaciones comerciales y el mantenimiento del flujo petrolero, y otra, una solidaridad automática a toda decisión de la clase gobernante de ese país. Sabemos, claro está, que van a producirse modificaciones sustanciales en la política exterior americana, pero de allí a sacrificar nuestra independencia hay un trecho largo. Teodoro Petkoff, anteriormente mencionado, y también crítico del Gobierno nacional, lo dice muy taxativamente:

Francamente, no vemos razón para ello. No hay que confundir las pintorescas e innecesarias alusiones y las, en ocasiones ignoradas apostillas retóricas que el presidente se permite con algunos de sus interlocutores internacionales, con los fundamentos de la política exterior. Hay dos de ellos que son esenciales hoy. Uno es la política respecto de la OPEP y el otro la procura de un mundo multipolar. (“Independencia”, *Tal Cual*, 18 de septiembre de 2001).

CAPÍTULO II

Golpe de Estado, proceso político y situación internacional

Ideas para la interpretación del golpe de Estado

1 El golpe reveló, entre otras cosas, la pervivencia de los factores de la • cuarta república. Desde cuando el presidente Chávez asumió el gobierno, hasta los hechos desencadenados el 11 de abril, los actores antes mencionados habían mostrado toda su aversión hacia el Gobierno y definido acciones para derrocarlo. Sin embargo, fue ese día cuando mostraron sus verdaderas intenciones y objetivos, los cuales se manifestaron teniendo como pretexto la concentración en Chuao, en el marco de la huelga general convocada por la CTV. Y, a pesar de estar enterados e informados, tanto el Gobierno como sus aliados políticos más relevantes, del desarrollo de un plan conspirativo y una acción golpista, no fue sino hasta entrada la tarde del día 11-A cuando se percataron de la envergadura y la gravedad del plan opositor.

Para tener una idea acerca del plan golpista, tomemos la declaración del general R. Baduel, del día 6 de mayo de 2002, *El Universal*. Dice:

Lo evidente es que la marcha iba organizada militarmente. Quienes estaban allí iban sin conocimiento de causa. En las tomas aéreas se demuestra lo que estoy diciendo. La ballena iba al frente como una punta de vanguardia, que es la forma como se define en el lenguaje castrense. Además, iban dos rinocerontes en una perfecta formación en cuña. Luego, una fuerza de co-

bertura, constituida por motorizados de las policías de varias dependencias. Más atrás iba otra fuerza de cobertura formada por policías de a pie. Y si uno ve con atención, se da cuenta también de que la marcha iba organizada en bloques. Hay informaciones que indican que, en el centro de esos bloques, iban entre ocho y diez personas con armas largas.

2. Coincidieron alrededor de los objetivos del plan golpista Fedecámaras y la CTV; partidos políticos como AD, Bandera Roja, Primero Justicia, COPEI, Proyecto Venezuela, La causa Radical, Unión; organizaciones de la denominada sociedad civil; sectores de la Iglesia; los grupos empresariales de los medios de comunicación y por supuesto el generalato de los componentes de la fuerza armada nacional. Y, además, por si fuera poco, hay la clara certidumbre de la actuación del Gobierno americano en la tutela y monitoreo del golpe.

De igual forma, es clara la identificación de agentes del capital financiero y de los perros de la guerra en la logística del mismo. En líneas generales puede decirse que se han manejado dos estrategias en la política de pretender desalojar al presidente del gobierno. Una esbozada por Álvarez Paz, quien ha manejado la tesis del golpe inmediato, como en efecto ocurrió, aún con el riesgo de fracasar. Este plan incluía, en el peor de los casos, fracturar el discurso chavista cuyo centro era el eje monolítico pueblo-FAN. Por supuesto, intentar, como los hechos lo demostraron, asumir el poder. Esta estrategia sigue en marcha, independientemente de la derrota. La otra, cuya elaboración atribuímos a Arias Cárdenas, está montada sobre el plan de desgastar al Gobierno y esperar el momento del referendo revocatorio.

3. De los resultados de las intensas jornadas que siguieron al derrocamiento de Chávez y su posterior restitución en el gobierno quedan algunos temas de urgente reflexión: ¿cómo restituir la unidad y confianza en el sector castrense en virtud de la grave fractura sufrida en su seno? Por provenir el presidente de ese sector y, además, por ser uno de sus principales aliados en el proceso, esta es una de las cuestiones a atender con la prioridad del caso. Se puede decir que la institucionalidad y Chávez fueron salvados en buena medida por la maduración política de la oficialidad media y la tropa de la fuerza armada, apegados a la institucionalidad. Pero, además, por el brutal impacto generado por los alcances antidemocráticos del gobierno de Carmona.

4. El otro gran punto de apoyo para la restauración del gobierno de Chávez fue sin duda la gruesa participación popular del día sábado, cuando en forma

casi espontánea los sectores afectos al Gobierno, teniendo como agentes movilizadores a los círculos bolivarianos, dieron respuesta a la acción golpista con concentraciones de masas en Miraflores, Maracay y el resto del país. Sin embargo, es conveniente resaltar que este movimiento de masas no hubiese logrado su cometido sin la presencia de una vanguardia política que diera orientaciones claras para restituir a Chávez en el Gobierno. Es preciso valorar la participación del PPT en la conducción de las acciones políticas de esos días. La dirección del partido aportó orientación y claridad de objetivos al movimiento de masas, tanto en la toma de Miraflores como en el resto de país.

5. El otro gran tema que perentoriamente hay que evaluar es la existencia de un cisma social de agudas dimensiones. Si bien es cierto que semejante división social no es atribuible en su origen a Chávez, sí lo es el que el clima de confrontación precedente a la acción golpista y sus posteriores resultados es un dato de la realidad política a ser atendido con urgencia, pues es caldo de cultivo de la inestabilidad y piso político de la oposición. Este problema debe ser atendido con celeridad y con políticas definidas para determinados sectores. Se ha planteado la política de reconciliación y diálogo nacional, la cual examinamos en otra parte.

6. Punto especial en el examen del golpe y sus consecuencias lo merece la crv. Entre otras razones por haber sido la convocante de la huelga general, pero, además, porque precisamente una de las grandes debilidades del Gobierno y de sus aliados es la carencia de una fuerza de trabajadores que se haga respetar como tal. Con relación a lo primero, es clara la vinculación de Ortega con el plan conspirativo y su participación como ariete de la «contra», sin embargo, por el hecho de haber sido excluida en la integración del gobierno provisional, lo deja en una situación cuyo grado de incertidumbre lo debilita grandemente. Puede decirse que perdió legitimidad, espacio político y cohesión interna. Se perdió una coyuntura o momento para tomar la crv el día de la restitución del presidente, ese hubiese sido el día apropiado para que las fuerzas bolivarianas desalojaran a la directiva espúrea de la crv.

7. Desde el lado del Gobierno este es el momento para definir una política coherente para organizar a los trabajadores. El llamado a huelga general y el golpe comenzaron a aclarar las aguas en el mundo de los trabajadores, ello lo refleja la posición asumida por los principales sindicatos del país: Sutiss, Fedepetrol, Sindicato del Metro, etc. De cara al 1º de Mayo no hay que contentarse con una gran manifestación favorable al Gobierno, es preciso definir una

política tendiente a constituir el Congreso de Trabajadores, cuyo fin sea dotar al movimiento de una dirección que les sea propia, que les exprese realmente. El apoyo oficial a través del Ministerio del Trabajo puede ser una palanca importante para tal fin.

8. Capítulo aparte en el análisis de la acción golpista lo merece la actuación del Gobierno americano y sus agentes. De lo reseñado por la prensa del país del norte y de las declaraciones de funcionarios de alto rango ese Gobierno se deduce que aquí se ha repetido la secular historia del intervencionismo americano en los asuntos internos de nuestro país. En la medida de la importancia estratégica de Venezuela, en su condición de país petrolero, se asociaron intereses para producir una huelga petrolera donde estamos seguros tenía sus manos el capital transnacional y la inteligencia americana. Los nombres de Giusti, Quiroz, etc., dicen mucho de la concepción de la política petrolera que está asociada a los principales dirigentes de la huelga. De allí que interpretemos el nombramiento de Alí Rodríguez como una señal de reafirmación de la *Ley de Hidrocarburos* por parte del Gobierno, a la par que una política para la estabilización de nuestra principal fuente de divisas.

Preocupa la restitución plena de los agentes golpistas en Pdvsa. Ya los trabajadores comenzaron a recoger firmas y a utilizar mecanismos de presión para denunciar esta situación. Es necesario clarificar con el presidente de la industria la política en relación a los reenganches.

Cada día son mayores las evidencias de la intervención americana en el plan golpista y en su intención de liquidar políticamente a Chávez. El diario *El Nacional* (A, 22 de abril de 2002) reseña la carta enviada por el encargado de negocios de Venezuela en Washington, Luis Herrera Marcano, al contralmirante Carlos Molina Tamayo, donde se expresan las simpatías de Phillip Chicola, funcionario del Departamento de Estado, hacia el gobierno de Carmona. Según la misma fuente se solicitó copia de la renuncia del presidente Chávez.

9. Es obvio que la coyuntura política está signada por la inestabilidad, la posibilidad de una nueva intentona o de otros métodos de subversión. El Gobierno ha anunciado una política de reconciliación cuyos límites deben ser ponderados y no presentados como síntoma de debilidad, pues una cosa es patrocinar mesas de diálogo para la discusión de ideas y de políticas y otra ceder en los logros alcanzados, como por ejemplo la *Ley Habilitante*. De otra parte, no se debe ceder ante las responsabilidades en el golpe de Estado. El

marco de referencia es la Constitución y las leyes, quien aupó el golpe y tenga responsabilidad que responda por ellas.

10. Otro aspecto fundamental para el análisis del golpe es el de las relaciones internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con la actuación y posición de los Gobiernos de los distintos países ante la acción golpista. Sorprende la posición inmediata de México y Perú. No así la posición de Aznar y los sectores conservadores de Colombia asociados a la filiación de Carmona con el Opus Dei. Es preciso sacarle provecho a la carta democrática de la OEA, deslindando con la posición americana. Lo de Cuba y China es otra cosa.

11. Si bien es cierto que el Gobierno salió debilitado del trance golpista y su discurso político central referido a la unidad pueblo-fuerza armada quedó maltrecho, también lo es el que la oposición, de igual forma, quedó golpeada y dividida. Pero, es preciso distinguir aquella oposición cuya línea de acción sigue siendo de corte golpista de la que de alguna manera adopta una posición institucional. Esta distinción es importante hacerla porque uno de los escenarios donde se librarán en lo inmediato fuertes confrontaciones será en la Asamblea Nacional. Allí hay que tener la pericia y la cautela necesaria para mantener aliados como el MAS-MAS, atender una posible desertión de miembros de la V República, así como atender el sector miquilista, en cual ya anunció su separación de la V República. En general, puede decirse que el Gobierno debe actuar con dureza contra los sectores golpistas y con inteligencia y moderación con la oposición institucionalista, nos referimos, claro está, a aquella oposición no patrocinante del golpe constitucional.

Los bastiones más golpeados por la derrota del golpismo fueron: el generalato de las FAN, el empresariado y los medios de comunicación. Sin embargo, no puede concluirse que recibieron una derrota aplastante, más bien, no solo tienen capacidad de recuperación, sino que conservan, al menos en el caso de los dos últimos mencionados, sus fuerzas y sus políticas intactas.

12. En el período posgolpe pareciera que la estrategia de la oposición, tanto en el plano interno como en el internacional, es la de cobrarle al Gobierno los muertos del 11-A. Es decir, alinear esfuerzos y políticas para hacer aparecer al Gobierno como el responsable político de tales hechos sangrientos, para ello se preparan acciones en el plano de las organizaciones civiles, en la OEA, en la Asamblea Nacional y otros escenarios. El objetivo final de tal política sería el eventual enjuiciamiento del presidente. El Gobierno debe moverse

rápidamente para contrarrestar esta línea de acción opositora, no dejar que otros le tomen la iniciativa.

De igual manera, la línea opositora avanza en la dirección de un referendo consultivo cuyo objetivo sería la descalificación política del presidente. El escenario político actual no es el apropiado para tal consulta, se debe insistir en la política de diálogo, apertura, mediación con los sectores, sin menoscabo de la independencia del Gobierno para continuar sus iniciativas de cambio.

13. El Gobierno debe propiciar un ambiente de diálogo y de tolerancia con los sectores nacionales interesados en el fomento de la estabilidad política y allanar el camino para tal fin. Una medida política es la de hacer en lo inmediato cambios en el gabinete. Se debe cambiar el vicepresidente, el ministro de Interior y de Justicia, atender con prontitud el gabinete económico. También evaluar los cambios necesarios en aquellas instituciones y espacios gubernamentales hasta dónde llegó la influencia de los golpistas produciendo resquebrajamiento institucionales. Los ministros deben poner sus cargos a la orden para facilitar las cosas.

14. Cobra cuerpo la tesis del magnicidio. No es descartable una acción de este tipo pues la concepción golpista y destabilizadora no cesará en su propósito de sacar del juego al presidente. Inteligencia, prudencia y medidas de seguridad son en este caso obvias recomendaciones. Hay acumuladas evidencias en cuanto a que ese era uno de los propósitos del plan del golpe y no hay razones para abandonar la idea de la persistencia de tal objetivo. De la misma manera, otro aspecto del plan golpista era secuestrar al presidente y enjuiciarlo por el delito de genocidio y complicidad con el narcotráfico y la guerrilla colombiana, calificación de terrorismo era el otro cargo.

15. En cuanto al problema de los medios, cuya línea editorial sigue siendo, no solo adversa al Gobierno, sino, además, vinculada a la subversión, es preciso definir algunas acciones: presionar por la vía de las concesiones, tomar las medidas disciplinarias del caso y en casos de flagrante violación a la normativa, cierre definitivo. La otra vía es la de la negociación, camino más engorroso. Las matrices de opinión siguen básicamente las mismas pautas pregolpistas: renuncia del presidente, recorte de su mandato, referendo consultivo, legitimidad de la crv, la violencia de los Círculos, vínculos con la guerrilla, relaciones con Cuba, etc.

Mayo 2002.

Esquema preliminar para el análisis de la coyuntura política

1. El signo y la principal característica del momento político es la inestabilidad. El plan golpista sigue su curso por otras vías.

Los principales indicadores son:

1.1. Reagrupamiento de la oposición alrededor de una coordinadora de partidos políticos cuyo objetivo central es el golpe constitucional. La línea a seguir es buscar la mayoría en la Asamblea Nacional, por cualquier vía, a fin de producir una enmienda constitucional que produzca un recorte del mandato y un referendo consultivo o revocatorio, a fin de relevar de su cargo al presidente y al resto de los poderes públicos.

1.2. Fortalecimiento de la CTV y su principal liderazgo, Carlos Ortega. El presidente de esa organización sindical deslinda definitivamente con la Comisión de Diálogo al firmar el documento de la oposición y avalarlo, además, como miembro del buró sindical de AD. Si a esto se agrega la conflictividad laboral y la difícil situación económica y fiscal, tenemos un panorama explosivo.

1.3. Existe una fractura en el estamento militar difícil de restañar en el corto plazo. La oposición apuesta a encontrar respaldo dentro de la FAN a su plan político, puede decirse que trata de convertirse en el hilo conductor del golpismo dentro y fuera de la institución armada y se aprovecha del cisma dentro de ella para alentar su propósito.

1.4. Las fuerzas afectas al Gobierno y al proceso lucen debilitadas, no ha sido suficiente la restitución presidencial y la política del diálogo para robustecer la posición oficial. Hoy, más que nunca, es preciso cohesionar una dirección política de vanguardia, apta para desempeñarse ante cualquier escenario.

2. Los factores de orden internacional preparan la intervención de Venezuela.

2.1. La CIDH en su informe preliminar orienta sus conclusiones a descalificar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Sobre todo en el campo de los derechos humanos, libertades sindicales y libertad de expresión. Se cocina un informe adverso al proceso venezolano el cual sirva de marco

al reconocimiento a un gobierno de transición una vez consumado el golpe constitucional.

2.2. La participación de la embajada americana y otros factores de poder externo en las acciones desestabilizadoras no han cesado. Son demasiadas y elocuentes las evidencias de su participación en el tutelaje de las acciones golpistas para pensar que van a abandonar tal propósito.

3. Sigue planteado el escenario del magnicidio.

3.1. Este escenario tiene como propósito generar un caos político y eventualmente una guerra civil que justifique la intervención extranjera. La política exterior de Estados Unidos busca limpiar de opositores su política del ALCA, esta sería una manera de despejar el camino en Venezuela. Ya lo hicieron en Argentina, golpeando el Mercosur.

4. La matriz de opinión en los medios continúa la línea de la oposición.

5. De igual modo, las acciones convocadas por la mayoría de las asociaciones civiles continúan con mucha fuerza.

Conclusión: Parece inevitable una nueva acción golpista, vamos hacia una confrontación.

¿Qué hacer?

1. Agotar todos los esfuerzos por consolidar la dirección política del proceso. Tiene que ser una instancia distinta al Consejo de la Revolución, la cual ha resultado superada por los hechos. Hay que constituir, más allá de las reuniones con los secretarios de los partidos, un eje político-militar que aglutine las fuerzas oficiales, afectas al Gobierno, partidos, redes populares, círculos, sectores militares, quienes deben elaborar políticas y programas para la conducción del proceso.

2. Delimitar claramente el carácter táctico de la política del diálogo. No es posible otorgarle bondades ilimitadas a esta política cuando los principales actores de la oposición golpista públicamente han tomado distancia de ella.

3. Organizar una ofensiva diplomática y de opinión mundial para que-

brar el intento de ahogar el proceso con los informes y decisiones de la CIDH y de la OEA.

4. Darle prioritaria atención a los principales conflictos sindicales y sociales que puedan ser utilizados como instrumentos de lucha antigubernamental.

5. Estudiar la no renovación de algunas concesiones otorgadas en el pasado a determinados medios de comunicación cuya línea opositora es de abierto compromiso con el golpismo.

6. La FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores) debe emprender, previa elaboración de un plan, una campaña que desenmascare a Ortega. Pensar en voceros como los dirigentes de Sutiss, Sintrametro, Fedepetrol, entre otros, quienes, si bien es cierto, no son de la FBT, aparecieron como importantes aliados el 11 de abril.

7. Los anuncios de la política económica hechos por los nuevos ministros del gabinete económico nos remiten a grandes proyectos e inversiones cuantiosas en el área gasífera y petrolera, entre otras. Revisar todos los proyectos de menor escala, con un impacto social inmediato, atascados en el Banderes y otros organismos financieros para la PYMI (Pequeña y Mediana Industria).

Mayo 2002

2.1 Diálogo

El diálogo nacional: ideas preliminares

Es obvio que la coyuntura política esta signada por la inestabilidad, existe la posibilidad de una nueva intentona, u otros métodos de la subversión. El Gobierno ha anunciado una política de reconciliación cuyos límites deben ser ponderados y no presentados como síntoma de debilidad, pues una cosa es patrocinar mesas de diálogo para la discusión de ideas y de políticas y otra ceder en los logros alcanzados, como por ejemplo la *Ley Habilitante*. Al momento de redactar estas líneas, el vicepresidente de la Asamblea Nacional está anunciando un acuerdo con Fedecámaras para la modificación de diecisiete leyes. De otra parte no se debe ceder ante en las responsabilidades ante el golpe de Estado. El marco de referencia es la Constitución, quien aupó el golpe y tenga responsabilidades que responda por ellas.

1. Los temas de la agenda para el diálogo.

Temas asociados a la producción: empleo; petróleo; agricultura y pesca.

Empleo: alrededor de este tema gravitan por supuesto los principales agentes de la producción, organizados o no. Están los grupos económicos organizados alrededor de las principales organizaciones empresariales: Fedecámaras, Fedeindustria, Consecomericio; pero también están los pequeños y medianos productores y comerciantes no afiliados y el sector de la economía informal. Corresponde a la Comisión de Diálogo Nacional, y a los ministros vinculados a este tema, Finanzas y Producción y Comercio, establecer las normas para este diálogo, sin embargo, la Comisión debe llevar algunas propuestas elaboradas. Inversión, créditos, estímulos, etc. Hay que incluir a la banca privada como un agente particular del diálogo, es depositaria de recursos financieros del Estado. Interrogante: ¿quién representará a los desempleados?

Petróleo: el nuevo presidente de Pdvsa ha adelantado algunos criterios con relación a la definición de una política para la empresa, sin embargo, por involucrar a los trabajadores, a la empresa privada y al propio Gobierno (en razón de su dependencia financiera) es conveniente concertar algunas políticas para su estabilización definitiva. La participación de los trabajadores es uno de los temas de mayor importancia política en este diálogo.

Agricultura y pesca: Este es un tema fundamental, están en juego el abastecimiento y la soberanía alimentaria. A los actores tradicionales de la producción en este sector: Fedenaga, Fedeagro y Fedepesca, se agregan actores artesanales, cooperativas y productores no afiliados a los gremios mencionados. El Estado debe tener presencia, además de la Comisión Nacional, con el MAT (Ministerio de Agricultura y Tierras) y el INTI (Instituto de Tierras). Quizás haya que plantearse alguna reforma puntual en la *Ley de Tierras*. Interrogante: ¿participarán los Comités de Tierras? ¿Cómo escoger su representación?

Nota: En cada uno de estos temas es importante considerar la participación de representantes de las comisiones respectivas de la Asamblea Nacional. De la misma manera, en cada una de las mesas de diálogo.

1.2 Temas asociados a la política comunicacional: línea política de los

medios; línea comunicacional del Estado; otorgamiento o renovación de concesiones.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los medios está bajo control de la empresa privada y enfrentados a la acción de Gobierno, este es uno de los puntos más álgidos a considerar. Aquí, el Gobierno debe negociar un armisticio, caso contrario presionar por la vía de las concesiones o de las sanciones. Otros Gobiernos lo han hecho. Incluir entre los actores del diálogo a los trabajadores de prensa, radio y televisión. Se debe plantear el tema de la línea institucional que deben preservar todos los medios, aun cuando hay libertad de expresión, ella tiene sus límites en la Constitución y las leyes.

1.3 Temas referidos al área laboral: seguridad social; salario mínimo; relaciones de los trabajadores con el Estado y su respectivo ministerio. Representatividad sindical.

La tarea del Gobierno en este campo es el construir una clara línea de acción tendiente a deslindar de la concepción gestora-burocrática del Ministerio del Trabajo, por un lado, y, por el otro, a sentar las bases para un posicionamiento de una representación distinta del sindicalismo tradicional. La convocatoria para una mesa de diálogo de los trabajadores es de vital importancia estratégica para el Gobierno, quizá la de mayor envergadura. Una cosa es que el presidente se reúna con Ortega y otra que los trabajadores desarrollen autonomía frente a la ilegítima ctv. Puede pensarse en una convocatoria desde el núcleo duro irradiando hacia sectores independientes de la cúpula sindical. ¿Y, por qué no, a sectores seleccionados entre los sindicatos legitimados?

1.4 Temas referidos al sector público: descentralización; seguridad ciudadana.

El tema de la descentralización sigue siendo esencialmente político, puede decirse que, junto al escenario de la Asamblea Nacional, este es uno de los más candentes de la política nacional. Aquí se juntan no solo el problema de la concepción de la descentralización, se plantea el debate entorno a la hacienda pública regional y la reforma a la ley del Fides (Fondo Inter-gubernamental para la Descentralización). Es conveniente considerar serios problemas regionales y municipales atinentes a los pasivos laborales y otras deudas de carácter social que deben evaluarse a la hora de bajar los recursos. Así como los planes y programas de inversión del sector público en los estados y municipios.

En cuanto a la seguridad ciudadana, aun cuando parece un tema exclusi-

vamente policial, es preciso decir lo siguiente: hay dos cosas que resolver, por una parte, el problema de la Policía Metropolitana y, por el otro, el desarme de las policías municipales de todo el país. Al respecto el doctor Iván Andrade presentó un plan al Gobierno el cual puede ser retomado. Los actores evidentemente son los alcaldes, el MIJ (Ministerio de Interior y Justicia), la Guardia Nacional y la propia comunidad organizada que puede ser un factor importante en este caso.

1.5 Temas del ámbito político: Asamblea Nacional, partidos Políticos, Embajada americana.

En cuanto a la Asamblea Nacional es claro que el interés opositor se trasladó hacia este escenario. Le sale al Gobierno y a sus aliados manejarse con criterios de prudencia, búsqueda de apoyos, recuperación de fuerzas y mucha cautela, por el hecho de ser actores de naturaleza política, desafectos al Gobierno. La capacidad de negociación y de diálogo lo dará la coyuntura política. El escenario se torna difícil ya que el sector miquilenista anunció tienda aparte, además, el MAS-MAS también anda elaborando política y haciendo acuerdos al margen de la línea del Gobierno.

Uno de los puntos de mayor urgencia a resolver es el de la integración de la directiva del CNE, entre otras cosas por la incidencia que esto tiene con la situación de la CTV.

El tema de la embajada americana, por ser un tema de alta política debe ser tratado y manejado con la sutileza del caso. Sin embargo, es conveniente no perder de vista la posición adoptada por el Gobierno americano ante el golpe y las implicaciones que tiene esto en la política continental. Enfatizar el apoyo que tuvo la institucionalidad democrática en el marco de la carta de la OEA por parte de los países latinoamericanos.

1.6. Educación y salud: Aunque pueden ser tratados en comisiones diferentes, por la similitud de problemas, pueden ser afines sus temáticas. Uno de los más serios inconvenientes en ambos casos lo constituye la composición política de las respectivas dirigencias gremiales, ambas vinculadas a la oposición. Aquí, el Gobierno debe plantear la necesaria reestructuración de los ministerios respectivos, colocando esto en el centro de la agenda y, en ambos casos, colocando como norte la calidad y eficiencia de sus políticas.

Caso especial, por estar incluido en el Ministerio de Educación, es el tema de la cultura. Este es el momento de impulsar desde el Gobierno un agresivo plan de transformación cultural. Colocar este tema como una prioridad en la

mesa de diálogo. Con una orientación formativa hacia el apego a los valores ciudadanos y constitucionales, con el estímulo centrado en la participación como instrumento democrático.

Ideas para la discusión con relación a la política de diálogo nacional propuesta por el Gobierno

1. Clarificar si diálogo y reconciliación tienen un carácter táctico o estratégico. Es decir, precisar si esta política nos lleva a una suerte de concertación o de negociación con las fuerzas de la contra, liquidando progresivamente las líneas de cambio planteadas en el proceso o, por el contrario, forman parte de un plan cuyo objetivo inmediato es ganar tiempo para estabilizar al gGobierno y al país. Darle un respiro al Gobierno para enfrentar retos de mayor profundidad.

Los conceptos de diálogo, rectificación, concertación y reconciliación, nos remiten a una concepción de la política cuya acepción más amplia es el relajamiento de las tensiones, la disminución o anulación de la conflictividad. Se entiende que en una situación de crisis como la actual el Gobierno busque la paz necesaria para sobrevivir a los efectos del golpe, tanto en el plano institucional como en todos los planos de la vida social; pero las preguntas que nos inquietan son las siguientes: ¿podrá el Gobierno atenuar o disminuir la gravedad de la crisis?, ¿podrá resistir con esta política la embestida de una oposición cada vez más centrada en su propósito de salir de Chávez? Parece claro que la ofensiva en este momento la tiene la oposición, ¿hasta dónde llegará la capacidad de aguante del Gobierno, cuál será el límite de su política conciliatoria? Y, más aún, en este marco, ¿cómo impulsar las políticas de orden estratégico?

Lo anterior nos lleva a la definición o caracterización del momento político que vivimos. Si observamos los principales actores y protagonistas del proceso y cuáles sus objetivos y actuaciones, podemos concluir que la situación actual puede ser definida, en términos clásicos, como una etapa o período de carácter democrático-nacional.

La principal referencia política para tal definición la otorga la defensa del orden constitucional. Es decir, tener como marco de referencia la Constitución, tanto en el plano de las tareas democráticas como las nacionales, son de por sí definitorias en ese sentido.

Esto se desprende, además, de considerar las fuerzas sociales y políticas que le sirven de soporte al Gobierno: por un lado un sector de los militares, quienes actuaron en la restitución del orden constitucional y del propio Gobierno y de otros sectores populares organizados básicamente en Círculos Bolivarianos, cuyo papel también fue determinante en la reposición del régimen.

Hay que considerar como un elemento significativo la posición asumida ante el plan golpista por los trabajadores de Sutiss, Fedepetrol, Sintrametro, entre otros, quienes al deslindar de la CTV, se convirtieron en dato relevante de esta coyuntura porque permite avizorar un papel más definido de este sector en las definiciones a futuro del proceso.

Las organizaciones políticas afectas al Gobierno, de igual manera, asumieron la tarea de defender al Gobierno y sus instituciones ante la arremetida golpista de carácter fascista y antidemocrático. Y hoy, a la luz de la coyuntura actual, este parece ser su principal objetivo porque el plan derechista de derrotar al Gobierno y sus aliados no ha cesado. Además, porque en este momento hay tareas que pueden desplegar los partidos, no así el gobierno nacional.

2. En el plano estratégico el proceso nos lleva inevitablemente a una confrontación con los intereses de Estados Unidos. Esto por varias razones: la hegemonía continental expresada en la política de la integración económica hemisférica: ALCA. En este marco el proyecto nacional dirigido por Chávez colide con las pretensiones americanas de un mercado único tutelado por Estados Unidos. Una segunda razón está en la condición de Venezuela como país productor de petróleo y, más que eso, como gran suplidor de crudo al mercado americano. Esto último constituye razón de peso para toda clase de políticas intervencionistas de carácter económico, militar, diplomáticas, entre otras. Como en efecto quedó demostrado con el golpe del pasado 11 de abril.

Está claro, como lo han referido comentaristas internacionales, así como diversas publicaciones americanas, y como progresivamente los propios hechos lo han demostrado, la participación de la embajada americana en el asesoramiento, participación y monitoreo del golpe de Estado del 11 de abril. Parece claro también el olor petrolero del golpe. No es una casualidad que el presidente americano, vinculado como inversionista privado al negocio petrolero, desde los primeros momentos de la acción golpista estuviera declarando a favor del nuevo Gobierno. Ni tampoco que el principal foco desestabilizador estuviera localizado en una huelga en Pdvsa y cuya dirección

estuviera centrada en los cuadros gerenciales vinculados a los intereses de las transnacionales del petróleo y sus agentes criollos. A la par que aparecen mezclados en las acciones golpistas conocidos empresarios y personeros vinculados al negocio petrolero.

Las preguntas obligadas en este escenario son las siguientes: ¿habrá diálogo con la embajada americana?, ¿cuáles serán los términos de las relaciones bilaterales en la coyuntura actual?, ¿cesará el intervencionismo americano en los asuntos internos de nuestro país? Si el plan americano de imponer el ALCA, pasando por cualquier pretensión nacional o de integración latinoamericana es un hecho, las respuestas a las preguntas anteriores solo tienen una dirección: doctrina Monroe, América para los americanos. En otras palabras, vamos a una confrontación.

3. La oposición se reorganiza para dar la batalla por la salida del presidente y la liquidación del proyecto en otros escenarios. Uno de ellos es el de la OEA, intentando descalificar a Chávez cobrándole los muertos del golpe de Estado, apelando para ello a la Carta Democrática, haciendo ver que no hay respeto a los derechos humanos y al ejercicio de la democracia representativa. De otra parte, según Jorge Olavarría, la acusación que preparan un grupo de abogados ante la Corte Penal Internacional establecería que bajo las órdenes directas del gobierno de Chávez se ha financiado, tutelado y encubierto grupos dedicados a la violencia, responsables de los disparos desde Miraflores el día 11 de abril. Esto en lo que respecta a las acciones de carácter internacional.

El otro gran escenario es el de la Asamblea Nacional, allí el recuadre de las fuerzas políticas puede llevar a colocar al Gobierno en minoría y eventualmente a nombrar una directiva adversa cuyo propósito sería enjuiciar al presidente y sacarlo del juego. El plan para el derrocamiento de Chávez ahora se trasladó hacia la utilización de los resortes constitucionales para ahogar el proceso político de cambios. Primero Justicia y Copei tienen el propósito de adelantar un recorte del mandato presidencial. Otros siguen insistiendo en la fórmula de la renuncia y, de igual modo, se adelantan acciones para remover al Fiscal y a otros funcionarios. El objetivo sería promover un juicio al presidente y dar un «golpe constitucional».

Aquí el Gobierno debe manejarse con tino a la hora de conservar en lo posible la mayoría en la Asamblea Nacional. Conservar como aliados al MAS-MAS, PPT e inclusive no descuidar las relaciones con el sector miquilenista.

Fórmulas diversas existen para ello. Conversar igualmente con los votos de la tendencia del gobernador del Zulia en la Asamblea Nacional.

No se puede aceptar el chantaje de Fedecámaras y la crv para sentarse en la mesa nacional de diálogo. Su inasistencia a la primera reunión convocada en Miraflores es un claro signo de intemperancia y, más que eso, una clara evidencia de no querer abandonar sus planes golpistas. Hay que continuar con una convocatoria selectiva a sectores del empresariado y de los trabajadores dispuestos a una política de acercamiento y conciliación en torno a objetivos nacionales.

4. El Gobierno, cuidando la observancia de las formas democráticas, debe dar certeros golpes a los golpistas, de manera ejemplarizante y, además, desarmando políticamente a los principales adversarios del régimen. A veces da la impresión de una gran debilidad del Gobierno, esto debe verse con cuidado, pues, si la oposición lo percibe como un dato cierto, estaríamos dando una ventaja nada recomendable al enemigo. Lo anterior es ya un reclamo de fuerzas diversas que intervinieron favorablemente en la restitución del Gobierno y no ven la suficiente diligencia en el castigo a los responsables del golpe. Dos cosas no se deben descuidar: una, la relación con los sectores militares que reivindicaron al Gobierno, hacerlo sería de alto riesgo. Y otra, el fortalecimiento de las organizaciones populares que no solo restituyeron al Gobierno, sino que son su principal soporte político.

5. Si eventualmente ocurre una salida de Chávez por vía constitucional hay que tener algunas respuestas políticas: ¿qué haría Chávez, entregaría mansamente el poder?, ¿qué harían sus aliados más importantes?, ¿si se plantea la realización inmediata de elecciones, cuál sería la política a seguir? Hay que examinar el escenario del «gaitanazo». ¿Cuáles serían los métodos de la lucha política en este caso? Estos son problemas de dirección política los cuales deben ser cuidadosamente estudiados. Sin embargo, si bien es cierto que hay que pasearse por todos esos escenarios, lo prioritario es adelantar una política de estabilización política (diálogo nacional) que permita recobrar fuerzas, sedimentar la dirección política del proceso, afianzar las alianzas estratégicas y, sobre todo, definir con claridad qué hacer de cara a lo estratégico.

2.2 Marchas de julio y octubre de 2002

11 de julio de 2002

Análisis de los principales actores

Oposición:

1. *Principal objetivo.* La derrota sufrida por la oposición en el frustrado golpe de Estado del 11 de abril pasado no ha sido freno para que cese en su principal objetivo, el cual básicamente sigue siendo el mismo: *derrocar el Gobierno legal y legítimamente constituido del presidente Chávez.*

Por el contrario, progresivamente ha venido delineando con mayor claridad y precisión esta demanda fundamental, tal como se expresa en el remitido de prensa, publicado en los diarios de circulación nacional del pasado domingo 7 de julio de 2002, donde se resumen los principales elementos programáticos de la denominada *Coordinadora Democrática Venezolana*, integrada por diversas asociaciones civiles y partidos políticos y cuya principal demanda es la renuncia del presidente.

2. *Opciones de la oposición:* Lugo del golpe de Estado la oposición ha barajado varias posibilidades constitucionales para la salida del presidente, entre ellas: referendo consultivo, enmienda constitucional, referendo revocatorio. Sin embargo, luego de diversas consultas y ensayos, los escenarios se han reducido básicamente a dos:

2.1. Enjuiciamiento del presidente. O bien por la supuesta masacre del 11 de abril o por cualquiera de las otras denuncias interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

2.2. *Desobediencia civil o abierta rebelión.* Está muy claro que el principal objetivo de la marcha programada para el jueves 11 de julio está dirigido en esta dirección y su fin último es la toma del Palacio de Miraflores.

En cuanto a la primera opción: las posibilidades de éxito son remotas, por un lado, porque es indemostrable que el presidente ordenó los disparos que costaron la vida de personas y, por el otro, porque ya existe la advertencia de sectores militares afectos al Gobierno en el sentido de desconocer cualquier intento jurídico carente de la suficiente base constitucional y legal.

En relación a la segunda opción, la cual es la más inmediata y la que nos ocupa con mayor atención en los próximos días, esto es, *convertir la marcha del día 11 de julio en una abierta rebelión civil contra el Gobierno*, una insurrección. Es

conveniente detenerse en las siguientes consideraciones:

a) El día jueves 3 de julio se realizó una reunión de la oposición donde entre otros se contó con la asistencia de Cecilia Sosa, Rafael Marín, Antonio Ledezma, etc. Y cuya principal conclusión fue IR CON TODO a la marcha, es decir, concentrar el mayor número de personas y de recursos con el propósito de tomar Miraflores. Incluso se han habilitado escaleras para facilitar el acceso al palacio. Está circulando un instructivo acerca de lo que debe hacer la población para ese día.

b) El objetivo concreto de esta acción de calle es provocar un escenario donde el Gobierno se vea en la obligación de reprimir a los manifestantes con los componentes de la fuerza pública y si hay muertos cargarle la responsabilidad.

c) Es completamente factible que factores de la oposición introduzcan francotiradores o cualquiera otra modalidad de agentes saboteadores para propiciar el caos, el desorden y la anarquía.

d) La oposición también se plantea adelantar algunas acciones huelgarias en sectores claves de la economía en días cercanos o coincidentes con el propio día de la marcha, sin embargo, a la luz de el análisis, se estima que en algunos sectores claves como transporte, Metro y Cantv, ello no ocurrirá.

e) También es conveniente destacar que por la heterogeneidad política de la marcha algunos actores o focos podrían actuar en forma independiente y con objetivos propios, caso Bandera Roja, Carlos Melo, entre otros, a fin de generar el clima de guerra civil que se pretende crear.

f) Cecilia Sosa, actuando como uno de los principales voceros de la oposición, ha llamado abiertamente a la constitución de una Junta Ciudadana de la Desobediencia Civil que señale los asuntos que los ciudadanos deben dejar de atender como acciones de Gobierno, entre otras, impuestos, reforma educativa, respeto a la normativa, etc.

g) Consideración especial merece el tratamiento dado por la oposición a la Misión Carter. Por un lado, la invitación que hace la Coordinadora Democrática Venezolana al ex presidente Carter es decirle directamente «acompañenos a derrocar al presidente Chávez, incorpórese a nuestra marcha opositora» y, por el otro, esto hay que interpretarlo como un abierto rechazo a la mediación de Carter en el conflicto político venezolano. Inclusive Carlos Ortega llega a ridiculizar la proposición de invitar a un grupo de notables, indicando que se debería convocar a Fidel Castro, Sadam Hussein y Mohammed Gadafi.

Luego, la denominada Coordinadora Democrática Venezolana rechaza de plano la propuesta del ex presidente Carter de convocar a una reunión de la oposición con el presidente Chávez. En su lugar plantea la mediación de la OEA argumentando el carácter vinculante que tienen para sus miembros las decisiones que en su seno se tomen.

Manuel Felipe Sierra lo dice taxativamente: «La única mediación posible es a través de la OEA y la eventual aplicación de la Carta Interamericana de Lima». (“El mediador iluso”, *El Nacional*, D 1, 09 de julio de 2002).

Esta posición de la oposición puede interpretarse como un alineamiento político con el Partido Republicano y el gobierno del presidente Bush, quienes a la luz de múltiples evidencias estuvieron entre quienes patrocinaron el golpe de Estado.

De la misma manera es concluyente que *la oposición no quiere diálogo*, es decir, quiere imponer al Gobierno, no solo las condiciones de este, sino, además, los posibles interlocutores. Y, más que eso, imponer a rajatabla su línea política con sus propios aliados internacionales. Es como decir: nosotros seguimos en la misma línea golpista, salir de Chávez a como dé lugar.

Al menos los partidos políticos, afectos al Gobierno, deben plantear, tanto al ex presidente Carter como a la propia embajada americana, una explicación del porqué siendo Estados Unidos de América uno de los «garantes» de la democracia en el mundo han acogido en su territorio a los líderes golpistas que atentaron contra la democracia en Venezuela.

h) También merece consideración especial el papel que pueda desempeñar la Fuerza Armada Nacional el día 11 de julio. Si se tiene en cuenta que el golpe de Estado sirvió para «aclarar la aguas» y precisar los principales agentes golpistas adentro de la institución y, si además, se estableció un criterio institucionalista para los ascensos, la apreciación predominante es que las FAN difícilmente, en bloque, vayan a aventurarse en una acción pro golpista como la convocada por la oposición. Aunque no es descartable el pronunciamiento de individualidades o grupos de acción denominados «comacates».

i) Igualmente, es preciso evaluar cuál podría ser el comportamiento de los medios. De antemano, por posiciones públicas prefijadas, los principales medios de comunicación están comprometidos con la línea opositora, tanto los medios escritos, radiales y televisivos andan en esa onda. Es de esperar que utilicen todos los recursos mediáticos para realzar y potenciar las acciones de los actores diversos de la marcha, así como publicitar el desorden y el caos.

Gobierno:

1. Principal objetivo: La victoria obtenida por el gobierno del presidente Chávez el pasado 13 de Abril, al restituir las garantías constitucionales y el ejercicio de gobierno legalmente constituido, le obligan a definir un objetivo muy claro ante cualquier amenaza desestabilizadora. Así, la tarea prioritaria del Gobierno es defender *a como dé lugar* la institucionalidad ante cualquier agresión nacional o internacional. El «a como dé lugar» significa que la medida de la acción de Gobierno para conservar su integridad le dará la magnitud y el propósito de las acciones para agredirla y en cualquier caso derrocarlo.

Sobre esto no debe existir duda ni titubeos, razones de Estado son razones de Estado. En esta ocasión, ante una amenaza desestabilizadora anunciada y con actores igualmente comprometidos en la acción golpista del pasado abril, la acción o acciones gubernamentales deben ser lo suficientemente preparadas para evitar la sorpresa y la confusión.

2. Escenario del 11 de julio.

2.1. La marcha opositora *no debe llegar a Miraflores*. Para ello el ministro del Interior y Justicia está invocando un decreto no derogado de 1992 el cual permite colocar un anillo de seguridad ante una eventual situación de peligro como la que pretende generar la oposición. Si no existiese ese decreto, igual el Gobierno tendría la necesidad de utilizar cualquiera otra argumentación jurídica o constitucional para los efectos de su estabilidad.

2.2. El anillo de seguridad debe integrarse con efectivos de la Guardia Nacional y policiales, con instrucciones precisas de actuar disuasivamente, gases lacrimógenos incluidos, ubicado en un perímetro de alrededor de cuatro cuadras de la edificación de Miraflores y su misión específica es impedir el paso de la marcha hacia allí.

2.3. Un segundo anillo de seguridad debe estar integrado por las organizaciones populares y políticas comprometidas con el proceso. Debe hacerse una gran convocatoria pues la magnitud del propósito opositor así lo reclama. Debe recordarse que la forma como se repelió la anterior marcha por parte de civiles fue clave para salvar, no solo el símbolo del poder que es Miraflores, sino también para blindar al presidente de cualquier responsabilidad penal ante un intento de juicio por la «masacre». Un tercer anillo lo sería la guardia de honor o la invocación del Plan Ávila.

2.4. Deben reunirse con urgencia las direcciones de los partidos a los efectos de coordinar acciones comunes, así como girar instrucciones a la militancia para actuar de manera organizada y disciplinada.

2.5. A través de diferentes voceros el Gobierno debe establecer diferencias entre diferentes factores de oposición, se debe buscar la manera de no generar espíritu de cuerpo, ni solidaridades automáticas. Esta tarea la pueden cumplir voceros políticos que puedan incidir entre quienes asumieron completamente la plataforma gopista y quienes tomaron algún tipo de distancia ante ella.

2.6. Al Gobierno le conviene aceptar algún tipo, previamente analizado, de mediación o de sugerencia proveniente de la Misión Carter en vez de cualquiera otra, proveniente de quienes aúpan la presencia de la OEA como mediadora o interventora. La segunda opción tiene carácter sancionatorio, la primera no. El Gobierno podría explorar una comisión de notables integrada por los últimos premios Nobel de la paz.

2.7. Los partidos de Gobierno deben igualmente demandar del embajador americano una posición más ponderada. En entrevista concedida el pasado domingo Shapiro soltó prendas como estas: «Venezuela está a punto de un estallido social, en Venezuela no hay democracia plena, la democracia está concentrada en un líder», etc. Estas declaraciones andan en la línea desestabilizadora propiciada por la administración Bush.

Conclusiones:

1. Aún cuando la oposición a través de su principal comando político visible, la Coordinadora Democrática venezolana, e, igualmente, en la voz de Cecilia Sosa, han manifestado, tanto abierta como soterradamente, su intención de ir «con todo» a la marcha del 11 de julio, planteándose inclusive la «toma de Miraflores», se estima que este objetivo difícilmente pueda lograrse, pues el Gobierno no está desprevenido y prepara su estrategia de seguridad.

2. El otro objetivo de la manifestación, el cual consiste en generar una situación de caos, violencia y desobediencia civil entre la población hay que mirarlo y tratarlo con cuidado. Las medidas de seguridad y de orden público deben estar a la medida de las dimensiones e intensidad del conflicto que pueda presentarse. Hay que evitar, en lo posible, víctimas que puedan ser atribuidas a la responsabilidad oficial.

3. El Gobierno debe rechazar de plano la supuesta existencia de una crisis de «governabilidad». Aquí lo que hay es una oposición irracional e intran-

sigiente que no permite el ejercicio de la acción de gobierno, de allí que es extemporánea e inapropiada la mediación de la OEA para intervenir en los asuntos internos de Venezuela.

4. La negativa de la oposición a las propuestas del ex presidente Carter pueden interpretarse como un desafío abierto y descarado hacia la conservación de la institucionalidad.

5. Hay que examinar con cuidado la intervención y las vinculaciones de la embajada americana en el proceso político venezolano actual. Declaraciones y acciones coincidentes con la oposición no son casuales.

Marcha del 11 de julio (2)

1. Posición de la Alianza Cívica: Elías Santana, de Queremos Elegir, señala que el componente estrictamente civil de la Coordinadora Democrática, tomó distancia de inmediato ante la invocación a que las FAN «tome parte activa en la solución de la crisis de gobernabilidad del país». Agrega que. «Nosotros, después de los acontecimientos del 11 de Abril dijimos nunca más un cheque en blanco a nadie, nunca más detrás de nadie», tomando distancia de la salida golpista y la del magnicidio.

Señala, además, que «Una democracia se legitima a través de los votos y no del número de personas que se logre movilizar en una autopista... Tenemos que organizarnos para un largo tránsito». (*El Nacional*, lunes 15 de julio de 2002).

Esta posición de uno de los principales líderes civiles de la oposición luego de la marcha del 11 de julio es una de las claves, no solo para evaluar el impacto político de la acción de calle, sino, además, para tomarle el pulso a la calidad de la dirección opositora contenida en la denominada Coordinadora Democrática.

En cuanto a lo primero, es claro que ante la imposibilidad real de llegar a Miraflores y, ante la ausencia física del presidente Chávez en el palacio, se manifestó una diferencia en el manejo y tratamiento de la conducción política de la marcha entre quienes aúpan la vía violenta y golpista y quienes exploran el camino democrático y constitucional.

Ya antes del inicio de la marcha se tenía información acerca de los propósitos violentos de algunos sectores que buscaban mediante estas acciones responsabilizar al Gobierno de los hechos. El desvío hacia La Carlota fue la

expresión elocuente de tal intención. El forcejeo que se produce entre los miembros de la coordinadora y la entrega del escrito de Ángela Zago son datos que permiten visualizar la discrepancia antes señalada, muy bien descrita por Elías Santana en la entrevista referida más arriba.

En cuanto a lo segundo, el título del artículo de Fausto Masó el día sábado 13 en *El Nacional* es elocuente para calificar la profundidad y arraigo de la dirección política de la Coordinadora Democrática: “Aporrean, pero no rematan”, es decir, les pasa «como al famoso boxeador Simón Chávez, que aporreaba, pero no noqueaba», es decir, que la sucesiva andanada de acciones de la oposición está condenada a una política de permanente hostigamiento al presidente Chávez.

Esto último luce mucho más claro luego de las diferencias en el tratamiento de la estrategia a seguir por parte de la oposición, mientras unos buscan un camino rápido, sea violento o no, otros ya comienzan a dibujar el plan de un largo tránsito democrático.

El vicepresidente, José Vicente Rangel, resume la anterior evaluación así: «Surgen nuevos elementos para la agenda del diálogo y nuevos interlocutores para sentarse en la mesa». Mencionó a Elías Santana y a otros delegados de organizaciones civiles.

2. Posición de Fedecámaras: La estrategia de Fedecámaras poco ha variado luego del 11 de Abril. Esta afirmación se desprende de las declaraciones de su principal vocero, el presidente del organismo empresarial, Carlos Fernández, el pasado domingo en el diario *El Nacional*. Las cuales son contradictorias con el llamado a debate que previamente había hecho.

Insiste en la salida inmediata del presidente Chávez: «Hay varias: la enmienda constitucional para hacer un recorte del mandato presidencial, el referendo, el logro de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia...»

Afirma que es necesaria una plataforma preparada para que cualquiera sea la circunstancia que se presente en el país no caigamos en un vacío. Ella sería:

Un mínimo de acuerdos, al menos, para este período de transición. En lo político, necesitamos un Consejo Nacional Electoral transparente y la independencia de los poderes públicos. En lo económico: para crear un ambiente proclive a la llegada de las inversiones, reformar las leyes concretas que lo

impiden. En lo social: reconocer y honrar la enorme deuda de seguridad social. En lo militar: sacarlos de la escena política...

Agrega Fernández: «... nos queda... única y exclusivamente el cambio de liderazgo, y eso lo vamos a lograr no solo pidiéndole que se vaya y exigiéndoselo en las calles, sino creando una plataforma».

Contrasta esta posición sectaria y cerrada de la cúpula empresarial con la propuesta pública hecha, mediante una carta abierta al presidente de Fedecámaras, por el partido político Patria Para Todos, para realizar un debate ideológico con un temario preestablecido que incluya los temas de mayor importancia nacional: El petróleo y Pdvsa; el problema de la pobreza; El destino histórico de la patria y de la nación venezolana; Repercusiones del ALCA; Modelo de desarrollo que requiere Venezuela y la seguridad social.

Sin embargo, hay voces disidentes, por ejemplo, Francisco Natera, ex presidente del organismo empresarial, indicó que «Hay mecanismos institucionales para cambiar el liderazgo. En lugar de ir a un paro que profundizará la crisis, los empresarios deberían estar pensando en cómo recuperar la producción y el empleo». (*El Nacional*, 13 de julio de 2002, D8).

3. *Posición de la ctv*: La estrategia de la ctv y de su principal liderazgo, Carlos Ortega, sigue invariable: salir del presidente Chávez a como dé lugar. Gestiona Ortega la convocatoria a una huelga general con ese propósito, aún cuando no se ha fijado fecha, se ha señalado que la decisión se tomará en forma coordinada con todos los sectores del país.

4. *Posición del Gobierno*: más allá de cualquier consideración oficial ante la marcha en sí, destaca la ofensiva de la política exterior venezolana ante las acciones opositoras. Primero fue la gira de la Misión Carter y ahora el estudio de la propuesta de la Embajada de Venezuela ante la OEA para que este organismo intervenga como facilitador del diálogo en el país. Dicha propuesta está en consideración del presidente Chávez.

La entidad facilitadora de la OEA sería la Unidad para la promoción de la Democracia, con experiencia en procesos de reconciliación nacional en Chile, Nicaragua, Guatemala y Perú, entre otros países. El objetivo sería facilitar la elaboración de una agenda para el diálogo atendiendo a las particularidades de Venezuela. No hay fechas ni cronograma, solo se está en fase preliminar, pero, en cualquier caso ello supone una apertura del Gobierno venezolano hacia organismos de carácter internacional a fin de utilizar estos mecanismos

para estabilizar el gobierno y las instituciones democráticas.

Capítulo aparte, pero también en la misma dirección se ubica la invitación gubernamental, a través del Mintra (Ministerio del Trabajo), a representantes de diversa organizaciones sindicales de carácter internacional para que cumplan una agenda en Venezuela cuyo objetivo central es distender el conflicto en el mundo laboral y, en especial, el referido a la CTV.

En reunión del equipo responsable de esta actividad se concluyó que si se decide llevar a cabo esta actividad el Gobierno debe hacer pública la invitación a objeto de no aparecer discriminando los invitados como afectos a una parcialidad, en este caso, del Gobierno venezolano.

La marcha del 10 de octubre

Estrategias diferentes y divididas

Lo primero que salta a la vista es la diferencia de enfoques y de propósitos con los que los distintos actores de la oposición hacen la convocatoria a esta opción de calle. Por un lado, están los golpistas confesos y los sectores más radicales del antichavismo y, por el otro, quienes asumen esta convocatoria como una acción dentro de una línea política en el marco de la Constitución. Los pro golpistas, entre quienes se encuentra factores militares plenamente identificados, generales Medina Gómez, González González y otros, así como los partidos AD y Copei, Carlos Ortega y la CTV, Fuerza Solidaria de Peña Esclusa, el Frente Institucional Militar (Rafael Huizi Clavier), Bandera Roja, Enrique Tejera París, Ángela Zago, La Causa Radical, Antonio Ledezma, gruesos sectores de Fedecámaras, Gustavo Cisneros, etc., pueden utilizar esta movilización con varios propósitos subalternos:

1. Generar situaciones de violencia que induzcan al caos a fin de provocar la actuación de las fuerzas del orden público, ello puede ir desde: perpetrar asesinatos selectivos de líderes o personalidades del Gobierno o de la misma oposición, hasta intentar reeditar lo sucedido el 11 de Abril, desviando la ruta de la marcha hacia Miraflores u otro objetivo.

2. Aprovechar la movilización, de acuerdo a su fortaleza, para desde allí lanzar la convocatoria a huelga general indefinida.

3. Instar a las FAN a intervenir abiertamente en la solución del conflicto por la vía golpista.

Hay que tener en cuenta que esta movilización está respaldada por sectores económicos poderosos, donde además del empresariado golpista ligado a Fedecámaras, está el grupo empresarial de los dueños de los grandes medios de comunicación, quienes, tanto en la convocatoria a la marcha como durante su desarrollo apuntalarán mediáticamente los propósitos golpistas.

De igual manera, hay que estar atento a los movimientos y actuación de la embajada americana, pues, aunque en reciente comunicado público se alejaron de la salida golpista inmediata, su histórica capacidad para mimetizarse es factor a tomar en cuenta a la hora de un desenlace cruento.

Asimismo, tener claro que cualquier salida golpista implica un costo en vidas humanas, lo cual no es deseable para el Gobierno, pero, si la confrontación viene hay que dar la batalla y activar los planes de contingencia.

Los «constitucionalistas», entre quienes se encuentran la mayor parte de las ONG, el partido Unión, intelectuales diversos, etc., plantean como objetivo y razón de la marcha el lograr una gran demostración de fuerza, de carácter pacífico, que le dé piso político a su propuesta de enmienda constitucional para el recorte del período constitucional del mandato presidencial, de allí su consigna relativa al adelanto de elecciones y a la tarea de recolección de firmas con ese fin. Evitar provocaciones que desnaturalicen esos propósitos será tarea de los organizadores no golpistas.

El otro gran objetivo propuesto es lograr la firma de la Declaración del Grupo Tripartito (OEA, PNUD y Centro Carter), cosa a la que se han negado AD y Copei, sin embargo, es el espíritu prevaleciente en el seno de la mayoría no golpista dentro de la Coordinadora Democrática.

Independientemente del anunciado carácter pacífico de la marcha, y, además, de los anuncios constitucionalistas de este sector de la oposición, en el marco de la crisis política que vive la nación, esta movilización encuadra perfectamente dentro de los propósitos golpistas e insurreccionales antes descritos. En una situación de alta conflictividad política y social como la coyuntura actual, cualquier evento, por aparentemente insignificante que sea, puede desencadenar en: acciones golpistas previamente calculadas, o bien, en una seria revuelta social, a las cuales el Gobierno está en la obligación de hacer frente con todos los medios disponibles a su alcance.

Otro aspecto a considerar es el relativo a la develación del plan golpista, donde aparece como figura Tejera París, entrelazado con Carlos Andrés Pérez, AD, Copei, Carlos Ortega y sectores militares. Hasta ahora puede decirse

que aunque develado, el plan sigue montado, con sus piezas intactas, sus propósitos bien definidos y con la marcha como primer gran escenario para actuar. Aunque el Gobierno ha tomado medidas preventivas, como los decretos de zonas de seguridad y la custodia de áreas importantes por las fuerzas del orden público, es preciso tener a punto el decreto de excepción y el plan de contingencia previamente elaborado.

2.3 Proceso político

Anotaciones para la interpretación del momento político

1. De la dirección

Si alguna característica se ha manifestado en relación al tema de la dirección entre los actores revolucionarios en el proceso político venezolano, luego del golpe de Estado del 11 de Abril y, en forma más patente, luego de la decisión del TSJ el pasado 14 de Agosto, ha sido el de su incoherencia y dispersión.

Incoherencia y dispersión que se manifiestan en la inexistencia de una dirección unificada, colectiva, con unidad de propósitos y, sobre todo, un programa político único. A este proceso lo ha venido salvando el olfato político de parte de su dirigencia y la incuestionable presencia del liderazgo de Chávez, se ha necesitado mucho de lo anterior para superar o, al menos minimizar, el tremendo impacto de los golpes opositores.

De la misma manera se manifiesta una relación asimétrica y desigual entre los principales actores que fungen como rectores del proceso. En el cuadro general de la dirección encontramos: actores con mucha fuerza física y militar sin la pericia y la formación para el liderazgo político; con mucha fuerza social, influencia política en las bases sociales pero sin la visión estratégica del proceso; con clara visión política y fuerte formación pero sin arraigo social desarrollado; un liderazgo como el del presidente Chávez con un enorme peso específico en la conducción del proceso pero con excesiva valoración personal de su papel en la dirección; en fin, múltiples variedades de roles y papeles por diferentes agentes del proceso que han derivado en un cuadro muy disperso para centralizar políticas.

Las anteriores cosas se han hecho evidentes en diferentes episodios del desarrollo del proceso, sin embargo, en el referido a la decisión del TSJ se ha hecho más evidente. Se ha dicho en torno a la decisión del TSJ que la respuesta

del Gobierno fue débil y tardía, que ante un hecho absolutamente previsible y prácticamente consumado como lo fue tal golpe jurídico-político, no solo el Gobierno sino, además, las direcciones políticas de los partidos, la representación en la Asamblea Nacional y determinados actores como los militares afectos al régimen y organizaciones populares de diverso tipo, actuaron sin la coordinación y la centralidad debida. Y efectivamente eso fue así. En descargo del establecimiento de responsabilidades políticas, en particular en relación a factores de la dirección, hay que detenerse a considerar algunos rasgos inéditos de este proceso que han incidido en su conformación y actuación. Podemos resumirlos brevemente:

a) El proyecto en general, aún cuando es de aliento histórico y colectivo, no ha tenido ni un partido único ni tampoco una base social definida en su conducción. Ello ha sido resultado del origen militar de su principal liderazgo, encarnado en Chávez, quien no solo proviene del mundo castrense, sino que, además, no tenía ni las conexiones ni la vinculación social que le dieran piso.

b) Proyectos con esas características en la Venezuela moderna han existido dos: el de Rómulo Betancourt y el de Alfredo Maneiro. Ambos concebidos para el largo plazo y con actores político-sociales bien definidos.

El proyecto Chávez, simplificando podemos denominarlo así, tuvo que recurrir al recurso de construir un partido como el mvr, el cual, en su estructura y composición política, atendió más a una razón electoral que a una visión estratégica; pero, además, la organización popular, sobre todo la concretada alrededor de los Círculos Bolivarianos, también tuvo que construirse sobre la marcha, atendiendo más a una urgencia de organización del pueblo que a una definición estratégica de aquella. Ha sido recientemente, cuando obligado por las circunstancias y por la perentoria necesidad de redefinir la composición social del proyecto cuando Chávez ha vuelto, tanto su mirada como sus esfuerzos, hacia el sector de los trabajadores, actor de indispensable presencia en cualquier proyecto de vasto alcance.

c) Lo anterior está vinculado a otras dos características del proceso: primero, su irrupción en una escena internacional absolutamente adversa a la concreción de opciones políticas autónomas e independientes, y segundo, al carácter pacífico del mismo, asumido como plan político. Ambas cosas han significado encarar dificultades de mucha monta a la hora de definir estrategias, políticas y acciones específicas. Dicho de otra manera: lo que en cierto modo ha sido ventajoso, es decir, lo inédito, lo peculiar, las particularidades

nacionales y su excepcional aporte a la hora de plantearse opciones ante el imperialismo globalizado, también constituye un serio problema pues obliga a repensar la política, la construcción del modelo, sus alternativas, la búsqueda de aliados y, sobre todo, la definición de la estrategia.

d) En medio del escenario anteriormente descrito hay que considerar la relación de Chávez con sus aliados políticos, el MAS y el PPT, para considerar solo dos. En el caso del MAS la relación ha sido tortuosa, con vueltas y rodeos, por las características congénitas del MAS referidas a su concepción de partido de masas, muy orientado hacia un ejercicio democrático cargado de acciones oportunistas, se puede decir, contaminado por la cultura política de AD. Su aporte electoral fue importante, pero luego, a la hora de las definiciones y de encarar la nueva situación política se puede decir que, luego de su división, su participación está referida a los votos que tiene en la Asamblea Nacional, con permanente incertidumbre de hacia dónde van a ir en un momento determinado y a la fuerza de sus gobernadores.

En el caso del PPT, la situación es cualitativamente distinta porque, aún cuando arrastra las consecuencias de la división de su antigua matriz de proyecto ha mantenido una clara visión no solo de la importancia del liderazgo de Chávez, sino que ha sabido interpretar los momentos políticos y tiene una orientación estratégica del proyecto. Sin votos en la Asamblea Nacional su aporte ha sido esencialmente político y, no solo por la presencia de algunos de sus principales cuadros en puestos estratégicos del Gobierno, sino por su permanente vigilancia y presencia en los escenarios políticos de mayor importancia.

e) Consideración especial merece el papel desempeñado por los militares en el actual desarrollo político. Si bien es cierto que en la historia de Venezuela ha existido una arraigada presencia del sector militar, nunca como hoy su protagonismo ha sido tan notorio y decisivo y, no solo por la presencia de Chávez, sino por plantearse como componente principal del proyecto, como actor con voluntad política definida, incluso constitucionalmente. Decimos consideración especial porque además de ser un poder, una fuerza de hecho, también es uno de los factores de dirección dentro del proceso, un actor cuya actuación puede definir el carácter de políticas estratégicas. De esto último está en cuenta Chávez y los otros factores de dirección.

Esta breve descripción de algunos rasgos del cuadro político puede ser explicativa de la incoherencia y dispersión de la dirección en la actual coyun-

tura, más allá de consideraciones puntuales o simplemente sesgadas por el interés particular de cualquiera de los actores. En resumen, es un problema objetivo, existente como resultado de una historia donde cada actor ha protagonizado su propia y particular versión, ha materializado su participación y ha definido sus propios objetivos. Lo anterior nos lleva a varias propuestas, en beneficio del interés general por el proyecto:

1.1. Convocatoria con carácter de urgencia a jornadas de trabajo con una selección de la dirigencia fundamental de los actores involucrados en la dirección del proceso. No debe ser una gran asamblea pero tampoco debe excluir a quienes tengan incidencia en la conducción del mismo. Se debe convocar por igual a: partidos políticos, militares, dirigentes de las principales organizaciones populares (círculos), Hugo Chávez, FBT, cuadros políticos (a seleccionar), líderes religiosos, etc.

1.2. La primera tarea de esta reunión será la elaboración de una agenda que permita, tanto una evaluación como sentar las bases para el diseño de una dirección compartida, colectiva y participativa. No se trata de reeditar el Consejo de la Revolución sino de trasladar al seno de este equipo la evaluación, análisis y toma de decisiones requeridos por el proceso.

1.3. Una segunda tarea es la de afinar las líneas programáticas. Es preciso que el conjunto de las fuerzas de dirección acuerden un mínimo de objetivos y propósitos generales a fin de evitar la dispersión y la incoherencia antes señalada y reduzcan, en lo posible, las asimetrías y desigualdades entre los actores que protagonizan la acción dirigente.

1.4. Observación final: esto no es una receta, quizá se haya dicho o repetido muchas veces, pero hoy es imperativo resolver el problema de la dirección política.

Nunca como hoy, donde ya es perfectamente válido evaluar el rumbo y contenido general del proceso, se hace perentoria la necesidad de detenerse a pensar el dónde estamos, qué somos, adónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Estas son tareas de dirección política.

Anotaciones para la interpretación del momento político (2)

1. De lo económico

Desde hace alrededor de 20 años hasta el presente los signos característicos de la economía venezolana han sido el desequilibrio financiero, tanto en

el plano monetario como fiscal, así como una mengua sostenida en la capacidad rentística del petróleo para soportar una economía en continua y perseverante desaceleración.

Resulta obvio que aunque la crisis estructural de la sociedad venezolana ha estado marcada por lo económico, de igual forma, ha tenido una concomitante repercusión política. Podemos ubicar en 1978 la primera gran campanada del quiebre del modelo económico prevaleciente en un largo período de estabilidad; luego, el Viernes Negro de 1983, con su control de cambios y moratoria de la deuda; el Caracazo de 1989; seguidamente el accionar de Chávez en 1992 y el triunfo de Caldera en 1993; esto preparó el terreno para la irrupción definitiva de Chávez en 1998, como muy bien lo refiere Margarita López (*El Nacional*, 23 de junio de 2002).

Antes de la presencia de Chávez como gobernante el tratamiento a este grave desajuste estructural recibió, de parte de sucesivos gobiernos, un tratamiento que pudiéramos calificar como ortodoxo, siguiendo en forma reiterada los ajustes propuestos por las autoridades monetarias internacionales (FMI, BM) y la continua renegociación de la deuda externa. Sin embargo, a la luz de la experiencia en esta materia, tales recetas en vez de corregir las distorsiones las reprodujeron exponencialmente hasta el punto de dejar una herencia de complejo y difícil manejo para cualquier gobierno que, como el de Chávez, intentara cambios importantes en la sociedad venezolana y, en particular, en su maltrecha economía.

De allí que, a la hora de considerar la gestión económica del Gobierno de Chávez, no podemos hacer abstracción de esta realidad, anteriormente descrita; y, al mismo tiempo, tener en cuenta que el marco de dicha gestión lo constituye, además, una severa crisis política patrocinada por sectores adversos a los cambios planteados por la nueva dirigencia gubernamental. Así, tenemos la conjunción de un heredado deterioro estructural de la economía con una crisis política e institucional, coctel nada favorable para el desenvolvimiento de una economía equilibrada y productiva. Las principales críticas de los sectores adversos a la política económica del Gobierno están sustentadas en la excesiva injerencia del Estado en los asuntos económicos y financieros, en la baja credibilidad en la política de ajuste fiscal, en la persistencia de la inamovilidad laboral y en la agudización del conflicto social como consecuencia de insuficiencia en los programas sociales compensatorios. La crítica a la *Ley Habilitante* ha sido sistemática, según la oposición, allí se concentra el

contenido estatista de la ideología adversa al libre mercado preconizada por Chávez, en particular en la *Ley de Tierras*, la *Ley de Hidrocarburos* y la *Ley de Pesca*, como paradigmas.

En descargo de la política económica del Gobierno hay que decir que esta se ha manejado, conceptual y políticamente en la línea correcta, teniendo como columna vertebral la política petrolera, tanto en el campo internacional (OPEP), como nacionalmente. Esta es una acción de por sí definitoria en el marco de la inserción de Venezuela en la economía globalizada y, si ello va aparejado a una definición del papel del Estado, en tanto ente regulador de la actividad económica nacional, tenemos una noción clara del rumbo adoptado por el Gobierno en materia económica; pues, una cosa son las medidas de corte fiscal o cambiarias vistas en forma aisladas y otra es el que formen parte de correctivos necesarios en medio de una coyuntura como la actual, pero que no persigan un fin en sí mismo.

Joseph Stiglitz, quien fuera alto funcionario de varias instituciones financieras internacionales, señala en relación a este tema que el Estado es el árbitro imprescindible de las relaciones económicas y que las decisiones estratégicas no deben ser tomadas por unas camarillas, de espaldas a los pueblos. (*El Nacional*, 18 de agosto de 2002). Si esta es la opinión de un economista, reciente premio Nobel, que difícilmente pueda catalogarse como un defensor del estatismo intervencionista, podemos deducir la importancia de esos conceptos a la hora de perfilar los linderos de la intervención del Estado en una economía como la venezolana.

Visto el asunto de esta manera, la clave para entender la propuesta del Gobierno está en propiciar el adelanto de una política de consenso, donde el Estado tenga una visión clara de su papel, mas allá de cualquier consideración limitada al corto plazo, y muy centrada en superar los simples esquemas de ajuste tradicional.

De no ser así no habría correspondencia entre los cambios políticos adelantados y el piso económico necesario para darles viabilidad. Sin embargo, esta ruta no es sencilla, las cúpulas del poder económico, en vez de concertar políticas con el Ejecutivo en busca de un camino a la estabilidad, actúan en la búsqueda de un escenario de permanente confrontación, limitando seriamente la acción del Gobierno.

Hay quienes sostienen que el golpe sigue montado. Dice Miguel Salazar:

Poco o nada ha variado la conformación golpista... se dan el tupé de anunciarlo públicamente... En el sector radicalizado cobra fuerza la tesis del magnicidio. Mientras, en Pdvsa se está blindando a la industria como base de operaciones, se prepara un nuevo paro petrolero, el cual debe —como el anterior— desembocar en un paro nacional. (*Quinto Día*, 23 de agosto de 2002).

Y así es. La alineación de las fuerzas opositoras sigue siendo básicamente la misma, se practica la combinación de diversos métodos de acción con el propósito definido de salir del Gobierno de Chávez y allí caben por igual las fuerzas internas: sindicales, militares, eclesiásticas, empresariales y diplomáticas, donde, por supuesto, la embajada americana tutela el plan opositor.

Además, como lo dice Ramonet, en el plano internacional hemos pasado a un mundo unilateral donde la dominación de los Estados Unidos de América es aplastante.

Washington estima que en las relaciones internacionales ya no se necesita un árbitro; el árbitro son ellos. Desde 1991 Naciones Unidas era una organización en crisis incapaz de hacer respetar cierto número de consideraciones; pero desde el 11 de Septiembre esta crisis se ha agudizado. Los Estados Unidos ya prácticamente no respetan ni siquiera algunos acuerdos internacionales firmados por ellos, por gobiernos precedentes al actual (*Granma*, 08 de agosto de 2002).

Esta realidad pesa mucho a la hora de definir las políticas económicas nacionales pues al fin y al cabo estamos limitados por ella. El proyecto Chávez es inviable para el ALCA, para la política energética de Bush, entre otras iniciativas americanas.

En los últimos días se ha abierto un debate nacional alrededor del tema económico que evidencia cómo estas posiciones contrapuestas cobran cuerpo en la visión que tanto la oposición como el Gobierno hacen explícitas. Por un lado, aparecen los diversos voceros de los adversarios al Gobierno señalando su ineptitud, su incapacidad y su miopía, colindando con el colapso económico y, por otro, el Gobierno indicando que estamos ante la presencia de un golpe continuado, el cual pretende quebrar las finanzas del Estado provocar una estampida de capitales y desestabilizar la economía.

El plan de la oposición golpista incrustada en algunos eslabones claves de los organismos financieros es el de generar dificultades en el manejo de las finanzas públicas. Por una parte se ocultan datos, se trasladan cuentas, se hacen transferencias inapropiadas, se retardan los pagos de nómina y, en general, se boicotea el normal desenvolvimiento del flujo de caja.

Si a esto agregamos las cifras nada favorables de los organismos económicos del Estado, donde el propio presidente Chávez ha tenido que admitir la veracidad de las cifras del bcv, la situación es de verdadera preocupación. Según este ente financiero la economía cayó 9% del PIB durante el segundo trimestre de este año, observándose una caída no vista en los últimos 8 años precedentes. El PIB es el indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos en el país y su variación refleja si este movimiento crece o disminuye. Según los cálculos del Ministerio de Finanzas un punto del PIB equivale a un millardo de dólares aproximadamente, esto equivaldría a 9 millardos de dólares. Sin entrar a considerar los factores que indujeron semejante bajón económico, no está demás señalar que el propio bcv indica que la caída del sector petrolero es en buena parte explicativa de tal disminución productiva. (*El Nacional*, 23 de agosto de 2002).

El Gobierno ha venido generando algunas políticas tendientes a la reactivación del aparato productivo. Algunas de las premisas de esta política han surgido como grandes líneas para colocar al Estado a tono con la teoría que le sirve de guía, entre ellas: a) Orientar la inversión pública hacia el estímulo de la producción nacional; b) Políticas de vasto alcance para superar la dependencia respecto de los bienes importados; c) La generación de empleo debe considerarse un problema de Estado; d) Establecer una relación no cupular entre Estado, empresarios y trabajadores a la hora de impulsar políticas concretas de acuerdos para la inversión y el empleo; e) Impulsar un programa de cancelación de pasivos laborales con el otorgamiento de bonos y otras fuentes patrimoniales del Estado. Sin embargo, toda esta propuesta económica choca con una barrera casi infranqueable: la tenaz, férrea y decidida posición de la cúpula empresarial nacional.

En fin, estamos en presencia de una delicada situación económica que puede traducirse en catalizador de una crisis sin precedentes en la gestión del presidente Chávez. Si bien es cierto que hasta hoy se han venido minimizando sus alcances reales, con la agitación y la movilización popular, también lo es el que la capacidad de aguante de la población tiene un límite. En cualquier

momento puede ocurrir un desbordamiento popular al rebasar a su dirigencia formal como ocurrió con los trabajadores del Metro. Y esto es válido para cualquier sector de la colectividad. Lo anterior nos remite nuevamente al tema de la dirección política, anteriormente planteado y a la perentoria necesidad de articular un plan para instrumentar la autonomía financiera.

Anotaciones para la interpretar el momento político (3)

1. De la oposición

1.1. Composición «variopinta»: La dirección diversa de la oposición se manifiesta de distintas y diferentes maneras, sin embargo hay dos que merecen especial atención:

1.1.1. Hay una facción abiertamente golpista cuyo propósito es hacerse del poder por la vía expedita de la acción directa, utilizando todos los mecanismos posibles de desestabilización y, buscando, no solo abreviar los lapsos constitucionales, sino, además, burlar hasta las líneas de la denominada Coordinadora Democrática. Esta facción, encubierta con la máscara democrática que le otorga dicha Coordinadora y amparándose con la consigna «elecciones ya» ha desplegado su pretensión hegemónica de dirección del campo opositor hasta el punto de generar serios desencuentros y fracturas dentro del mismo. Se cuentan entre otros: partidos políticos, como AD, Copei, La Causa R, Bandera Roja; Fedecámaras, empresarios como Gustavo Cisneros; personalidades e intelectuales, tipo Tejera París; militares activos y retirados (FIM), etc.

1.1.2. La otra parte de la oposición, aun cuando también busca «salir» del presidente, transita un camino distinto y su accionar se expresa en políticas como el referendo consultivo o la enmienda para el recorte del período. Sin embargo, las movilizaciones convocadas por la «sociedad civil» y sus organizaciones sirvieron y han servido de piso político para las acciones y propósitos golpistas. Esto último se manifestó en la marcha del 10 de octubre cuando la propuesta de paro indefinido de Ortega rebasó los acuerdos previos de los organizadores «constitucionalistas» de la marcha. De igual forma, se ha expresado en las diferencias con relación a la firma del documento del Grupo Tripartito (OEA, PNDU, Centro Carter), al cual han negado su firma AD y Copei.

1.2. Errores y carencias de la oposición: Su principal error ha sido el colocar en el plano exclusivamente político la confrontación con el presidente, allí donde este ha dado las mejores demostraciones de su liderazgo y fortaleza a

la hora de enfrentar al adversario. Al desviar la línea de ataque del tema económico y deslizarlo, exclusivamente hacia la confrontación política abierta, el campo opositor ha debilitado su posición estratégica.

La propuesta de adelanto de elecciones tiene sus bemoles. Puede ser buena para el golpismo porque le unifica alrededor de una línea «democrática», pero, para el resto de la oposición además de inconstitucional, es inviable en el corto plazo, tiene demasiados escollos políticos y técnicos. De igual manera, la demanda de renuncia del presidente luce desproporcionada y fuera de lugar.

Y su principal carencia ha sido la inexistencia de un liderazgo aglutinador de las fuerzas y tendencias que se mueven en su seno. Esto ha sido señalado hasta por sus propios analistas quienes han sostenido que la marcha fue vigorosa, fuerte y hasta festiva (Tulio Hernández), en comparación con la pobreza de «la tarima». Otros hablan de una marcha gigante y de una dirección enana (Olavarría).

Ni Fedecámaras ni la crv tienen hoy el poder y la fortaleza suficiente para parar a todo el país. Vienen de una derrota reciente en abril y, poco a poco, la efectividad de la política de diálogo del Gobierno ha abierto un boquete en las bases de sustentación de estos actores golpistas. Y, en el terreno militar, aunque pueda aún tener cierta fuerza, no se observa en la coyuntura como factor decisivo favorable al golpismo.

Estas discrepancias, aunadas a los errores y carencias antes descritas, han causado una seria merma en las posibilidades de éxito, al menos inmediato, de la oposición golpista.

Ya no se habla de huelga general o de paro indefinido, sino que se limitan a una propuesta de paro cívico por solo 12 horas (Felipe Mujica), o a un cambio de fecha. En cualquier caso, no hay correspondencia entre la fanfarronería de Ortega y su llamado a huelga general indefinida, con lo que en los hechos puedan concretar como acción contra el Gobierno. Por eso, se puede interpretar como correcta la respuesta del presidente el pasado domingo al no aceptar el chantaje y los plazos de Ortega y señalar que los plazos están en la Constitución.

2. Del Gobierno

2.1. Línea política central: La línea política que debe servir de centro al accionar del Gobierno, tanto nacional como internacionalmente, es el apego y

respeto a la Constitución. Esto es válido para contener los ataques que se hacen desde adentro de las fronteras nacionales, como los que se orquestan desde el exterior, sean promovidos por la embajada americana, por Toledo, o por la conjunción de ambos o de otros factores extranacionales. En cualquier caso el marco constitucional constituye una palanca para la defensa y promoción del contenido democrático del proceso. Hay quienes sostienen que este es un Gobierno legítimo en su origen, pero no en su ejercicio, lo cual constituye razón suficiente para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. (A. Durán, U.R. 15 de octubre de 2002). Otros, apuestan a crear el caos y la desestabilización para invocar este u otro mecanismo de intervención extranjera.

Pero, en cualquier caso, tanto dentro como fuera del país, el instrumento constitucional-democrático es referencia de primer orden a la hora de definir y defender el proceso político venezolano. No está demás señalar que los métodos para su protección válidamente establecidos son soportes para su defensa.

2.2. Cabe destacar que la acción de gobierno ha venido perfilando un modelo alternativo, tanto en lo atinente a la implantación de nuevos conceptos para la reorganización de la gestión pública, como en lo que se refiere a la concreción de un nuevo modelo de gestión económico y social. Ejemplificado este último en el denominado «Nuevo Tripartismo», en la relación del presidente con los trabajadores y en la política de desarrollo del mercado interno, lo cual prefigura una alternativa ante el ALCA. Este marco de referencia ha constituido el fundamento del fortalecimiento y la reorganización del Gobierno y sus políticas luego del golpe de Estado.

Lo anterior también es la base de apoyo del Gobierno para enfrentar el paro anunciado por la oposición, Desde luego, contando con las FAN, la FBT, y los aliados políticos y las organizaciones populares de diversa índole. El conjunto de estos factores deben preparar la activación del Plan de Contingencia, ya elaborado, afinando su instrumentación y precisando objetivos. La oposición puede llevar el escenario del paro a una confrontación cuyo objetivo sea provocar la represión para así invocar la intervención extranjera.

I. Aspectos generales sobre la oposición

1. Independientemente de las fortalezas particulares de algunas organizaciones opositoras como factores individuales, la coalición que las aglutina carece de una columna vertebral que logre dar coherencia y disciplina a los

distintos actores que en torno a ella se reúnen. Sin embargo, existen algunas figuras aglutinadoras que están aparentemente «fuera» del debate político interno, ese es el caso de la embajada estadounidense.

2. Varias de las acciones de la oposición han tenido alcances que deben ser evaluados de manera diferenciada. Sobretudo, porque existen acciones que pueden considerarse como no exitosas pero cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, de manera que su acción termina siendo magnificada. Por otra parte no debe olvidarse que, acciones que aparecen como dispersas son parte de un plan desestabilizador, asunto corroborado con el denominado Dossier N 5. Después del golpe de Estado del 11-A y considerando las diversas maneras (sutiles o no, discursivas o con manifestaciones de calle) con las que se incita a la FAN a poner su «grano de arena» en la solución a la crisis política, cualquier subestimación del adversario debe considerarse como una identificación errónea del momento político.

3. La creciente tensión política se viene desarrollando en un arco conflictivo que se abre en noviembre del 2001, cuyo punto de cierre temporal fue del 11 al 13 de abril, para abrirse otra fase a partir de mayo de 2002. Durante todo este arco, la oposición reunida básicamente en torno a la Coordinadora Democrática, ha empleado diversas tácticas desestabilizadoras y no ha logrado sus objetivos: «salir de Chávez», ello tiene varias implicaciones positivas y negativas para el actor-Gobierno.

Positivas:

(a) Ello permite identificar aquellos actores que se pronuncian por diversas salidas que van desde las institucionales en sus distintas modalidades, hasta aquellas que rompen las reglas del juego constitucional-democrático.

(b) Le permite al actor-Gobierno ampliar el margen de diálogo y acercamiento con aquellos sectores que buscan salidas proclives a una solución pacífica y constitucional tanto en la esfera nacional como internacional. (Aquí el tiempo político debe considerarse como un bien escaso).

(c) Le permite generar estrategias de contingencia ante las opciones planteadas por la oposición, cuestión para la que debe existir mayor coordinación entre organismos y factores políticos. (Aquí el tiempo político debe considerarse como un bien escaso).

Negativas:

(a) Al no tener la oposición un panorama cierto sobre las salidas a la crisis según sus intereses, los sectores más radicales buscan una solución con apoyo de la Fuerza Armada y factores externos a la nación. Puede pensarse en una vía extrema como el magnicidio.

(b) Los niveles de conflictividad (huelgas, paros, marchas) tienden a aumentar, dado que la lógica desestabilizadora y golpista, es el resultado de un plan no cumplido en todas sus fases.

(c) Resulta cada vez más evidente que los límites jurídicos y pacíficos de las disputas se hacen cada vez más estrechos. Sobre todo cuando se considera que factores de la oposición juegan con instrumentos y tácticas que pueden ser catalogados de terroristas. Uno de los componentes del plan desestabilizador tiene que ver con la denominada Guerra de Baja Intensidad (GBI) que puede incluir acciones de: sabotaje industrial y/o a servicios públicos, hostigamiento y/o asesinatos selectivos a distintos personajes del mundo político, empresarial, religioso, sindical, intelectual, movimiento popular, periodístico entre otros. Estas acciones pueden llevarse a cabo contra personalidades que públicamente han mostrado posiciones políticas contrarias o afectas al gobierno nacional. Dichas acciones tendrían apoyo económico, logístico y armamentístico de sectores externos a la nación al igual que artífices internos.

Su objetivo principal está en crear las condiciones necesarias para que —con la cobertura mediática y el impacto que un hecho de tal naturaleza tendría— ocurra una situación de caos, pánico e inseguridad personal por motivaciones políticas, desmoralización de los sectores políticos cercanos al Gobierno y de los sectores populares, todo en aras de: 1) criminalizar a sectores que la oposición identifica como «radicales» y endosarle la autoría de tales hechos a sectores oficialistas o sectores populares, 2) generar alarma internacional en relación a las prácticas terroristas, 3) dar la sensación de vacío de autoridad y 4) instar a los miembros fracturados de la FAN a pronunciarse militarmente.

En relación a este tópico varias son las recomendaciones. 1) Este plan debe ser públicamente denunciado, a la vez, que debe colocar a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado en una situación de extrema alarma. 2) Deben reforzarse las medidas de seguridad de personeros claves del oficialismo y la oposición (presidente de la República, Vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional, diputados, magistrados del TSJ, rectores del Poder Mo-

ral, gerentes de Pdvsa, ministros, líderes de partidos políticos, eclesiásticos, periodistas e intelectuales). 3) El Gobierno nacional debe ejercer el sentido de la autoridad y articular todos los medios a su alcance para procesar de manera rápida, efectiva y apegada a derecho cualquier manifestación de este tipo.

II. Sectores de la Coordinadora Democrática

En la Coordinadora Democrática pueden identificarse varias tendencias que puján de manera diferente por un objetivo común: la salida de Chávez. Estas visiones son el resultado de la multiplicidad de «perfiles ideológicos» que la componen. De manera que puedan agruparse según su acción, los sectores más visibles que integran la Coordinadora Democrática serían tres:

1) «*Los talibanes*»: definidos así por sectores internos de la Coordinadora. Se trata de aquellos miembros o facciones que «no siguen las directrices» generales que se aprueban o cuyas proposiciones tienden a radicalizar las prácticas opositoras. Un episodio significativo de esta desobediencia de las directrices se hizo evidente frente a la indisposición de algunos sectores de no participar en el trancazo del 11 de septiembre.

Algunos integrantes: Antonio Ledezma (ABP), Ángela Zago, Bandera Roja, Alejandro Peña Esclusa (Fuerza Solidaria)

2) «*Los come flores*»: definidos así por sectores internos de la Coordinadora. Se trata de aquellos miembros o facciones que en las discusiones y acciones se oponen a efectuar acciones radicales o que afecten a la colectividad y el normal desenvolvimiento de la vida pública.

Algunos integrantes: Elías Santana (QE), Arias Cárdenas y sectores de Unión, Leonardo Pisani.

3) «*Los intelectuales*»: Se trata del estrato «pensante» que compone la Coordinadora. Aunque participan de la planificación de acciones tácticas en el marco general de la desestabilización, conforman la gama de asesores y consultores. Básicamente está conformado por profesores universitarios o analistas políticos que han decidido asumir una condición de activistas. Sus mejores aportes a la Coordinadora los desarrollan sobre la base de la preparación del «discurso que guía la acción». Además son quienes pueden usar con mayor probabilidad de éxito, en el terreno nacional o internacional, su prestigio académico para conseguir adhesiones importantes o presentarse como entrevistados en programas de radio y tv. Muchos de ellos actúan en calidad de «bajo perfil».

Algunos integrantes: Leonardo Pizani, Trino Márquez, Herman Escarrá, Ramón Escobar Salóm, Americo Martín.

III. Tensiones al interior de la Coordinadora Democrática

1) Se identifica frustración general al interior de la Coordinadora Democrática, toda vez que las acciones programadas no cumplen con los objetivos esperados. Por ejemplo, asistencia escasa frente a las convocatorias realizadas.

2) Reconocen internamente la inexistencia de un liderazgo capaz de aglutinar a todos los factores que integran la Coordinadora Democrática. Este liderazgo — admiten — no solo es necesario para dar coherencia frente al objetivo inmediato: la salida de Chávez, sino que también dicho liderazgo debe ser capaz de ofrecer una alternativa de más largo alcance, por ejemplo, para confrontar a Chávez en una situación electoral, o para fungir, de ser el caso como el líder de la transición.

3) La inexistencia del líder se complementa de manera negativa para la Coordinadora Democrática, con los deseos de algunos sectores de hegemonizar el control de la coalición opositora, creando desconfianza y rencillas entre sus miembros. Cada vez son más frecuentes los llamados a la unidad al interior de ella. Resulta claro que, dentro de la Coordinadora, existe un vacío respecto a su dirección política. No obstante, ello no puede ser visto como una ventaja definitiva del oficialismo sobre la coalición, dado que las acciones de ella seguirán siendo — con mayor o menor conflicto interno — planificadas y ejecutadas.

IV. Diferencias entre la Coordinadora Democrática y otros factores de oposición.

Coordinadora Democrática / ctv

Respecto a otras organizaciones opositoras como la ctv, la Coordinadora Democrática es vista como una instancia opositora sin determinación resolutoria. A diferencia de la cd, la ctv se constituye en una organización opositora que tiene varias fortalezas: 1) Asesoría profesional especializada en las áreas económica y política que les permite generar prácticas discursivas «coherentes» respecto a su función opositora, 2) Apoyo económico internacional y capacidad de movilizar recursos ampliando así su radio de acción, 3) Liderazgos con determinación política como es el caso de Ortega, Cova y Ramos, 4) Vinculaciones con partidos tradicionales, 5) Capacidad de movilización.

Coordinadora Democrática / AD - Copei

Dentro de la Coordinadora Democrática, los partidos tradicionales AD y Copei son aceptados con muchas reservas. El sector «pensante» de la Coordinadora conformado por académicos y algunos miembros de la sociedad civil, repudian algunas posiciones de líderes de AD y Copei, por ejemplo, su negativa a dialogar con la Comisión Mediadora Internacional y su actitud abiertamente golpista. Otro elemento considerable de rechazo hacia AD y Copei lo conforma el deseo de estas organizaciones de capitalizar el liderazgo opositor. Esto último encuadra perfectamente con el plan de AD por el hecho de ser un partido con organización articulada, con experiencia histórica y relación con las masas. Si AD se replegó el 11 de Abril, ahora, de acuerdo a su reciente conducta política parece asumir su intención real de asumir la conducción de la oposición.

IDEAS INICIALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEMA ECONÓMICO Y SU RELACIÓN CON EL EMPLEO

1. Las consideraciones con relación a la política económica del Gobierno deben centrarse en cómo plantearse un plan de reactivación en el marco de una crisis política e institucional de severas consecuencias. Está absolutamente claro que el enfrentamiento político del Gobierno con los dos principales actores de la producción, empresarios y trabajadores, o, al menos con quienes fungen como directivos de sus principales gremios, Fedecámaras y la CTV, ha sido uno de los factores que ha imposibilitado la definición de un plan de recuperación de la economía y, en consecuencia, también del empleo. Sin duda, esta es una contradicción de difícil solución en el marco de los propósitos políticos del Gobierno. Hablamos, por supuesto, del proyecto político general, el cual, en forma clara, se expresó en el paquete de leyes de la Habilitante y cuyo rechazo no se hizo esperar por parte de los actores antes mencionados. Incluso, fue argumento para el fomento de la acción golpista.

2. Sin embargo, es conveniente puntualizar que la desaceleración y el crecimiento negativo de la economía nacional son recurrentes desde hace muchos años, digamos veinte años, y no son responsabilidad exclusiva de este Gobierno. Lo dice, en forma palmaria, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rodrigo Cabezas: «La crisis [...] desborda gobiernos, consume tiempo, evapora la inversión, robustece la especulación,

reduce el salario, achica el mercado, descapitaliza a los capitalistas y empobrece a las mayorías» (*El Nacional*, A8, 19 de mayo de 2002). Claro está que este acertado diagnóstico no puede ser argumento para la parálisis y la inacción oficial, sino, más bien, el aliciente para entender con meridiana claridad las dimensiones del reto planteado en materia económica.

3. Uno de los puntos de mayor preocupación es el del déficit fiscal. Según el director de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, Francisco Rodríguez, dicho déficit alcanza una cifra de 6 billones de Bs., los cuales equivalen aproximadamente a 6.3% del PIB. Esta conclusión la extrae de un análisis comparativo de ingresos y egresos, donde la sumatoria de los ingresos petroleros y no petroleros alcanzan un monto de 17.6%, 7.9% y 9.7%, respectivamente; mientras el gasto alcanza la cifra relativa de 23.9%. Como observamos una diferencia de 6.3%. Este gasto aparece discriminado así: 4.2% correspondiente a intereses de la deuda y 19.7% al gasto corriente (*El Nacional*, E2, 20 de mayo de 2002). Sin duda, e independientemente de las versiones apocalípticas de la oposición, este desbalance financiero y fiscal solo puede ser atendido con un programa económico que, no solo dé respuesta a la coyuntura, sino que se plantee en términos del largo plazo.

4. Los ministros de la economía hasta el día de hoy no han formulado públicamente opinión definitiva, sin embargo, se han colado a la prensa algunas de las premisas del borrador del documento: "Propuesta económica para la unidad nacional", el cual aparece reseñado en el semanario *Quinto Día* del 17 de mayo de 2002. Un apretado resumen de este papel de trabajo nos dice que se trata de: a) Un programa de reformas fiscales y productivas con el fin de restablecer la credibilidad en los mercados internacionales y en el sector privado. b) Sobre esta base iniciar conversaciones con los organismos multilaterales (BID, BM y FMI). c) Aumento de la oferta monetaria a través de operaciones de mercado abierto con el objeto de bajar las tasas de interés y restablecer la liquidez, y 4) Intervención inmediata de bancos en problemas para evitar la crisis financiera, con programa de asistencia a aquellos que sean rescatables.

5. Especial atención merece la evaluación del pensamiento y la concepción económica del nuevo ministro de Planificación y Desarrollo, Felipe Pérez. En oposición a la denominada «Tercera Vía», cuya promoción se atribuye a Tony Blair, quien plantea una nueva relación entre Estado y mercado, Pérez auspicia la integración de esos mecanismos con «uno muy real y efectivo como lo es la solidaridad». Agrega que la Cuarta Vía no solo abarca el ámbito

económico, sino también el político y el social, combinando los mecanismos de la asignación de recursos en la trilogía Estado, mercado y altruismo o solidaridad. Asevera, además, que «se trata de un modelo que se convierte en una respuesta frente a los procesos de globalización, desigualdad, injusticia, deshumanización, deterioro ambiental, estancamiento económico y neoliberalismo salvaje» (*El Nacional*, E2, 20 de mayo de 2002). Esta digresión la hacemos en razón de intentar comprender los alcances de un plan económico hilvanado bajo estos criterios, por uno de los principales actores del equipo económico del Gobierno. Interrogantes que surgen: ¿cuál sería el papel del Estado en cuanto al empleo se refiere en la aplicación práctica de la Cuarta Vía? ¿Cómo sería la relación mercado-solidaridad en esta concepción? ¿Si los ajustes que se proponen, de carácter fiscal y monetario, tienen un duro efecto en los sectores socioeconómicos menos favorecidos, cómo encarar los conceptos de altruismo y solidaridad?

6. Sea cual sea el plan económico a adoptar por parte del Gobierno, hay algunas cuestiones acerca de las cuales hay que tener claridad:

a) El Estado es el principal empleador como consecuencia del rentismo petrolero. Solo hay una forma de descargar al Estado de la carga burocrática excesiva: la diversificación de la actividad productiva.

b) ¿Cómo plantearse este objetivo?: necesariamente hay que elaborar un plan que involucre al capital privado, independientemente de las acciones que pueda emprender el Estado, con sus propias empresas e iniciativas. El ministro de Finanzas ha estado asomando un programa cuyo eje sería un régimen de concesiones en áreas como: energía, infraestructura, puertos, hipódromos, etc. Pero, por supuesto, ello no es suficiente. Es requisito indispensable un plan que involucre al sector empresarial y al laboral en las más diversas ramas de la producción.

Y esto requiere un mínimo acuerdo o consenso entre, al menos, tres actores: empresarios, trabajadores y Estado. Para este objetivo hay que aplicar la política del diálogo, necesariamente hay que concertar acciones con los sectores productivos del país, independientemente de la controversia política, si se quiere avanzar en esta política. ¿Cómo? Necesariamente en este punto hay que hacer puentes de negociación.

c) Afinar los esfuerzos del Estado en los sectores que tradicionalmente han sido los de mayor capacidad para la generación de empleo: PYMI y construcción.

- d) Elaborar un plan coordinado desde el Consejo Federal de Gobierno a fin de involucrar activamente a Gobernaciones y Alcaldías en el objetivo de incrementar el empleo. Activar el Fides con ese propósito.
- e) Impulsar un agresivo plan de dotación de tierras en poligonales y zonas estratégicas. Acompañado de un programa de créditos de la banca pública y privada a fin de cubrir la demanda financiera del sector.
- f) Formular un programa de incentivos y exenciones tributarias para aquellas unidades de producción que incorporen determinadas plazas de empleo.

Inamovilidad laboral

1. Contexto económico, social y político

Las condiciones económicas, sociales y políticas que sirvieron de marco para la emisión del Decreto N° 1.752, Gaceta Oficial N° 5.585, de fecha 28 de abril de 2002, mediante el cual el Ejecutivo Nacional aumentó el salario mínimo, tal como se especifica en aquel, y la inamovilidad laboral para los trabajadores del sector público y privado, por un lapso de 60 días, siguen siendo básicamente las mismas.

No obstante, habría que considerar que algunas variables económicas se han visto modificadas, como por ejemplo, el tipo de cambio que experimentó una variación entre los meses de abril y junio del 2002, significando esto que la moneda nacional se depreció en casi un 57% de acuerdo con estimaciones del Banco Central.³

Por una parte, se evidencia un alza en los precios de renglones como: vestido y calzado (8.4%), salud (6.8%), servicios públicos (5.3%). Por otro lado, no se observa de parte del empresariado la adopción de un plan de inversiones que faciliten la generación de nuevos empleos. De igual forma, aún cuando se viene trabajando el tema por parte del Gobierno, tampoco hay incidencia inmediata en esa materia.

En el plano social la situación de los trabajadores es también de mucha incertidumbre. De una parte porque las políticas oficiales son insuficientes para atender el grueso de sus demandas, pero además, porque la dirección sindical, instrumento por excelencia para la conducción de las luchas reivindicativas de sus intereses, está dividida, convertida en elemento de la contien-

3. Cálculos propios basados en los tipos de cambio de referencia del bcv según valores de venta para el último día hábil.

da política y distanciada de la definición de un programa estratégico de corte laboral. En ese sentido, dirigentes de la CTV, como es el caso de Froilán Barrios, han declarado el abandono de la agenda laboral por parte de ese organismo sindical. Por otro lado, la FBT todavía no logra alcanzar el rango organizativo y la fuerza necesaria para liderizar el movimiento de los trabajadores en una perspectiva distinta.

En el ámbito político, la recurrencia de la oposición en su intención de desalojar del poder al presidente Chávez ha resultado un factor de perturbación permanente, no solo de la estabilidad política en sí misma, sino, además, de alteración continua de la paz social necesaria para enrumbar la economía. Si se tiene en cuenta que el vencimiento del grueso de las contrataciones colectivas, de los sectores público y privado, está concentrado en lo que resta de año, no se necesita ser muy avisado para deducir que este escenario es para la oposición un verdadero caldo de cultivo para la subversión.

2. Posición de los principales actores

2.1. Fedecámaras

Para este organismo empresarial la extensión de la inamovilidad laboral no es la medida adecuada para resolver la crisis de empleo que hay en el país. Así lo refirió Albis Muñoz, vicepresidenta del ente, el 28 de junio de 2002, cuando el Gobierno emitió un segundo decreto prorrogando la inamovilidad por treinta días. Señaló: «Si una empresa está a punto de quebrar allí no hay inamovilidad laboral que valga, lo que nos interesa es ver cómo mantenemos los puestos de trabajo». Agregó la misma fuente empresarial que:

[...] dictar una medida de inamovilidad laboral constituye una medida coyuntural. Las empresas no pueden seguir soportando más las nóminas, de modo que esa medida lo único que logra es tapar el sol con un dedo y no se ubica la raíz del problema.

De igual manera, Las opiniones de Conindustria y Fedeindustria son coincidentes con la anterior apreciación de Muñoz: el primer organismo empresarial antes citado indica que «En los actuales momentos la situación de parálisis de la industria nacional, con una caída de casi 7%, según datos del bcv, es muy grave, reportándose como la mayor caída en ese índice». (Correspondencia a viceministra del Trabajo, 18 de julio de 2002). Y agregan, «Sin

duda una medida de inamovilidad que sea recurrente aumenta considerablemente los niveles de inseguridad jurídica y desconfianza en el país». (Lope Mendoza, presidente)

Por su parte Fedindustria indica que «El ambiente de tensión en las relaciones Gobierno-empresarios no propicia un contexto favorable para la aplicación de una medida de este tipo, por el contrario agudiza las diferencias» (Fax del 18 de julio de 2002, enviado a la viceministra del Mintra por Miguel Pérez Abad, presidente).

2.2 CTV

Froilán Barrios dirigente de esta central obrera señaló que: «[...] el decreto de inamovilidad se comparte porque supone la protección del trabajador, pero no soluciona nada sino que probablemente acelerará la declaratoria de quiebra de algunas empresas». Interrogante: ¿A quién defiende y a quién representa Barrios entonces?

Más allá de cualquier declaración particular de los dirigentes de este organismo sindical lo que salta a la vista es el carácter político y beligerante que ha venido adoptando, no en busca de la reivindicación laboral como tal, sino en busca de un objetivo como lo es la salida del presidente Chávez. De allí que le resulte cuesta arriba pronunciarse a favor de un decreto que proteja a los trabajadores.

La base estructural de la CTV es un 68% del sector público y el 32% del sector privado, gran parte de ellos sindicatos de maletín (solo operan para cubrir legitimación de contratos o acuerdos con la patronal sin relación directa con los trabajadores). Los sindicatos reales están diseminados en cientos de empresas controlados por «arriba» por federaciones nacionales.

Aunque la CTV mantiene el control de las centrales por el fraude del año pasado, esta central perdió el control de la mayoría de los sindicatos de base del sector manufacturero, manteniéndose con fuerza en construcción y en transporte. En estos dos sectores las consecuencias de la inamovilidad es mínima ya que el primero depende de contratos a tiempo determinado y, el segundo, se caracteriza porque la mayoría son propietarios de las unidades de transporte o socios por lo que no existe la figura del despido.

Sin embargo, en la gira antes del 11 de julio, en asambleas limitadas a los dirigentes adeptos, la cúpula cetevista se encontró con un fuerte rechazo. El reclamo de la base sindical fue el problema de los despidos masivos, cierre fraudulento de empresas, violaciones de contratos colectivos, etc. Estos exi-

gían acción en contra de la patronal y denunciaban el acuerdo Fedecámaras-CTV como una mordaza.

Esto coincide con la consulta hecha por la FBT a los sindicatos de base donde se estima que cuando acabe el período de inamovilidad ocurrirá una ola de despidos masivos. De hecho se detectó que dentro de los planes de agitación para el 11 de Abril se pensaba un plan de despidos y cierre de empresas en el eje Aragua-Carabobo-Lara.

Así, el tema de la inamovilidad debe ubicarse en dos contextos, el de las relaciones obrero-patronales y el político. En el primero, los sindicalista opinan que habrá despidos injustificados y los patronos no, por tanto la inamovilidad no crearía perjuicios al patrón (ya que no piensa despedir) y traería confianza al trabajador (quien piensa puede ser despedido).

Queda el tema del despido justificado que se hace por razones técnicas. Aquí se prevé la calificación de despido por parte del Inspector del Trabajo tal como lo establece la ley. Y en el caso de despidos masivos por razones técnicas, la ley también prevé el mecanismo, equivalente a un pliego de peticiones de corte sindical pero a la inversa.

Ahora, cuando el despido se da dentro del contexto político, muchos empresarios rechazan la inamovilidad porque creen que les quita un arma de control sobre el trabajador.

Y, por último, el problema de la conspiración que adelantan algunos empresarios quienes crean crisis en circuitos económicos que normalmente son de baja rentabilidad, pero, al que están asociados pequeñas y medianas empresas, lo que ocasiona una caída de la actividad productiva y obliga a una reducción de nómina. En estos casos el despido masivo tiene la intención de renovar el personal o eliminar la carga de prestaciones. Aquí la inamovilidad no es problema porque no se recurre al mecanismo legal sino a la razón patronal por vía de hecho.

2.3. Posición del Gobierno

Ante la situación antes descrita el Gobierno está en la obligación de formular políticas de protección a los trabajadores. Por una parte porque el derecho al trabajo es de rango constitucional (Art. 87 y 88) y, además, porque no hay en esta coyuntura interlocutores válidos, o al menos con la suficiente fuerza, para impulsar políticas de este tipo.

Si se tiene en cuenta que el Gobierno decretó un aumento salarial, el cual aún no ha terminado de cancelarse, ya que de acuerdo al texto del mismo,

lo restante del incremento se haría efectivo luego del 1º de octubre, ello no solo justificó la primera prórroga, sino que también es un elemento jurídico para argumentar una segunda prórroga, comprendida entre el 31 de julio de 2002 y el 31 de octubre de 2002. En medio de una situación de incertidumbre como la que viven los trabajadores esta sería una medida que, si bien no resuelve problemas de fondo, puede aminorar la amenaza creciente de una ola de despidos.

Conclusiones

1. El Gobierno debe decretar la inamovilidad por tres meses, desde el 31 de julio de 2002 al 31 de octubre de 2002, en primer lugar porque no ha terminado de concretarse el incremento del salario mínimo decretado el 28 de abril pasado, el cual se pagará para el último de octubre; y, en segundo término, porque en ausencia de mecanismos de protección social para los trabajadores, ante la amenaza creciente de una nueva ola de despidos, le corresponde al Estado asumir dicha tarea. (Artículos 87 y 88 de la *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*).

2. Una medida de este tipo necesariamente no lleva a un enfrentamiento de fondo entre Gobierno y empresarios, sobre todo si se tiene en cuenta que «la deducción laboral más intensa se efectuó el primer trimestre del año...» como lo reconoce el Ing. Pérez Abad, presidente de Fedehindustria. Y, además, si de dialogar se trata en materia de reactivación de la economía y generación de empleo, el Gobierno tiene las puertas abiertas para ello. El principio del cual debe partirse es: una política para generar empleo debe comenzar por respetar los ya existentes.

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, WLADIMIR RUIZ TIRADO, EN LA DECIMOQUINTA REUNIÓN REGIONAL AMERICANA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Buenos días a todos y todas ustedes, honorables delegados, delegadas, e integrantes de la Mesa Directiva de esta Reunión Regional Americana.

Mi patria, Venezuela, vive una situación muy especial. Desde 1998 iniciamos en el país un proceso de cambios, de carácter absolutamente democrático y pacífico, los cuales han sido consagrados en un nuevo orden constitucional, resultado de la realización de siete procesos electorales. Cambios que han

contado con el protagonismo del pueblo, no solo en la acción electoral, sino en su decisiva participación como actor fundamental, eje alrededor del cual se construye este proyecto transformador, cuyo norte apunta hacia el logro de ideales fundamentados en los valores de la democracia y la justicia social.

Asumimos estos cambios como un reto histórico. Ante nuestros propios asuntos nacionales y ante los planteados por la creciente mundialización de las relaciones humanas.

Resalta la coincidencia entre el programa estratégico de la OIT, en sus cuatro grandes objetivos y el contenido de nuestra carta constitucional, en particular en estos grandes temas: derechos fundamentales del trabajo; trabajo decente, digno y productivo; protección y seguridad social; y diálogo social como instrumento democrático y democratizador.

En ese sentido y con esas coincidencias Venezuela ha ratificado durante largo tiempo, y lo reafirma ahora, muchos convenios con la OIT cuyo objetivo expreso es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y sus libertades sindicales y democráticas. Somos los más interesados en que los trabajadores tengan un trabajo digno, decente. Para ello impulsamos una política de diálogo nacional a fin de reactivar la economía y generar empleo. A partir de esta experiencia se ha generado un nuevo tripartismo, no el de las elites tradicionales, sino el de los trabajadores y empresarios que asumen un compromiso de trabajo y responsabilidad con su país.

De igual forma, hemos auspiciado en Venezuela, con pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos, con la facilitación de su Secretario, Dr. César Gaviria, y con la participación del Centro Carter y el PNUD-ONU, una política de diálogo que expresan el interés del Gobierno por resolver las tensiones políticas por esa vía.

Sin embargo, todos estos propósitos y esfuerzos del Gobierno y el pueblo de Venezuela, así como de la mayoría de los países de América, contrastan con programas y concepciones del ejercicio del poder de carácter excluyente. Se ha venido imponiendo un programa de carácter tecnocrático-mercantil, o de «capitalismo salvaje», como lo llamó Su Santidad, el Papa, donde los poderosos de la tierra tienen plena responsabilidad en la injusticia social, la pobreza y los desequilibrios del mundo de hoy.

Por eso nuestro camino es el de la integración. Ya hace casi dos siglos, El Libertador, Simón Bolívar, lo planteó. Hoy es una necesidad perentoria. Frente a la alternativa de un mercado único y voraz, solo cabe avanzar en el

camino de la unión de nuestros pueblos alrededor de políticas concretas en todos los órdenes posibles. Fortalecer el Mercosur, la CAN, el CARICOM, entre otras iniciativas subregionales es un norte imperativo.

Señalamos lo anterior porque el camino que hemos escogido en Venezuela, original, único, independiente, democrático y pacífico, también requiere de la concertación continental de políticas ante el ALCA, el enorme peso de la deuda externa o la brutal acción del capital especulativo, entre muchas otras.

Ese camino al que nos referimos y que los venezolanos y venezolanas hemos elegido como pueblo soberano fue brutalmente atacado por fuerzas oscuras que el pasado 11 de Abril dieron un golpe de Estado contra la institucionalidad democrática de nuestro país, desconociendo todos los poderes legítimos y legalmente constituidos.

La acción protagónica del pueblo valeroso, junto a la actitud institucionalista de la Fuerza Armada Nacional, hizo posible que, en tan solo 48 horas, se restituyera el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país.

Parte fundamental de ese pueblo son los trabajadores y trabajadoras, quienes se constituyen en protagonistas de primera línea del proceso de cambios que vive Venezuela.

Hoy se repite el mismo guión, casi con los mismos actores como protagonistas, viejas cúpulas sindicales, patronales y políticas pretenden reeditar el golpe de Estado del pasado mes de abril. Han paralizado indefinidamente el país, llamando a la insurrección militar y ejecutando actos de sabotaje y piratería en nuestra principal empresa, PDVSA. Han propiciado la muerte de personas inocentes. A ellos les corresponderá rendir cuentas ante la justicia y al pueblo de Venezuela, afortunadamente podrán hacerlo en democracia, ejerciendo a plenitud todos los derechos que como ciudadano les asisten.

Estamos dispuestos a continuar ejercitando la tolerancia, a fortalecer nuestro talante democrático y, siempre aferrados a los grandes principios de la humanidad, a ir aprendiendo a superar todo vestigio de violencia y dogmatismo. Es una obligación hacerlo.

El futuro pertenece a quienes seamos capaces de luchar por construir el sueño de una patria y de un mundo, donde reine la paz sobre la base de la justicia. Para lograrlo es necesario avanzar ahora en el diálogo, sin que ello signifique impunidad.

Es por esta última razón que Venezuela, como país y como Gobierno, como pueblo trabajador, dispuesto a superar la pobreza y el atraso, adhiere

las causas populares y democráticas de América y del mundo, el reclamo por la autonomía, la autodeterminación y soberanía de los pueblos, el respeto por los inmigrantes, el reconocimiento de las comunidades aborígenes, las luchas de las mujeres segregadas, el respeto a la dignidad de los niños y su derecho a una infancia para jugar, amar y aprender, entre tantas luchas legítimas planteadas en el mundo de hoy.

En nombre de mi pueblo y de mi Gobierno muchas gracias por saber escuchar, y por toda la solidaridad brindada en estos tiempos difíciles.

Reciban todas y todos ustedes un abrazo fraterno de nuestra parte.

¡Bolívar vive!

Lima, diciembre de 2002. WRT

2.4 Para enfrentar la huelga del 21 de octubre de 2002

Algunas ideas para enfrentar la acción huelgaria de la oposición

1. Consideraciones preliminares

1.1. En esta oportunidad no habrá sorpresa. Tanto Gobierno como oposición saben a que atenerse. El primero, con el balance del anterior golpe de Estado tiene sus cuentas sacadas: ha depurado las filas castrenses y fortalecido las organizaciones populares y de trabajadores, de igual manera, no solo ha ganado tiempo, sino que sobre la base del conocimiento del adversario y la ventaja relativa que da el uso de los poderes estatales puede barajar diversas opciones para enfrentar la huelga y un nuevo y eventual intento de golpe. La oposición parece no haberse recuperado de la derrota anterior y, no solo carece de una dirección homogénea, sino que luce dividida en la definición de su estrategia, sin embargo, la fuerza de su poder económico y mediático, a la par que la conjunción de la fuerza de la *CTV*, los partidos tradicionales y la clase media agrupada en diversas asociaciones con fachada civil, aún le dan aliento político. Parece claro, además, que al menos algunos sectores de ella intentarán reeditar el esquema de abril: convocatoria a paro, seguido de huelga indefinida, marcha y convocatoria a una abierta insurrección, con especial

convocatoria a la FAN para que actúe.

1.2. Al igual que en el paro del 10 de diciembre 2001 y el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, el principal actor de la acción huelgaria es Fedecámaras, ello explica el carácter básicamente empresarial del mismo, pues esta fuerza económica-social, aunque no plantea directamente la salida del presidente como consigna, es el eje del paro político y económico y le confiere una orientación de clase y de proyecto con clara vocación neoliberal.

Claro está que esta posición del gremio empresarial tiene sus diferencias con la visión política que puedan tener algunos partidos políticos, como AD, por ejemplo, o con algunos de los miembros de la «Coordinadora Democrática», pero, quien le imprime un sello clasista y una orientación definida al plan político para salir del presidente es Fedecámaras. De igual forma, la CTV puede tener sus discrepancias con Fedecámaras, pero, en su línea anti-Chávez no le importa coprotagonizar con el empresariado antinacional. De hecho, ya nombró una Comisión de Estrategia para articular el plan del paro. De cualquier manera, es conveniente seguir atentamente esta puja por el control en la dirección del movimiento opositor, pues, no solo se disputa esa hegemonía, sino también la definición del método para salir de Chávez, así como el modelo a implantar ante una eventual caída del presidente. Ejemplo de ello es la posición asumida por diversas asociaciones civiles para quienes la salida política debe estar enmarcada dentro del marco constitucional, proponiendo para ello la enmienda y el referendo consultivo o revocatorio.

2. Acciones que debe emprender el Gobierno, sus aliados políticos, los trabajadores otras organizaciones, como círculos bolivarianos, redes populares, etc.

2.1. Enfrentar el golpe que está detrás del paro. Desde ya se deben definir acciones concretas para «adelantar» la fecha del paro opositor, es decir, no esperar a que este se produzca y, luego, actuar solo a la defensiva. Se trata de tomar la ofensiva pero con un plan previamente definido. Entre otras acciones se pueden instrumentar:

2.1.1. Los trabajadores y los círculos bolivarianos deben comenzar desde ya a pronunciarse públicamente anunciando las posibles acciones a desplegar ante la inminencia del paro.

Los trabajadores pueden, por ejemplo, propagar el discurso: «Empresa de servicio público cerrada; empresa donde asumiremos el control». Es decir,

adelantarse con el discurso a la acción. Si esta última es necesaria es preciso disponer de un plan con empresas emblemáticas para su ocupación. Los trabajadores deben comenzar a hacer actos contra el golpismo denunciando la no cancelación de los días del paro anterior. Además, si es necesario el Gobierno puede amparar estas acciones con el decreto previamente elaborado a tales efectos (ya está elaborado) y la aplicación de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, si está decretada la excepción.

Los Círculos Bolivarianos pueden desde ya anunciar: «Comercio de bienes indispensables cerrado; establecimiento que abriremos». Hay que generar un discurso coherente con la preparación de la gente organizada para enfrentar el paro y que, a la vez, le diga expresamente a quienes estimulan el cierre de los establecimientos que los mismos pueden ser asumidos por la población organizada en caso de necesidad o por razones de utilidad pública.

2.1.2. El Gobierno debe tener listo el decreto de Estado de excepción. Independientemente del grado de fragilidad política en la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, este instrumento es la herramienta constitucional que le otorga al Estado y al Gobierno la potestad para, no solo suspender temporalmente garantías constitucionales, sino para proteger a la propia constitución ante la amenaza de una golpe de Estado y, además, protegerse a sí mismo. En consecuencia, el Gobierno debe tener listas las medidas de contingencia, un plan de contingencia, cuya aplicación mínima debe estar enmarcada dentro del Artículo 210 del Reglamento de la LOR vigente y la Ley de Seguridad y Defensa Nacional (Anexo), pero, que puede ampliar su rango de aplicación de acuerdo a lo que las circunstancias exijan.

2.1.3. Hacer un permanente monitoreo a los sectores laborales de mayor importancia y de incidencia estratégica ante una huelga general, entre ellos:

- Metro de Caracas.
- Sector eléctrico (Gurí).
- Empleados públicos.
- Empresas básicas.
- Transporte público urbano, especialmente Caracas y Carabobo.
- Trabajadores de PDVSA. (Especial atención a la dirigencia de Unapetrol, empleados de la nómina mayor, encabezados por Horacio Medina, quienes aunque no se han pronunciado favorablemente a la agenda golpista, no hay razones para fiarse de su «neutralidad» en caso de paro, recordar que en Abril este fue el detonante de la huelga y el golpe.

2.1.4. Los trabajadores organizados de la FBT pueden también solicitar reuniones, anunciadas públicamente, con los componentes de la FAN, a fin de intercambiar criterios en relación a la anunciada acción huelgaria de carácter golpista. Esta acción debe ser muy selectiva, pueden ser Baduel, Acosta Carles, entre otros, es una cuestión simbólica, reforzar la relación trabajadores-FAN.

2.1.5. Una acción a considerar sería la de tener preparado un contingente de trabajadores, motorizados y círculos para una posible acción de toma de la crv. Esto de acuerdo a cómo evolucione el paro y la acción golpista, pero no se debe descartar de plano, si vienen con todos los hierros, hay que responder con fuerza.

2.1.6. Un tema a considerar ante una situación pregolpista, como la que vivimos, es el de la unidad de las fuerzas políticas afectas al proceso, ya lo dijo el presidente Chávez, pero ello no es suficiente, es preciso acordar una inmediata jornada de trabajo para unificar la estrategia y las acciones a seguir, de ello depende no solo la conformación de un comando unificado, sino la definición de objetivos y campos de acción predeterminados.

2.1.7. Otro elemento a considerar es el seguimiento y control permanente del sistema de pagos de la nómina del sector público, por allí se puede colar un paro de empleados, muy sensibles ante el retardo de la cancelación de sus salarios.

Para interpretar el paro del 21 de octubre de 2002.

1. Más allá de las cifras

Resulta obvio que la oposición abulta exageradamente las cifras, las cuales le darían al paro, no solo un sobredimensionamiento en sus magnitudes reales, sino, además, un argumento para explotar la fuerza mediática que tales números tienen. Por esa razón, un análisis, más allá de esas cifras, sí puede ofrecer una visión más clara de la fuerza real del paro y su impacto político nacional e internacional.

2. ¿Quiénes se pararon?

La calificación que hizo el Gobierno en relación al carácter del paro, como un paro empresarial, es correcta. Tanto la fuerza económica y social que sirvió de soporte al paro, así como su argumentación ideológica y política, provienen de *Fedecámaras*. Se incluyen allí, no solo los más recalcitrantes opositores

al Gobierno, agrupados alrededor de Consecomercio, sino, además, el resto de las organizaciones gremiales de empresarios que adversan el proyecto que lideriza Chávez.

Es una cuestión de fondo, de diferencias conceptuales y políticas sobre la «libre empresa», el libre mercado y su inviabilidad en el marco de la propuesta Chávez. La expresión más concreta de esta diferencia es la oposición a ultranza del paquete de leyes de la Habilitante. Sin embargo, va mucho más allá, se expresa muy claramente en el protagonismo político asumido por la «cúpula empresarial» desde, en, y luego del golpe de Estado del 11 de Abril. Dicho de otra manera, estos sectores son y representan otro proyecto, tienen otra concepción y otra estrategia del desarrollo nacional, pero, a la vez, son los «caballos de tiro» del resto de la oposición, independientemente de sus matices y de quienes asuman hacia afuera la vocería política.

Lo anterior es lo que explica el porqué la CTV aparece aparejada a este plan empresarial. En la dirigencia de este gremio de los trabajadores, además de su ilegitimidad y de su vinculación política con el «antiguo régimen», existe una pérdida, se puede decir absoluta, de proyecto histórico asociado a los intereses de los trabajadores. No de otra manera puede interpretarse cómo una organización de trabajadores pueda estar al servicio, de manera ciega e irresponsable, de un proyecto económico y político que preconiza su liquidación. Por eso, su participación como co-protagonista del paro hay que interpretarla, no solo como el más hostil y adverso obstáculo que tienen los trabajadores venezolanos para desarrollar su autonomía dentro del proceso político actual, sino como la principal rémora a superar.

En el plano de las organizaciones políticas que auparon el paro, aún cuando existen en apariencia, diferencias programáticas e ideológicas, el hecho de sumarse alrededor de un propósito común como lo es el derrocamiento de un Gobierno, no solo legítimamente constituido, sino con clara vocación y orientación popular, les coloca a la cola del plan empresarial y de espaldas a los intereses de la nación. ¿Cómo explicarse la coincidencia política entre La Causa R, Bandera Roja, Primero Justicia, Copei y AD?, solo para citar los más conspicuos representantes de esta «multicolor» alianza opositora.

Y, de igual manera, las diferentes ONG, las cuales funcionan de similar manera a los partidos políticos, básicamente con el mismo discurso y la misma intención, ¿Cómo se explica su rechazo abierto y sistemático al proyecto «Chávez»? Sencillamente porque saben, conocen y tienen una clara visión de

hacia dónde apunta el proceso político. Y, además de eso, porque expresan un punto de vista de «clase», expresan la ideología de las capas medias de la población, atadas al carro del proyecto de «la libre empresa» y asociadas a las formalidades democráticas que le son consustanciales.

Las anteriores consideraciones describen brevemente la composición diversa pero, a la vez, unificada y compacta, de un bloque opositor donde la lucha por su dirección y control hegemónico no le impide desplegar un plan político cuyo objetivo central es el derrocamiento del Gobierno. Nunca antes en la historia de Venezuela se había cohesionado una alianza opositora similar contra un Gobierno electo democráticamente, con tanta fiereza y despiadada saña, además, de una inusitada dosis de impaciencia y desespero por salir del régimen.

Quizá por esto último sus acciones y objetivos lucen desproporcionados con respecto a sus capacidades reales. Pasar de un ultimátum, como el lanzado el 10 de octubre por Ortega, a una propuesta de recolección de firmas para la realización de un referendo consultivo, revela, entre otras cosas, las limitaciones y la disminuida capacidad política de la oposición. No tiene la misma fuerza sin la presencia del componente militar, como factor de choque para el despliegue de sus acciones, ni tampoco tiene un discurso coherente que le permita ampliar su influencia política entre los sectores populares.

Paradójicamente, han sido los propios medios de comunicación, afectos a esta alianza, los que destilan una diferencia y un odio de clase respecto a los sectores del pueblo llano y a los trabajadores. Dice, por ejemplo, el diario *El Universal* (22 de octubre de 2002), al referirse al paro: «Éxito casi total en el sureste y noreste, salvo en los enclaves populares como Petare y La Lucha». Es decir, los «enclaves» populares son bastiones de la revolución y están codificados como tales, una diferencia que no solo es de clase, sino que también tiene su expresión geográfica. Dice el mismo diario: «En Caracas, el noroeste desestimó la convocatoria, el suroeste estuvo a media máquina».

Todo lo expuesto anteriormente también revela que el grado de desarrollo que viene alcanzando la lucha de clases y la contienda política en Venezuela está alcanzando su punto más álgido. Uno de los indicadores de esta apreciación es la posibilidad real de un intento de magnicidio o de atentados selectivos a otros dirigentes. La desesperación es mala consejera y puede llevar a este tipo de acciones extremas de la lucha política. Sin evaluar en profundidad la denuncia hecha por el presidente, esta posibilidad se incrementa en el

escenario de un encrespamiento de la lucha política como la que se avizora en lo próximos meses. Si se tiene en cuenta la importancia del liderazgo del presidente en el actual proceso este debe ser un asunto de extrema seguridad.

3. En relación al paro

3.1. El hecho de no haber declarado el paro indefinido puede interpretarse como una muestra de debilidad.

3.2. Pasar de un ultimátum, como el formulado el 10 de octubre, a un proceso de recolección de firmas para la realización de un referendo consultivo es también un síntoma de pérdida de piso político. (De producirse un emplazamiento al CNE para la realización de un referendo consultivo preguntando acerca de la renuncia del presidente, esto podría ser materia de interpretación por parte del TSJ)

3.3. Hay que prepararse con medidas similares a las del 21 octubre para enfrentar las acciones de calle anunciadas para el 4 de noviembre. Asimismo, para el 4 de diciembre cuando anuncian la insurrección amparados en el Art. 350 de la *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*.

2.5 Internacional (2002)

Escenario internacional

1. Para interpretar la situación de Venezuela en el marco internacional debemos hacer algunas consideraciones iniciales, las cuales, por supuesto, no pretenden agotar el tema, sino simplemente tener un cuadro de referencias que nos permitan avizorar la posible o real injerencia de factores externos en la actual coyuntura.

1.1. Puede decirse que el proceso venezolano aparece inserto en un mundo donde prevalece un antagonismo central expresado en dos concepciones: una, representada por el Foro Económico Mundial de Davos que sostiene el punto de vista de la ortodoxia económica capitalista, la globalización y el libre comercio, más conocida como El Consenso de Washington; y, otra, vinculada al Foro Social Mundial y cuyo lema: «Otro mundo es posible» resume sus objetivos centrados en el bienestar y la protección social.

Estados Unidos de América como primera potencia imperialista ejerce un

poder hegemónico, no solo en el mundo, sino en su propio continente, a través de varias políticas estratégicas, entre otras:

(a) La implantación del ALCA como un intento por tutelar el mercado americano en su conjunto.

(b) Independencia y autonomía energética, especialmente en el área petrolera, donde justamente Venezuela aparece como tercer gran suplidor.

(c) Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001 pretende acrecentar su poder hegemónico a través de su política de No al terrorismo y sí a la democracia. Es con esta línea como se pretende agredir nuevamente a Irak. Un escenario de ataque militar a este país tendría efectos desencadenantes, no solo en el área petrolera, en lo referente a mercado y precios, sino en el frágil equilibrio político en el Medio Oriente, lo cual puede constituirse en un foco de conflicto con diversas incidencias en la escala planetaria.

1.2. La línea política desplegada por el Gobierno de Chávez, marcada por la independencia con respecto a USA y desmarcada del neoliberalismo, es diferente y hasta hostil al pensamiento y la posición de Washington, entre otras razones:

(a) El proyecto Chávez es inviable para el ALCA, por una parte porque impulsa la creación y fortalecimiento de un mercado subregional alterno y fuerte, apoyándose en el Mercosur, la Comunidad Andina, etc., y, por otra, porque colide con los planes de apertura incondicional a las inversiones y a la desregulación a ultranza de las relaciones laborales.

(b) La política energética de Chávez de igual manera es contrapuesta al interés americano y, en particular al de Bush, ligado al negocio energético. Por un lado, porque ha mantenido un rol protagónico en el fortalecimiento de la OPEP, con acercamiento a todos los países productores, miembros o no de esta organización, y, de otro, porque promulgó una Ley de Hidrocarburos que otorga al Estado venezolano un rango de primer orden en el desarrollo energético nacional.

(c) En la Cumbre de la OPEP Chávez resaltó dos aspectos de independencia: i) que la OPEP tenga sus propias instalaciones para las nuevas tecnologías del transporte y energía a fin de invertir en futuros combustibles no fósiles, posición que acaba de reafirmar en Sudáfrica; y ii) que la OPEP saque ventaja del trueque electrónico de alta tecnología y de los intercambios bilaterales de petróleo.

1.3 Es importante destacar que inversionistas españoles tienen fuerte

arraigo en Venezuela y estuvieron de alguna manera vinculados a las acciones golpistas del 11 de Abril. Ellos siguen presentes en el país y no pueden dejarse al margen a la hora de evaluar el escenario internacional que sirve de marco al actual conflicto, sobre todo por estar vinculados al área energética, financiera y telecomunicaciones. Son, entre otros: BBVA (Principal accionista del Banco Provincial), Grupo Santander (94% de las acciones del Banco de Venezuela), Repsol (Electricidad), Indra, Prisa (con fuertes vinculaciones con Cisneros, Bavaria, etc.).

2. Las manifestaciones concretas de la presencia activa del Gobierno americano y español en el pasado golpe de Estado y en la preparación de un nuevo escenario de igual naturaleza no son secreto para nadie, podemos anotar las siguientes:

2.1. La posición de ambos al momento del golpe de Estado fue de respaldo al Gobierno de facto, en el caso de Estados Unidos, desconociendo la Carta de la OEA.

2.2. El gobierno americano ha anunciado públicamente la instalación de una Oficina para Iniciativas de Transición en Venezuela.

2.3. Los beneficiarios de donaciones del *Nacional Endowment For Democracy* han sido desde la CTV, en forma continua y sistemática, hasta diversas organizaciones civiles conocidas como ONG. (*Últimas Noticias*, 28 de agosto de 2002).

2.4. Presencia de funcionarios del Departamento de Estado en los lugares donde se reunieron los golpistas, así como la reunión del embajador Shapiro con Carmona.

2.5. El acercamiento sistemático de la CTV con diversos actores del establecimiento político americano. Con miembros del Partido Republicano, del Partido Demócrata, con Alex Watson, ex embajador ante la ONU, con Brian Lattel, ex subsecretario de Estado para América Latina, entre otros. (*El Nacional*, 13 de junio de 2002).

2.6. El embajador se reúne frecuentemente con los líderes de la oposición. La última de estas reuniones fue reseñada por el diario *Tal Cual* en su edición del 04 de septiembre de -09-02. Entre los asistentes: José Curiel, Felipe Mujica, Luis Manuel Esculpi, Agustín Berríos, Jorge Sucre, Elías Santana y Cipriano Heredia.

2.7. En el caso del Gobierno español encontramos una ofensiva en dos

direcciones: una, donde voceros de ese país intentan vincular al Gobierno de Venezuela con Batasuna, organización vasca recientemente ilegalizada y, otra, las continuas gestiones del juez Garzón para enjuiciar a Chávez por el supuesto financiamiento del BBVA, así como por supuestos delitos de lesa humanidad.

Conclusión:

1. Las condiciones políticas que internacionalmente generaron el golpe de Estado se mantienen intactas. Puede decirse que las razones que llevaron a las fuerzas internacionales antes descritas a potenciar la acción golpista se han reafirmado con la elaboración de nuevas políticas, la creación de nuevas oficinas, el establecimiento de nuevas alianzas y la activación de acciones concertadas con la oposición nacional.

¿Qué hacer?

1. Activar de inmediato una ofensiva diplomática que permita dar a conocer la actual situación venezolana, especialmente la referida a la posibilidad de una nueva acción golpista.

2. Fortalecer las alianzas internacionales a fin de impedir cualquier posibilidad de cerco económico y financiero.

3. Ampliar la capacidad comunicativa e informativa de la posición del Gobierno de Venezuela en el exterior por todos los medios posibles.

4. Generar una línea de opinión favorable al diálogo nacional, con agenda propuesta, ante la presencia de la Comisión de la OEA.

5. Denunciar el plan golpista de la CTV y su acción de huelga general ante las organizaciones sindicales del mundo.

Anotaciones para interpretar el escenario internacional.

1. De la caracterización de la política exterior de Estados Unidos

Un intenso debate se realiza sobre este tema, tanto en lo interno de Estados Unidos de América como en el resto del mundo y no es casual, ni mucho menos circunstancial, su pertinencia. Esta nación ha devenido potencia hegemónica en virtud de su enorme poderío económico, militar y tecnológico, agregado al hecho de haberse convertido, además, en el actor fundamental de las relaciones internacionales luego de los resultados de las dos guerras

mundiales del siglo pasado y el desplome de la experiencia soviética.

Más aún, luego de los atentados terroristas del pasado 11-S del 2001, se ha hecho indispensable sopesar con mucho más atención el rumbo y la estrategia de la política exterior americana. Ello en razón de la redefinición de los términos bajo los cuales se inspira la denominada «guerra contra el terrorismo», generalmente asociada a la lucha «contra la guerrilla y el narcotráfico». Ya en la campaña electoral que llevó a Bush al poder en el año 2000 se anunciaba la transformación de la política internacional de esa nación y los atentados han sido un detonante para que se pasara de la teoría y el programa a la acción, es decir, a la aplicación sistemática de una línea de acción basada en el uso de la fuerza. Y no es que Estados Unidos no haya hecho antes uso de la fuerza, sino que, ahora, es un componente esencial en la definición de su política exterior.

Dentro de los Estados Unidos existen por supuesto opiniones contrarias a este esquema simplificado de ver las relaciones internacionales. Tremendismo, irracionalidad e insensatez son algunos de los calificativos utilizados por algunos opositores a esta visión guerrerista, entre ellos: James Baker y H. Kissinger. Sostienen que la administración Bush estaría actuando en el camino del unilateralismo a ultranza y en una vía cuyo destino es de dimensiones desconocidas.

Otros, en un plano más analítico y en un intento más reflexivo por comprender la naturaleza de esta posición del Gobierno de Bush y la situación interna de los Estados Unidos nos remiten a consideraciones conceptuales de carácter general e histórico.

Noam Chomsky, por ejemplo, llama a la reflexión acerca de la atención que deben prestar los ciudadanos americanos y sus corrientes de opinión en relación a lo que su Gobierno hace o deja de hacer en casa y en el mundo, a la vez de solicitar una explicación y una respuesta a las razones del porqué su nación y sus gobiernos son tan odiados en el mundo.

Aún cuando estas interrogantes de Chomsky no tienen un amplio despliegue publicitario dentro de su país, sí son elocuentes, en cuanto a que expresan un punto de vista cualitativamente distinto en la búsqueda de una explicación del papel de los Estados Unidos en el mundo, a la vez que indican un camino distinto, dice:

Si dedicamos nuestros recursos a drenar y secar las ciénagas, enfrentan-

do las raíces de la campaña de odio, no solo podemos reducir las amenazas sino vivir de acuerdo a los ideales que profesamos y que no están fuera de lo posible si decidimos abordarlos con seriedad. (*El Nacional*, 8 de septiembre de 2002).

Francis Fukuyama se adentra en el tema de la legitimidad democrática dentro de lo que denomina un «concepto más amplio de la civilización occidental», es decir, nos introduce en las diferencias que separan la visión europea de la americana en lo que respecta a la viabilidad de la «cultura occidental» en el marco de las amenazas terroristas y los focos de conflictos a afrontar en el mundo.

Al respecto indica que estas diferencias no están asociadas exclusivamente al Gobierno de Bush, sino que reflejan una concepción distinta en el tratamiento de temas de interés internacional como: Protocolo de Kioto; Pacto de Río sobre biodiversidad; retiro de USA del Tratado de Misiles Antibalísticos; oposición al Tribunal Penal Internacional, etc. Sin embargo, ha sido a partir de la definición unilateral de USA de una política antiterrorista internacional, ejemplificada en el «eje del mal», cuando la grieta entre Europa y América del Norte se ha ensanchado.

Dice, además, que USA tiene la idea según la cual la legitimidad de sus acciones y las de los organismos internacionales por ese país consensuados tienen su razón de ser en la fortaleza de su Estado-nación y sus principios democráticos como modelo. Por el contrario estima que Europa conceptúa la legitimidad democrática más como el resultado de «la voluntad de la comunidad internacional» que la de un Estado en particular. (*El Nacional*, 8 de septiembre de 2002).

Esta distinción percibida por Fukuyama es importante de valorar a los efectos de las implicaciones que tiene, no solo para Europa, sino para el resto de las regiones y de los países del mundo que, como Venezuela, están expuestas los posibles desmanes del unilateralismo estadounidense.

James Petras ofrece una versión más descarnada y directa del accionar americano en política exterior. Nos refiere este autor que hoy, más que nunca, USA emplea, además de la herramienta militar, tal como lo hizo en Afganistán y pretende hacerlo en Irak, una segunda vía o método para la construcción del imperio. Esta vía conceptuada como política-diplomática es de gran impacto en el ablandamiento y la disuasión en regiones y países, de secto-

res económicos y políticos, en cualquier parte del mundo. Está funcionando como un enorme dispositivo de inteligencia cuyo aumento masivo procura información, aliados, apoyos, inhibiciones, dependiendo del tema o asunto de interés para USA.

Conclusiones:

En esta coyuntura la política exterior de USA está marcada por el unilateralismo y el uso de la fuerza militar para adelantar su política antiterrorista. Esta orientación está enmarcada dentro de una concepción de la legitimidad democrática internacional cuya sustentación está afianzada en el poderío económico, político y militar del Estado americano. Su objetivo estratégico es la consolidación de su poder hegemónico mundial.

Como respaldo a esta concepción y a la ejecución de esta política USA también utiliza la vía diplomática, mediante un aumento masivo de operaciones de inteligencia, la creación de oficinas de transición, la disuasión y la amenaza política, con el objetivo de intervenir en los asuntos internos de países, organizaciones internacionales, empresas, Gobiernos, cuyos intereses sean distintos al Gobierno americano.

2.6 Comentarios reales

Algunas consideraciones en relación al momento político

1. Consideraciones preliminares

La confrontación política entre dos opciones de entender y pensar el país está llegando a un punto de no retorno, a una encrucijada, que obliga a pensar en los posibles desenlaces y sus consecuencias. Parecieran agotadas las vías de la conciliación y el consenso para solventar diferencias de fondo, porque, una cosa sí está clara, está en juego no un simple episodio electoral, sino la posibilidad real de conducir al país por un período de larga duración.

Del lado del Gobierno y sus aliados, al menos quienes entienden la trascendencia histórica y las posibilidades nacionales y populares del gobierno de Chávez, aún cuando no existe ni una dirección ni una visión unificada del proceso, la apuesta apunta hacia la búsqueda de una nación y una sociedad con un perfil autónomo e independiente a escala internacional y a una con-

cepción democrática de amplio contenido popular. Mientras que, del lado de las diferentes facciones del campo opositor, los grandes objetivos están asociados al neoliberalismo a ultranza, a la desnacionalización de los principales activos nacionales (PDVSA), a la liquidación de la rectoría del Estado en materia económica y social, así como, a limitar el ejercicio democrático al campo de las formalidades inocuas, e, inclusive, no es descartable un período de tutelaje militar.

2. La posición del Gobierno

Ante la insistente y contumaz iniciativa política de la oposición por precipitar la salida o caída del Gobierno del presidente Chávez, este ha dado una muy apropiada y coherente respuesta. Por un lado, se ha resaltado la línea de respeto al marco constitucional para considerar cualquier posibilidad revocar el mandato del presidente antes de la finalización de su período y, por el otro, se ha rechazado de plano la posibilidad de recurrir a un adelanto de elecciones o a otorgarle carácter vinculante a un eventual referendo consultivo que contenga una pregunta en ese sentido.

Decimos que apropiada y coherente porque, aún con las limitaciones que pueda contener la carta constitucional, en este momento y en la actual coyuntura, es la línea divisoria que separa los intereses golpistas del apoyo internacional (léase: OEA, GTI, PNDU), pero, además, porque internamente configura un instrumento político de primer orden a la hora de definir acciones de contenido democrático para enfrentar la alianza opositora.

Acciones que pueden ir desde aquellas que forman parte del ejercicio rutinario de la administración pública, pasando por las que involucren la movilización de las masas a favor o en apoyo al orden constituido, hasta otras que eventualmente conlleven al uso legítimo de la violencia por razones de Estado.

El Gobierno, con habilidad y pericia, debe manejarse muy bien en el manejo dialéctico de lo jurídico y lo político a la hora de enfrentar la ofensiva opositora. La alianza opositora busca privilegiar lo político, saltándose «a la torera» la normativa constitucional y sus lapsos, antes con un golpe de Estado y, ahora, con la política de «elecciones ya» y referendo consultivo acerca de la renuncia del presidente. Ante esto el Gobierno, sin perder para nada sus accionar político, también debe blindar su argumentación jurídico-constitucional a los efectos de desmontar el discurso opositor.

Dos cosas han sido ampliamente favorables a la posición del Gobierno: una, el respaldo internacional hasta ahora ofrecido, tanto por países contrarios al proyecto venezolano, como de organizaciones sindicales y la mediación, hasta ahora coherente con la Carta democrática, de la OEA; y otra, el respaldo institucional de la FAN a través de sus diversos componentes.

3. Argumentos en contra del referendo consultivo para la revocatoria del mandato.

3.1 Entre las argumentaciones más sólidas en esta materia está la de la ex magistrada Hildegrad Rondón de Sansó quien señaló taxativamente que la convocatoria a un referendo consultivo con el propósito de solicitar la renuncia o revocar el mandato del presidente conduce a una «desviación del procedimiento» ya que:

[...] no es suficiente que se recojan y consignen millones de firmas porque antes de convocar la consulta el Consejo Nacional Electoral debe homologar el proceso, precisamente a la luz de la Constitución y de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Sería el CNE y no el electorado el que correría el riesgo de desviación de procedimiento (*El Nacional*, 29 de octubre de 2002).

Agrega que:

El referendo consultivo no genera un efecto inmediato sobre la materia de interés general sometida a consulta popular, en la que cabría todo lo que no esté excluido por otras formas de referendos: revocatorio de mandato, aprobatorio de leyes y abrogatorio en sus diversas modalidades. Con el consultivo no obtendremos un cambio automático sino solo la expresión de la opinión mayoritaria del electorado, un desiderátum que habrá, o no, de ser tomado en cuenta por los organismos llamados a tomar decisiones.

3.2 A lo anterior se agrega la posición adoptada por el presidente del máximo organismo comicial, Roberto Ruiz, quien advirtió que, si bien atenderá la solicitud de referendo, este no se puede efectuar para consultar la revocatoria del mandato. Indicó que el Artículo 185, numeral 5, de la Ley del Sufragio establece que «[...] no podrá someterse a referendos nacionales

la revocatoria de mandatos populares, salvo lo dispuesto en otras leyes» (*Últimas Noticias*, 30 de octubre de 2002). Y añadió. «Si alguien considera que la pregunta se traduce en una pregunta revocatoria debe ir al TSJ, que es quien puede interpretarla Constitución y demandar la nulidad de la pregunta y de la solicitud».

4. Posición de la oposición

4.1 Solicitud de renuncia inmediata

Constituye la posición más recalcitrante asumida por el grupo de militares golpistas, atrincherados en la plaza Francia de Altamira y, cuyo vocero más radical ha sido el general Enrique Medina Gómez, quien, además, reiteró ante el Secretario de la OEA, Cesar Gaviria, que su posición es innegociable, es decir, continúa en un abierto desacato a la autoridad militar y al propio Gobierno nacional. Cerrado completamente a cualquier posibilidad de diálogo.

Representa la cabeza visible del más conspicuo golpismo. Sin embargo, no ha tenido la sincronía precisa, ensayaron con la marcha del 10, el paro parcial del 21 y desembocaron en un pronunciamiento militar, hasta ahora mediático, pero pronunciamiento desestabilizador al fin.

4.2 Realización de un referendo consultivo

Es la vía escogida por la mayoría de los miembros de la Coordinadora Democrática.

Sobre este punto es conveniente detenerse en lo expresado por Gerardo Blyde, quien sí está consciente de las limitaciones constitucionales en cuanto al carácter revocatorio de un referendo de este tipo, pero, plantea su viabilidad a través de la pregunta: «¿Está Ud. de acuerdo con solicitar al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que de manera voluntaria renuncie inmediatamente a su cargo?». Esta línea privilegia lo político sobre lo jurídico y busca crear el escenario propicio para ejecutar otras acciones con el fin de ocasionar la salida del presidente. Hipotéticamente, de aprobarse un referendo de esta naturaleza, se estaría otorgando al adversario una poderosa herramienta para soportar políticamente una huelga insurreccional o cualquier otro mecanismo desestabilizador.

4.3 Escenario de la Asamblea Nacional

La línea de la oposición es la de colocar el tema del adelanto de las elecciones y el referendo consultivo en la agenda del parlamento, de hecho, lo han logrado, ayer (29 de octubre de 2002), se discutía la creación de una comisión

especial, de carácter paritario para estudiar el tema. Si se tiene en cuenta que la mayoría precaria que tiene el Gobierno en la Asamblea Nacional puede perderse, si se somete a consideración de la instancia parlamentaria estaríamos en presencia de una seria derrota política. Las bancadas que podrían «brincar la talanquera» son: Podemos (Jiménez, Salas y Héctor Vargas); OFM (D. Peraza y Palacios); y NT (Ángel Vera, Charles Medina y Omar Fuenmayor). Ocho en total.

4.4 Escenario de la huelga general

Tanto el presidente de Fedecámaras como el presidente de la CTV ya han asomado la posibilidad de la huelga general indefinida. Este escenario, aunque ya ha sido evaluado, ahora tiene nuevos componentes, entre los que destacan la denominada «desobediencia militar», la solicitud con apoyo de firmas para el referendo consultivo y la frágil mayoría del Gobierno en la Asamblea Nacional. La fecha probable podría ser el próximo 4 de noviembre, e, igualmente, el 4 de diciembre.

Para una interpretación de la coyuntura política

1. Teoría política de la oposición

1.1 La teoría de la resistencia civil

Gran parte de las herramientas teóricas utilizadas por la oposición para guiar su acción están contenidas en la denominada teoría de la resistencia civil. La cual es definida como:

[...] un método de lucha colectiva basada en la idea básica de que los gobiernos dependen en último término de la colaboración, o por lo menos de la obediencia de la mayoría de la población, y de la lealtad de los militares, la policía y de los servicios de seguridad civil.

Agrega esta concepción que esta teoría funciona «a base de movilizar a la población civil para que retire ese consenso, de procurar socavar las fuentes de poder del oponente, y de hacerse con el apoyo de terceras partes». Sin embargo, a pesar de declararse un método abiertamente civil y pacifista, no descarta conjugarse con algunos tipos de acción violenta, incluso de carácter militar, como hemos visto en el caso particular de Venezuela. (Ver: *Resistencia civil*, Michael Randle).

1.2 La Coordinadora Democrática

Lo anterior es lo que explica la denominación Coordinadora Democrática, pues es, no solo una fachada de los golpistas, sino su instancia organizativa colectiva. Si se observan los principales actores de esta organización, sean individualidades, partidos u ONG, vemos cómo se articula alrededor de una máscara civilista para responder en el fondo a un plan desestabilizador cuyo norte es el derrocamiento del Gobierno. Para ello se ha recurrido hasta intentar conciliar el argumento contenido en el Art. 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con una supuesta «desobediencia legítima» de los militares de Altamira. Lo que sí parece claro es que no estamos en presencia de un golpe militar clásico, una 101 asonada, un *putch* cualquiera, sino ante una acción colectiva como la descrita anteriormente, la cual cuida mucho la forma en la búsqueda de legitimidad internacional, así como el apoyo externo. Por eso, el comunicado de la «Coordinadora Democrática» del 18 de noviembre de 2002 es cauteloso en cuanto a aceptar el tutelaje militar en la convocatoria a paro hecho ese día por el Gral. Medina Gómez.

1.3 La teoría de «la escopeta de un solo tiro»

De igual manera, lo anterior explica la cautela de algunos de los ideólogos de la «Coordinadora» cuando indican que el paro, como arma final para derrocar al Gobierno, no puede lanzarse a menos que se tenga absoluta seguridad de su éxito, pues, como lo dice Ramón Guillermo Avelado este es como una escopeta de un solo tiro, es decir, si se falla se pierde todo. Esta hipótesis, claro está, en el caso de que el objetivo del paro sea efectivamente derrocar al Gobierno mediante esta acción.

2. Dos tendencias opositoras ante el paro

De manera gruesa pueden distinguirse dos tendencias de la oposición a la hora de plantear el paro convocado para el 2 de diciembre de 2002:

2.1. Existe una tendencia, claramente diferenciada de una acción golpista desesperada, la cual plantea abiertamente la posibilidad de negociar el diferimiento del paro a cambio de la convocatoria al referendo consultivo o, en su lugar, a la presentación de una oferta electoral de parte del Gobierno, distinta a la del referendo revocatorio. En la primera opción se cuentan, entre otros: Manuel Cova (CTV), Leopoldo López (PJ), Ramón Guillermo Avelado (COPEI), Américo Martín (Asamblea de Ciudadanos), y Leopoldo Puchi del MAS. En la segunda, Timoteo Zambrano.

2.2 La otra tendencia, de carácter mucho más radical, plantea una confrontación abierta y llama a un paro indefinido con el propósito de derrocar al Gobierno inmediatamente con constantes llamamientos a la intervención de las FAN. Entre quienes asumen tal posición se encuentran: Carlos Ortega, Carlos Fernández, Antonio Ledezma, Andrés Velásquez, Rafael Marín, Peña Esclusa, Bandera Roja, y los militares disidentes, quienes adhieren esta posición, incluso ya convocaron un fallido paro el 18 de noviembre de 2002.

3. Los dos escenarios del paro

El paro convocado para el próximo lunes 2 de diciembre tiene entre sus propósitos deliberados, además de provocar una eventual salida del presidente Chávez, el de colocar en el escenario de la OEA el conflicto político venezolano. Se puede decir que en cualesquiera de los escenarios este es el centro de los objetivos opositores, sin embargo, también hay que incluir entre sus objetivos el de ejercer presión política para la realización del referendo consultivo y, de igual forma, afianzar posiciones en la mesa de diálogo.

3.1 Escenario *light*:

Sería un paro similar al del 21 octubre, sin acciones de violencia, actos de sabotaje o escalada terrorista y, por supuesto, sin pronunciamiento militar. Este escenario podría producirse si el CNE convoca al referendo consultivo en el curso de esta semana y le da fuerza a la corriente «negociadora» de los convocantes.

3.2 Escenario de *lockout strike* o huelga patronal a rajatabla combinada con pronunciamiento militar y otros actos de violencia.

Sería un paro o, mejor dicho, una abierta acción insurreccional, similar a la del 11 Abril, con correcciones en su metodología. Para su éxito sería indispensable el paro de PDVSA y una acción militar de proporciones decisivas, lo cual no parece factible.

Nota: En ambos casos es preciso evaluar los tiempos. La corriente negociadora con un cálculo político del tiempo medio apuesta a la convocatoria del referendo esta semana, argumento para diferir el paro, y aguardar hasta los resultados del mismo para utilizarlo como arma en una convocatoria a huelga general el próximo año. Por el contrario, el tiempo corto es patrimonio de quienes apuestan a la salida inmediata del presidente Chávez mediante la aventura golpista.

4. La correlación de fuerzas

Un examen de la fuerza relativa de los actores en conflicto y su posicionamiento actual en el marco del conflicto de intereses planteado conduce a concluir en la existencia de una apreciable ventaja de los factores ligados al proceso de cambios liderados por el presidente Chávez.

4.1. Gobierno Relaciones internacionales

En el marco de las relaciones internacionales, en particular en el escenario de la OEA, la representación diplomática venezolana se ha movido muy bien. De acuerdo al informe presentado por el embajador Jorge Valero las resoluciones de ese organismo hasta ahora han sido referidas a la facilitación del diálogo y de salidas en el marco de la Constitución y la presencia de Gaviria obedece a una invitación hecha por el Gobierno venezolano. Igual papel cumplen el Centro Carter y el PNUD. Aún cuando estas gestiones se han hecho en el marco de la Carta Democrática hasta ahora no han rebasado el límite de la facilitación, lo cual, le otorga al Gobierno un cierto blindaje diplomático a la hora de cualquier maniobra en su contra.

Sin embargo, es menester mantener el cuidado celoso de la norma constitucional en cualquier medida que haya de tomarse para el manejo de la coyuntura política.

De otra parte, los triunfos políticos de Lula y Gutiérrez en Brasil y Ecuador le otorgan también al Gobierno venezolano un respiro en cuanto a la posibilidad de coincidencias y eventuales alianzas frente a cualquier intento de agresión externa.

Fortaleza militar:

La apreciación que se tiene en relación al respaldo de la institución armada a la institucionalidad es de una valoración altamente favorable. La «limpieza» dentro de las FAN luego del golpe de Estado y la depuración de sus cuadros de mando operan como una fortaleza del Gobierno.

Trabajadores:

La relación establecida por el presidente con los trabajadores ha dado sus frutos. Hoy puede decirse, aún sin haber resuelto completamente su cohesión política y organizativa, que la fuerza de los trabajadores, tanto las fuerzas propias como la de los principales aliados, son componente esencial del proyecto y muro de contención importante ante cualquier arremetida golpista,

como la planteada por la oposición. La consigna de los trabajadores debe ser: «Derrotemos la huelga golpista y patronal», especialmente en PDVSA.

Organizaciones populares:

De igual manera, la presencia activa de organizaciones populares de diverso signo y grado de autonomía con respecto a la dirigencia «formal» del proceso son un indicador del grado de inserción y de piso social que ha logrado implantarse en las diferentes capas de la población. Un ejemplo, la diversidad de organizaciones participando en las comisiones de diálogo comunitario. Esto por supuesto es altamente positivo no solo para el Gobierno sino para el optimismo colectivo del proceso.

Unidad política patriótica:

El reestablecimiento de un equipo político de dirección colectiva, a la vez que indispensable, es un salto cualitativo en cuanto a la dispersión e incoherencia que han caracterizado fases anteriores del proceso. La existencia de un «comando de crisis» para el seguimiento y decisiones de «alto nivel» son un reconocimiento a la necesidad de centralizar y evaluar el rumbo del proceso, sobre todo en un período de confrontación y posible desenlace.

4.2. Oposición

Relaciones internacionales:

La oposición, como ya se expuso arriba, apuesta a colocar el conflicto venezolano en manos de «terceros», en particular la OEA, donde USA ejerce una gran influencia política y puede maniobrar para convalidar cualquier modalidad de intervención extranjera. Las declaraciones recientes del embajador Shapiro han sido elocuentes en ese sentido, ya se pronunció públicamente a favor de una enmienda constitucional, y, en el mismo sentido, los pronunciamientos de los Gobiernos de México, Perú, Panamá, Chile, entre otros, son indicadores del «Plan Gaviria» para convertirse en mediador o en elevar a la consideración de la Asamblea General o del Consejo Permanente de la OEA el conflicto venezolano. Hacia allá apuntan las baterías opositoras.

Debilidad militar:

A diferencia del Gobierno la oposición ve disminuida su capacidad de convocatoria militar. Por un lado por la ya referida «limpieza» oficial y, por

otro, porque la acción de Altamira ha facilitado más aún la identificación de los nexos opositores en ese sector.

Trabajadores:

La CTV ha perdido la poca capacidad de lucha que pudo haber tenido por las reivindicaciones de los trabajadores. En épocas anteriores se acostumbró al negociado y al acuerdo cupular tripartito, despojándose del entrenamiento adecuado para la confrontación y el conflicto. Hoy desliza las fuerzas que pueda tener exclusivamente hacia la agenda política, en alianza con sus adversarios históricos (Fedecámaras), pero, más como un acto de desesperación que como una política coherente. Con influencia en la Nómina Mayor de PDVSA, en algunos sindicatos de Fedepetrol. Los liderazgos de Ortega y Cova lucen muy desgastados ante los trabajadores.

Organizaciones populares:

La multiplicidad de ONG que se han agrupado alrededor de la «Coordinadora Democrática» es expresión social de variados sectores medios de la población, sin la tradición y el esfuerzo que suponen instancias de organización popular de mayor arraigo y piso social real. Parecen construidas para la ocasión, aún sin desmerecer su papel opositor, a la hora de una evaluación de su peso político real lucen como de poca monta. Se puede decir, además, que se han constituido como instrumentos de los partidos y principales actores políticos de la Coordinadora.

Si bien es cierto que puede afirmarse que la «polarización» tiene claro contenido social, también lo es el que estas ONG, en su mayoría, son simples fachadas de otros intereses.

«Coordinadora Democrática»:

No tiene un liderazgo aglutinador, puede decirse que es acéntrico, con varias vocerías que reflejan propósitos y métodos diversos. El elemento aglutinador es la consigna por la salida de Chávez, sin embargo, también en eso difieren en sus discursos. La lucha por la hegemonía en la dirección de la organización se refleja en esa dispersión.

Puede decirse, en términos generales, que la lucha política por la hegemonía se escinde en dos grandes bloques; el restaurador, representado por las viejas franquicias del liderazgo político venezolano y, el neoliberal a ultranza,

que en forma multifacética encarna esta concepción de la organización social de la cultura occidental.

Cobra especial interés destacar que uno de los factores de mayor relevancia en la fuerza de la oposición radica en el alineamiento de los medios de comunicación privados al servicio de sus intereses políticos. Esa afirmación de Ramonet, según la cual, este es el segundo poder luego de las transnacionales tiene una manifestación concreta en la contienda política venezolana. Su uso abusivo e indiscriminado contra el Gobierno es realmente «una cadena».

5. Vías de ataque de la oposición

Son varios los escenarios a través de los cuales la oposición puede canalizar sus objetivos políticos. Por las características que ha asumido el proceso político venezolano este ha posibilitado la existencia de una contradicción entre el Gobierno y otras instituciones del Estado, las cuales aún son remanentes o bastiones de la anterior república. Ellas son: el CNE, el TSJ, la Fiscalía General de la República y la Asamblea Nacional. El hecho de que en algunos casos, como es el de la Asamblea Nacional, la representación oficial tenga una mayoría precaria, no la excluye de esta categorización. Podemos tomar este último escenario como ejemplo: las coincidencias de Rafael S. Jiménez con el embajador americano, Shapiro, en torno a la necesidad de una enmienda para recortar el mandato presidencial y así adelantar las elecciones son una elocuente muestra de las bondades de este escenario y de algunos de sus actores para incidir en el curso de los acontecimientos. Y en otros escenarios igual.

Es el caso del TSJ, donde se ventilan casos diversos contra el presidente, en cualquier momento puede ocurrir un zarpazo constitucional. Lo del CNE no necesitamos describirlo, sin embargo, en cada uno de estos planos hay que librar la batalla que corresponda, sea en el plano jurídico, político o del organismo electoral.

6. Acciones del Gobierno

Son variadas las acciones que el Gobierno debe emprender o continuar.

6.1. Mantener la coherencia entre su actuación y el discurso democrático-constitucional. La Constitución es el marco donde se debe actuar. Puede decirse que este proyecto está vivo por nacer y desarrollarse al amparo de este instrumento, de no ser así ya estuviésemos intervenidos.

6.2. Afincarse en el apoyo popular, especialmente en los trabajadores y

los sectores militares consecuentes con el apego a la defensa del interés nacional.

6.3. Ampliar la ofensiva diplomática a los efectos de ampliar la información acerca de lo que ocurre en Venezuela, buscar aliados y contrarrestar la ofensiva opositora.

6.4. Internamente desarrollar una ofensiva jurídica de denuncias de diversa índole contra opositores golpistas quienes en algunos casos de manera flagrante incumplen la ley y la propia Constitución. Ejemplo: calificaciones de la huelga por el Mintra.

6.5. Plantearse una política de contención de la campaña mediática.

6.6. Fortalecer acción de Gobierno y publicitarla.

6.7. Afinar la dirección política del proceso.

7. En torno a la «Mesa de Diálogo»

7.1. Se debe continuar la denuncia acerca del persistente doble discurso opositor.

7.2. Aún cuando la agenda inicial limita los temas es factible por otras vías abrir la negociación hacia otras áreas de interés. Fuera de la Mesa, por ejemplo, es factible entenderse con algún factor opositor para la integración de la nueva directiva del CNE. Continuar lanzando puentes a sectores económicos para planes de reactivación. A fin de cuentas la polarización no es extraña a un proceso de cambios y las turbulencias y conflictos son consustanciales a las resistencias que genera.

7.3. No es conveniente en este momento, antes de la huelga, que el Gobierno haga alguna oferta, eso sería una señal de debilidad. Ninguna, así la haga luego.

7.4. Muy buena la iniciativa de colocar el diálogo en la calle. Hasta ahora en la historia de Venezuela, desde el Tratado de Coche, pasando por Punto Fijo, hasta el Pacto de Altamira, han sido acciones y actos de las elites.

«Comentarios reales»

Acerca de la coyuntura política venezolana

Tomamos prestado el título de la obra del Inca Garcilaso para acercarnos a la comprensión del momento político en varias de sus expresiones concretas.

La dimensión del conflicto político actual hace cada vez más visibles los rostros de los actores y sus propósitos en esta contienda de definiciones de alcance histórico para la patria venezolana. Veamos algunos aspectos que puedan ilustrar dicha confrontación:

1. Se agudiza la lucha de clases

Nunca como hoy en Venezuela habíamos conocido un escenario político y social donde la lucha de clases alcance un grado de desarrollo y profundidad como el actual. Hablamos de lucha de clases en términos clásicos, con toda la carga de confrontación y conflictividad entre los actores en pugna, cuando está en juego el ejercicio real del poder, la lucha por la hegemonía y la supremacía de un proyecto determinado sobre otro. Simplificando puede decirse que estamos ante la puja histórica por implantar un modelo de nación de larga permanencia en el país. Uno puede ser rápidamente visualizado en la política de «El Gran Viraje», esbozado por el ex presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo período de gobierno, y contiene los lineamientos del libre mercado y la internacionalización petrolera, el cual, tiene continuidad y trascendencia en las diferentes proposiciones de los componentes de la autodenominada Coordinadora Democrática.

El otro, lo encarna la propuesta del actual presidente de la República, Hugo Chávez, y sus diversos aliados, quienes patrocinan un modelo de corte nacionalista, democrático, humanista y popular. Cuando se habla de «polarización» lo que subyace en el fondo es realmente el carácter absolutamente irreconciliable de ambas visiones y propuestas de país y la manera como se expresa esa contradicción en la lucha política concreta.

Del lado del plan neoliberal se han alineado por igual: la «meritocracia petrolera» que responde al esquema de la liberalización de la industria y su privatización en determinadas áreas; la burguesía importadora, alineada con la promoción de un mercado abierto que le permita ampliar sus negocios, sin atender a interés nacional alguno; sectores de la burguesía industrial, conectadas al capital trasnacional; capas medias de la población (pequeña burguesía), viudas del rentismo petrolero, fácilmente permeables al discurso de la «resistencia civil» y del anticomunismo recalcitrante; los partidos políticos tradicionales y otros de nuevo cuño para quienes, sin importar el rumbo histórico de la nación, anteponen sus ambiciones inmediatas de poder, renunciando incluso a sus programas específicos; por supuesto, la embajada de USA

y todas sus conexiones con los capitales trasnacionales con apetencias por el negocio petrolero venezolano; los grandes empresarios de los medios de comunicación, con la asesoría de la CIA en el diseño de la campaña mediática contra el Gobierno; estos, entre otros son los sectores e intereses asociados a dicho plan antinacional.

Del lado de la propuesta nacional y democrática participativa aparecen claramente dibujados los siguiente actores: el presidente Chávez principal liderazgo del proceso, artífice de la unificación de las fuerzas del cambio político; los trabajadores, destacando entre ellos los petroleros quienes han sido capaces de interpretar su papel y protagonismo político en la actual coyuntura, pero, además, los siderúrgicos, transporte, electricidad, servicios públicos en general, y los trabajadores de diversa índole que identifican con claridad quiénes son sus verdaderos adversarios de clase; los partidos políticos del Bloque del Cambio, de diverso origen y orientación pero acoplados en la dirección general del proceso; múltiples asociaciones, redes y círculos populares que en forma autónoma han multiplicado la presencia del poder popular en distintos escenarios de la lucha social; aliados internacionales que han facilitado ayuda técnica y de suministro de combustible, a la par que solidaridad política; empresarios de nuevo tipo que entienden el modelo de país en construcción; en fin actores diversos y distintos confluyendo en la perspectiva de una Venezuela democrática e independiente.

Discrepamos de la apreciación de Ramón Guillermo Avelado, reconocido dirigente opositor, quien afirma que no se vislumbra en el mediano plazo que una corriente derrote a la otra de una manera definitiva. Por el contrario, somos de la tesis según la cual el Gobierno y las fuerzas del cambio están en una posición favorable para resolver positivamente la crisis política actual. Derrotada la oposición en el ámbito militar, desplazada y derrotada del petrolero y con serias dificultades para mantener el «paro», ante la creciente incorporación al trabajo, esta puede terminar diluida en marchas y movilizaciones que le desgasten progresivamente. Ello no descarta que se puedan jugar la carta de la desesperación y recurran a una arremetida violenta, copiando el formato de abril.

Como observamos, vivimos un momento estelar en la historia política de Venezuela, puede decirse, como lo afirmó el canciller Chaderton que estamos en una etapa de «redefiniciones». En un período de gran tensión, propio de

los cambios históricos de envergadura. Venezuela, al igual que en los tiempos de la gesta independentista, se ha colocado nuevamente a la vanguardia de la lucha popular en América Latina. Oportunidades y posibilidades como la actual no se presentan todos los días, por eso, la comprensión del momento, la responsabilidad y la disposición a la victoria tienen que ir aparejadas en esta etapa de nuestra historia.

2. Así, así; así es como se gobierna

Esta consigna popular, coreada en algunos de los últimos programas presidenciales, recoge el sentimiento popular en cuanto a la acción de gobierno se refiere. El Gobierno, en razón de las circunstancias y obligado por la presión política, ha comenzado a dar muestras de su capacidad para enfrentar situaciones que embargan cierta dificultad. Ante una manera inédita de orquestar un golpe de Estado por parte de la oposición, este ha sabido actuar con energía, pero con aplomo y serenidad. Sin recurrir a las medidas excepcionales ha enfrentado por igual el desabastecimiento de combustible y gas, así como los brotes de desabastecimiento de alimentos. De igual manera se ha mantenido el funcionamiento de los servicios públicos esenciales: transporte, agua, electricidad y salud. El caso de la educación es muy particular pues el gremio docente ha estado tradicionalmente contaminado por la cultura ADECA del facilismo y la ausencia de principios que como ductores sociales deben tener. Sin embargo, la política de convocar a las comunidades y a los educadores conscientes de su responsabilidad es correcta, por esa vía tarde o temprano se quebrará el paro docente.

De otra parte, hay que decir que progresivamente se ha implantado el principio de autoridad. Esto se ha logrado con un uso limitado de la fuerza pública del Estado y con un apropiado manejo del control de las manifestaciones callejeras de la oposición, las cuales buscan socavar la legitimidad democrática del Gobierno al incitar al caos y la violencia. Mención especial merece la manera como se ha abordado la campaña mediática opositora, la cual, no solo incita abiertamente a la violencia, sino que se ha colocado abiertamente a favor del golpismo. Por un lado se ha evadido una confrontación abierta, pero por el otro, se ha dejado por sentado que las concesiones pueden ser suspendidas o sencillamente eliminadas. Tarde o temprano habrá que tomar medidas definitivas porque la inclemente e incesante difusión de mensajes sesgados, interesados y parcializados atentan no solo contra el Gobierno sino

contra el ejercicio democrático. Hay que preparar el terreno porque detrás de la campaña mediática está la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con asesoría de la CIA, ducha en generar campañas desestabilizadoras.

3. La institucionalidad y la Fuerza Armada Nacional

En los hechos y con inusual facilidad se ha venido concretando la tan esquivada unidad cívico-militar. No sin contradicciones, por supuesto, sobre todo por los privilegios que genera el convertirse en agente de control de la distribución de gasolina, pero, con una clara definición en cuanto a la articulación de intereses para defender la institucionalidad democrática y la viabilidad del proyecto. El cuidado de la forma democrática por parte del Gobierno y su paciente labor dentro de las filas castrenses luego del fallido golpe de Abril han dado sus frutos en un creciente respaldo institucional de las FAN. Además, es preciso tomar en cuenta el origen social y la composición de clase de la Fuerza Armada, de mucho arraigo en las clases medias y populares y de poca vinculación con los estratos de la «oligarquía» tradicional. El pueblo llano y los trabajadores también han comprendido el sentido y el carácter estratégico de esta alianza. Lo de abril fue emblemático, pero ahora ante la necesidad de resolver problemas en comunidad la simbiosis ha operado en los hechos.

4. Carácter petrolero del golpe de hoy

Si alguna cosa ha revelado el actual desafío opositor es el carácter petrolero del golpe, su clara vinculación con intereses nacionales y extranacionales cuyo propósito definido es el de hacerse definitivamente con el control estratégico de la industria más importante del país. De hecho, luego de la nacionalización de la industria en 1976 quedó enquistada en su seno una gerencia entrenada para funcionar con los criterios políticos y técnicos propios de las empresas privadas transnacionales. Y así lo hicieron, se constituyeron en una suerte de «Estado dentro del Estado», con un criterio de autonomía e independencia en su accionar que pronto terminó de ensamblar un plan para minimizar los controles del Estado, en particular del Ministerio de Energía y Minas.

Comienza así el diseño de una estrategia para desarrollar la política de la «internacionalización» cuyo objetivo directo y manifiesto ha sido allanar el camino para reprivatizar por diversas vías a PDVSA. De hecho, fue precisamente

bajo el ala de la política del «Gran Viraje» de Carlos Andrés Pérez cuando se institucionalizó la denominada «apertura petrolera» y se constituyó una alianza entre esta gerencia petrolera, los capitales trasnacionales y los países consumidores, agrupados alrededor de la Agencia Internacional de Energía.

El objetivo de allí en adelante fue el de dismantelar el piso legal y constitucional de la nacionalización y el de reducir los controles del Estado venezolano sobre su renta petrolera. Ello es lo que explica la profusa transferencia de ganancias y beneficios, bajo la modalidad de lo que Mommer denomina «precios de transferencia», a las empresas venezolanas situada en el exterior, fuera del país, como Citgo, VEBA-OIL, etc. De igual forma, se impulsó una política desde hace algunos años: maximizar la producción y disminuir el aporte al fisco venezolano, como en efecto ha venido ocurriendo, línea de conducta persistente. Y en la misma tónica se planteó desarticular a la OPEP y su política de control de volúmenes de producción y de precios.

Por lo anterior no es casual que entre los principales cabecillas de los dos intentos de golpe, tanto el de Abril como el de ahora, sean gente vinculada al negocio petrolero: Luis Guisti, Juan Fernández (Intesa), Carlos Ortega, anterior directivo de Fedepetrol, Quiroz Corradi, Gustavo Cisneros, con apertencias en el control de la Citgo, así como los capitales españoles vinculados a la electricidad y al gas.

Tampoco es casual la ingerencia de la embajada de USA y sus agentes muy vinculados al presidente Bush, reconocido inversionista privado del área petrolera.

La llegada de Chávez al poder comienza a trastocar este esquema. Se comienza con una política de recuperación de la OPEP, de los precios, la racionalización de los volúmenes de producción y una recuperación de la instancia rectora del Estado en la política petrolera, materializada en la *Ley de Hidrocarburos* promulgada en el paquete habilitante. Esta es la razón de los intentos golpistas. Su total enfrentamiento a una redefinición tanto de la estructura interna de PDVSA como a su papel en el escenario del desarrollo nacional.

5. Industria petrolera: situación actual

Podemos distinguir varios tipos de problemas a resolver en la industria petrolera nacional, algunos de ellos de distinta naturaleza, pero en el fondo, ligados a la tarea de enfrentar el sabotaje golpista y terrorista contra la empre-

sa. De igual forma, algunos a resolver en el corto plazo de manera perentoria y otros en un tiempo mayor.

Urgente resulta resolver lo del suministro de combustible, gasolina, gasoil y gas doméstico e industrial. Más que urgente deberíamos decir perentorio pues el funcionamiento de la economía y de la sociedad venezolana están montados sobre un diseño energético dependiente en alto grado de estas fuentes de la energía. Se sabe de la dedicación y del arduo trabajo desempeñado por los funcionarios a quienes corresponde tal tarea, sin embargo, es preciso redoblar esfuerzos, buscar ayuda internacional seleccionada, estimular a los trabajadores de la empresa, continuar con la política de despidos mediante los procedimientos más expeditos y abrir los juicios contra quienes hayan incurrido en delitos de sabotaje y daños al patrimonio nacional. Si es preciso importar nuevamente gasolina no se puede vacilar, sea al costo que sea.

De la misma manera, es preciso restablecer las líneas de producción, no solo para cumplir con los compromisos con la clientela venezolana y el propio mercado interno, sino porque, además, esta es la base del financiamiento del tesoro nacional. Justamente el plan opositor anda en la idea de desbancar al Estado y por esa vía deteriorar la base de sustentación del Gobierno. Se sabe, además, que los daños causados como consecuencia del sabotaje físico e informático son de marca mayor, pero esta es una prioridad en la cual debemos incorporar al personal de la empresa sus trabajadores y a la comunidad asociada al interés de recuperar la industria.

El plan de reestructuración de la empresa no puede quedarse en la elaboración de un nuevo organigrama de la estructura formal de la empresa. Si los trabajadores de la nómina contractual en su mayoría asumieron la responsabilidad de evitar el desplome de la industria y, además, le otorgan un contenido de clase muy definido al conflicto, no debe haber duda alguna en cuanto a los alcances políticos de un debate que les involucre de manera efectiva en el control de la industria. Conceptos como: cogestión, cogobierno, control de los trabajadores, etc., no pueden ser excluidos de la agenda de la reestructuración. Quizás aún sea un proceso germinal, desigual, focalizado en algunos sitios, pero no debe desaprovecharse esta experiencia inédita en la historia de Venezuela, pues ha habido un «sacudón» en la estructura productiva de PDVSA. Habría que evaluar políticamente el comportamiento del resto de los trabajadores de las áreas estratégicas de la nación que, bien como militantes del proceso o como aliados del mismo, han asumido un papel similar y no solo no

se han parado sino que han sido muro de contención contra el golpismo. Se impone con urgencia la constitución de una nueva central de los trabajadores que sintetice esta experiencia y le dé cuerpo organizativo y programático.

6. En torno al *lockout*

El denominado «paro cívico» que en realidad hasta ahora ha sido predominantemente un *lockout* patronal cada día se muestra más debilitado y con muestras evidentes de agotamiento en sus apoyos y bases de sustentación. El hecho de que el Estado venezolano tenga el control de buena parte de las empresas estratégicas, aunado a que los trabajadores desoyeron en forma determinante el llamado a la huelga, han sido factores importantes a la hora de evaluar el impacto real del paro, pero, además, el escaso poder de convocatoria real de la *crv* y su principal liderazgo, Carlos Ortega, no hacen sino evidenciar que el gran problema de la oposición ahora será cómo recogerlo, cómo recoger las velas con una derrota política a cuestas. No quiere decir con ello que la oposición esté aplastada y completamente debilitada, sino que en lo inmediato debe haber concluido que la salida de Chávez no es cuestión de días o de horas. Sobre todo Carlos Fernández debe asumir ante sus representados el costo del paro, la repercusión que ha tenido y tendrá sobre los sectores empresariales y sobre la propia economía nacional. Sobre este punto el Gobierno debe insistir y construir el discurso de la necesidad de un nuevo liderazgo empresarial, muy ligado al «nuevo empresario», a aquel empresario que sea capaz de entender que por encima de sus particulares intereses están los de la nación y que frente al ALCA y a los nuevos retos continentales debe existir un proyecto de nación «aguas abajo», que mire hacia el fortalecimiento del mercado interno y hacia la integración subregional. Es decir, de un nuevo modelo económico que dé cuenta de la integración de todos los factores productivos con sentido de proyecto estratégico.

7. Opciones opositoras

Parece un camino trillado, sin embargo cada vez que se vuelve sobre el mismo tema aparecen nuevas cosas a considerar. Últimamente la oposición ha concentrado sus esfuerzos en el «referendo consultivo», pareciera, que, contra viento y marea, se va a jugar esta carta combinada con una gran movilización que solicite la renuncia del presidente. Se sabe cuál será el resultado y cuáles los abusos mediáticos para apoyar tales propósitos, pero además, se sabe

que detrás de esta maniobra, del híbrido consultivo-revocatorio, se esconde la agenda de la insurrección, la movilización hasta Miraflores repitiendo el esquema de Abril. Si la oposición insiste en este esquema no le queda otro recurso al Gobierno que prepararse para enfrentar una acción de esa magnitud. Estamos en presencia de lo que Armando Durán denominó recientemente como «jugarse la última carta», es decir, echar el resto. Esta fórmula, con visos de desesperación e incertidumbre ante la posibilidad de un fallo del tsj que anule o retrase la realización del referendo, es la que predomina actualmente en el seno de la oposición, sin embargo, no descartan otras.

Entre ellas la enmienda constitucional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En cuanto a la primera, la intención sería recortar el mandato y convocar a elecciones con doble vuelta electoral y, de paso, considerar la posibilidad del referendo revocatorio el cual se acercaría en el tiempo. La segunda, de mayor dificultad, busca una forma expedita para sacar del juego al presidente Chávez. Ambas tienen el inconveniente para el movimiento opositor el que se alargan en el tiempo y no son una vía inmediata ni segura para sus aspiraciones de poder ni para detener el avance del proceso. Por esas razones es absolutamente factible concluir que para el 2 de febrero tendremos un escenario que puede ser definitivo en este largo conflicto.

8. Grupo de Amigos de Venezuela

Esta iniciativa que nace de la visita del presidente Chávez a la toma de posesión del presidente «Lula» merece algunas consideraciones:

- La creación de esta figura diplomática no es nueva en el marco de las gestiones de la OEA. Recordemos el caso de Haití luego del derrocamiento de Aristide en 1990. Nace para apoyar las gestiones del secretario general de la ONU. Luego del retorno de este a la presidencia este grupo adoptó la agenda política de ese país. Luego, mediante la Resolución 1831 en el 2001 la OEA invita al Secretario a constituir el Grupo de Amigos de Haití. Como en efecto se creó. La actuación de este organismo ha sido la de apuntalar la gestión del secretario general de la OEA. No para facilitar las actividades institucionales del Gobierno haitiano.

- Este grupo ha facilitado la aplicación de la política de USA referente a que la diplomacia haitiana con la comunidad internacional esté supeditada a las negociaciones con la oposición.

- Invariablemente solicitan la aplicación de la Carta Democrática.
- El embajador de Brasil ha dicho que es una iniciativa sin perjuicio para el secretario general de la OEA.
- Estimación preliminar: se intenta reproducir el esquema de Haití. Cabe preguntarse: ¿Venezuela necesita el Grupo de Amigos? ¿Quién escoge los amigos de Venezuela? ¿Qué tareas cumpliría? Recordemos: cuando se planteó esta iniciativa para Colombia sus autoridades declararon que ese país decidiría qué países formarían parte del grupo.

(30 de diciembre de 2002).

Acerca de la estrategia mediática contra el proceso

1. El poder político de los medios

En el mundo globalizado de hoy para nadie es un secreto que los medios de comunicación constituyen, luego del poder económico y financiero, el más fuerte y agresivo factor de poder del mundo. Como lo dice Ignacio Ramonet: «Los medios hoy hacen un abuso de la libertad de expresión en la medida en que pueden poner toda su fuerza ideológica y mediática al servicio de unos objetivos que son puramente políticos».

Agrega el mismo autor que actualmente el primer poder es el económico y financiero y el segundo poder es el poder mediático. El poder político viene después. «Y además el poder mediático es también poder económico. Porque el poder mediático, hoy, es el poder de grupos industriales mediáticos, que son actores centrales de la vida económica internacional».

Agregamos nosotros que esta simbiosis del poder económico con el ideológico es consustancial a la etapa actual de desarrollo del capitalismo, con predominancia del capital financiero especulativo. También, se puede decir que es un corolario de la imposición de la unipolaridad y la hegemonía norteamericana estadounidense en el planeta cuando, luego de la caída del muro de Berlín, del derrumbe de la URSS, de la Guerra del Golfo y de las acciones terroristas del 11 de Septiembre de 2001, se precipitó la conversión de la potencia americana como una suerte de policía del mundo.

Se impone, ante esta ineludible realidad, la imperativa política de convencer a cada ciudadano del mundo acerca de las bondades de la globalización tutelada por las transnacionales y la implantación de la concepción totalitaria

del mercado, del neoliberalismo a ultranza. Y quien asume el papel rector de esta política, tanto por razones propiamente ideológicas como tecnológicas, son los medios de comunicación. Entendiendo por ello no solo la prensa, la radio y la televisión, sino todos aquellos medios y dispositivos que tengan que ver con la difusión de ideas y mensajes: satélites, internet, telefonía, etc.

Un caso específico, con el cual se puede ilustrar toda la fuerza política de los medios cuando obedecen a un plan y tienen detrás unos determinados intereses, es el de Venezuela. Un Gobierno legal y legítimamente democrático, que ha respetado hasta el extremo la libertad de expresión, ha sido vapuleado por una acción mediática despiadada que ha coadyuvado dos intentos de golpe de Estado, uno en Abril del 2002 y otro, en curso desde el 2 de diciembre de 2002 hasta hoy.

2. Cómo opera la CIA

Son varias las acciones que emprende la CIA, utilizando los medios de comunicación como instrumentos, para desestabilizar gobiernos seleccionados como objetivos políticos. Se utiliza la SIP como mampara y a partir de allí se imparten los lineamientos políticos tanto de opinión pública como encubiertos. Se puede decir que existe una «cartilla» que siguen como un modelo los dueños de los medios que siguen estas políticas desestabilizadoras.

En primer lugar, otorgan prioridad al tema económico. La línea editorial de los canales televisivos, radioemisoras y prensa escrita se concentra en propagar el caos económico. En nuestro país, altamente dependiente del mercado americano, una campaña en ese sentido acentúa las condiciones de vulnerabilidad de la economía y del sistema financiero. Se recurre a una campaña informativa, de opinión y subliminal que privilegie mensajes acerca de la parálisis del sistema financiero, la desbandada de los capitales, la suspensión del comercio internacional, interrupción de la inversión privada, suspensión de los créditos, etc. Aquí, la campaña mediática se ha centrado en atacar a PDVSA, principal fuente de recursos financieros de la nación. Se intenta responsabilizar al Gobierno por la crisis y por la situación de desabastecimiento de gasolina, gas doméstico y otros derivados del petróleo. En forma sistemática los principales medios se han alineado en una brutal campaña para fomentar la incertidumbre y la desazón de la ciudadanía.

Luego, la campaña mediática se centra en los planos político y social. En el plano político se responsabiliza al Gobierno de la situación de caos social.

Se le atribuye la paternidad de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad, de la violencia y de la represión. Con un plan muy bien calculado se pasa de magnificar hechos, aparentemente intrascendentes, hasta concentrarse en determinados episodios que puedan simbolizar la responsabilidad oficial: ejemplo, la «masacre» de Altamira. Se busca con esto suscitar asociaciones con situaciones de muerte y violencia, el liderazgo del presidente Chávez es asociado a la anarquía, a la dictadura y al uso de la violencia indiscriminada. Últimamente, se ha concentrado tal política en las acciones del general Acosta Carles, se busca asimilar su actuación a la del terror, los abusos y la fuerza bruta... En cualquier caso el objetivo es deslegitimar la acción de Gobierno y disminuir progresivamente el apoyo popular a sus acciones.

La desinformación, la información sesgada y la contrainformación son igualmente instrumentos desestabilizadores. Se oculta información, ejemplo: lo del 12 de Abril pasado. Se utilizan documentos falsos y programas de opinión dirigidos a generar una imagen negativa del Gobierno, se identifica permanentemente al presidente con Fidel Castro, Hussein y Gadafi, «castro-comunistas-terroristas».

Se busca igualmente crear fricciones y discrepancia entre los aliados del Gobierno, sobre todo entre los apoyos militares y políticos, ejemplo: las «calentadas de oreja» a Baduel. Sistemáticamente, además, se fabrican noticias engañosas que buscan manipular la opinión pública y satanizar al régimen. Se repite una y otra vez una falsedad hasta que de tanto machacarla se vuelve un lugar común, reforzando determinadas conductas. Las ideas y proposiciones son previamente simplificadas, elaboradas para impedir la reflexión, para ser aprehendidas sin mayor esfuerzo de análisis.

Se manipulan y se yuxtaponen mensajes religiosos, apropiados para presentar a los representantes oficiales como figuras del mal, opuestos a principios y creencias religiosas sembrados en el imaginario colectivo. De igual manera, la oposición busca ritualizar con misas y actos litúrgicos algunas acciones políticas a fin de presentarse como los «salvadores» de la patria.

3. Nuevas estrategias comunicacionales de la oposición

La extensión y debilitamiento relativo del paro golpista les ha llevado a replantear el diseño de sus políticas comunicacionales. Según analistas de las propias fuentes opositoras el mensaje muestra síntomas evidentes de agotamiento, inmovilismo, pérdida de eficiencia y credibilidad. Fuentes no confir-

madras indican que Gustavo Cisneros contrató a Aquiles Esté para dirigir y orquestar la orientación de una nueva línea comunicacional opositora.

Ante la inevitable prolongación del conflicto, admitido hasta por Carlos Ortega, el objetivo central de una redefinición de la campaña mediática está centrado en el concepto de la *Defensa Nacional*. Se trataría de difundir un mensaje cuyo fin sería el de preparar a la población para la realización de un esfuerzo difícil y prolongado. Ello ante la supuesta amenaza de los peligros que acechan a la nación de persistir el desarrollo del actual proceso liderizado por Chávez. Hemos observado en los últimos días la inclusión del concepto de *Defensa Nacional* en las cuñas opositoras de los últimos días, esto tiene que ver en parte con esta concepción, pero, además, también sugieren las ideas del largo plazo, la resistencia, las proporciones históricas de las tareas, en fin, la inclusión de la idea según la cual «esto» no termina el 2 de febrero del 2003.

No al fraude y a la intervención extranjera:

Tres son, a grandes rasgos, las maneras históricas conocidas de bloquear los procesos de cambio revolucionario por parte de las fuerzas imperialistas del mundo. En el siguiente orden: primero, intentar encallejonar los procesos utilizando formas democráticas formales para diluir la carga y el contenido popular del cambio, reduciéndolo a un simple torneo electoral; si la anterior modalidad no cumple su cometido se apela al fomento de la guerra civil interna confrontando las fuerzas populares con las contrarrevolucionarias abiertamente apoyadas por las imperiales y, si aun así persiste la hegemonía política del cambio, se recurre al expediente de la abierta ocupación militar extranjera.

En Venezuela se ha alterado el orden de este tradicional esquema, pero a fin de cuentas, esta es y ha sido la vía expedita para intentar frenar los avances y la implantación del proceso bolivariano. Primero, en abril 2002 se ejecutó un golpe de Estado donde fuerzas civiles y militares del opositorismo, con apoyo velado del imperio, desalojaron a las fuerzas populares y al presidente Chávez del gobierno; luego, en diciembre-enero del 2002-2003, se intentó derrocar al Gobierno con una huelga general, de carácter insurreccional, igualmente tutelada por fuerzas del imperio y, ahora, utilizando una forma democrática, consagrada en la Constitución, como lo es el referendo revocatorio, se le da continuidad a los mismos propósitos anteriores.

Sin embargo, ante este último escenario es preciso hacer algunas conside-

raciones. Por una parte, es conveniente resaltar que, utilizando una forma democrática, como lo es la figura referendaria, consagrada constitucionalmente, son las mismas fuerzas golpistas y opositoras las que, igualmente apoyadas por el Departamento de Estado de USA, intentan nuevamente desalojar del poder a las fuerzas bolivarianas. Por eso hay que interpretar con meridiana claridad que no estamos ante un simple acto electoral o una elección cualquiera, porque, si bien es cierto que se van a contar votos, lo que realmente se dirime es la viabilidad o no de un proyecto político. O, dicho de otra manera, estamos ante la confrontación de dos proyectos y dos visiones muy distintas de país. Una disyuntiva histórica: o apuntalamos definitivamente el proceso de cambios o sucumbimos ante la diabólica entente reaccionaria del imperio, con sus aliados internos de la autodenominada Coordinadora Democrática, quienes aspiran entronizar el modelo neoliberal.

Como no estamos en presencia de un acto electoral cualquiera, las fuerzas bolivarianas deben estar alertas ante la posibilidad real de la ejecución de un fraude que desconozca la voluntad popular. Son al menos tres las acciones que en esa dirección pueden ejecutar las fuerzas opositoras: 1º la alteración de la data electoral desvirtuando los resultados reales de la votación; 2º combinar lo anterior con un «golpe mediático», anticipándose a los resultados y; 3º hacer coincidir las dos acciones anteriores con un respaldo automático y anticipado de los resultados fraudulentos por parte de Departamento de Estado de USA.

Estas pueden ser algunas de las modalidades de las acciones a ejecutar para desconocer el triunfo electoral de las fuerzas revolucionarias, pero, hay otros componentes de este plan que deben ser considerados. Como quiera que las fuerzas opositoras no aceptaran un resultado desfavorable, pudieran también estar acariciando la idea de recurrir a actos de sabotaje que provoquen el caos y la violencia para invocar la abierta intervención extranjera. Como observamos, fraude e intervención extranjera son acciones asociadas al mismo plan y con el mismo propósito y como tales deben ser evaluadas y enfrentadas por las fuerzas revolucionarias.

De la misma manera, tal como lo señalamos el pasado 10 de diciembre en Santa Inés de Barinas, algunos sectores continúan pensando en la acción del magnicidio como una forma de precipitar la confrontación política y social de la nación. Esta opción opositora no luce descabellada y hay que mirarla con extrema atención.

CAPÍTULO III

El Modelo

Nuevo enfoque en la salud: Barrio Adentro

I. Alcances políticos de la democracia participativa

Si se piensa de un modo, a la vez crítico y analítico, no resulta tan obvio por qué la revolución bolivariana es una revolución. Grandes cambios jurídicos y políticos se han dado en muchos países y no se les ha considerado revoluciones, otros procesos se han movido más velozmente y con más libertad, e incluso las banderas de la revolución (como la democracia participativa) están compuestas de elementos que por separado no pueden ser considerados radicales ni revolucionarios, por ejemplo, la contraloría social y el empoderamiento en general, no solo son fomentados por Gobiernos reaccionarios en América Latina, sino que son propuestas que en sus orígenes fueron promovidas por sectores neoliberales u organismos multilaterales.

La democracia participativa, o la idea de la inclusión social, inquietan tanto a sus adversarios porque liberan la teoría y la práctica de la democracia de las limitaciones que la hacen en casi todo el mundo poco más que un ejercicio electoral ritual. La Constitución Bolivariana implica una lógica nueva en la que la dinámica financiera no determina la posibilidad del cumplimiento de los derechos sociales y, por otro lado, los ciudadanos tienen inferencia en la gestión pública más allá de escoger entre opciones preestablecidas o de ser

cooptados como ayudantes del Estado a fin de ejecutar ciertas funciones.

Hablamos de revolución porque este proceso trata sobre la politización de la economía, la democratización de los asuntos económicos y sociales, o si se quiere, su devolución a los sujetos, como anota Istvan Mezsaros:

Para Marx, el concepto de revolución que expresa claramente en muchos contextos, es el de «revolución social». Él decía que la gran diferencia entre las revoluciones del pasado y una «revolución social» socialista era que las revoluciones del pasado tenían un carácter esencialmente político, lo cual significaba cambiar el elenco gobernante de la sociedad, mientras se dejaba a la vasta mayoría de la gente en una posición de subordinación estructural. Este es también contexto en que debemos abordar la cuestión de las «personificaciones del capital». Romper una pequeña o gran cantidad de cabezas puede hacerse con relativa facilidad, cuando estamos en el «gran golpe» para tirar algo abajo, y, en general, esto sucede en la esfera política. Este es el sentido en que se definía el concepto de «revolución» hasta hace muy poco. Ahora sabemos, por amarga experiencia, que no funcionó. Proceder de esta manera no es suficiente. De modo que tenemos que volver a lo que Marx decía sobre la «revolución social».⁴

Hasta hace pocos años las políticas económicas habían sido objetivadas, transformadas en una realidad unidimensional, sobre la cual se podía intervenir de dos maneras: bien liberando las fuerzas del mercado, bien constriniéndolas. Si se hacía lo primero, un flujo creciente de riqueza empezaba a derramarse desde el empresariado a toda la sociedad, generando un conjunto de efectos que solo colateralmente eran malévolos o perjudiciales, por lo demás eran razonables, justos, eficaces, eficientes y naturales.

Como indica el filósofo esloveno Slavoj Zizek:

La gran novedad de la era... del «fin de las ideologías»... es la despolitización radical de la esfera de la economía: el modo en que la economía funciona (la necesidad de recortar el gasto social, etc.) es aceptado como un simple dato del estado de cosas objetivo. Sin embargo, en la medida en que esta despolitización fundamental de la esfera económica sea aceptada, todas

4. István Mészáros: Entrevista, *Revista Naghd*, 2 de junio, Irán, 1988.

las discusiones sobre la ciudadanía activa y sobre los debates públicos de donde deberían surgir las decisiones colectivas seguirán limitadas a cuestiones «culturales» de diferencias religiosas, sexuales o étnicas —es decir, diferencias de estilos de vida— y no tendrán incidencia real en el nivel donde se toman las decisiones de largo plazo que nos afectan a todos.⁵

Si se dice que la economía fue naturalizada, fue en un sentido positivista, sometida a una mecánica simple de causas y consecuencias lineales, vaciada de toda complejidad: si se interviene el mercado se crea miseria, si se le deja libre se crea riqueza. Todos los desarrollos, tanto de la economía crítica, como la keynesiana, quedaron excluidos, silenciados, y los Estados se convirtieron en maquinarias de equilibrio fiscal. Las grandes corporaciones y la tecnocracia neoliberal que hegemonizaron este discurso desde los ochenta quedaron así en la posición privilegiada de ser los administradores de una objetividad inmutable, natural, que por serlo, quedaba fuera del debate democrático. Discutir sobre las leyes del mercado, más que de un modo procedimental, era tan fútil como decidir el clima del día siguiente en asamblea.

La mejor forma de limitar un régimen democrático es sometándolo a un requerimiento externo, que lo determine, estableciendo que es lo posible. Las tan celebradas democracias de los noventa nacieron bajo el mandato de los organismos multilaterales que ya no les decían simplemente lo que convenía, sino lo que era posible a secas, añádase las limitaciones que ponían en muchos países las fuerzas armadas, grupos de extrema derecha etc., y se entiende el sobresalto que causaron los cambios democráticos en Venezuela.

El neoliberalismo era bueno estableciendo silogismos que demostraban cómo los esquemas de intervención estatal eran imposibles o ilógicos, pero, se trataba de planteamientos imaginarios que hablaban más de las propias imposibilidades internas del neoliberalismo que de las de la economía, su única fuerza era su patrocinio por elites e instituciones y la difusión frenética de los medios de comunicación. Aun así, su incoherencia saltaba a la vista. Economistas como Joseph Stiglitz se hacían la pregunta obvia: ¿por qué se le ordena a los países subdesarrollados ejecutar políticas que los desarrollados no ejecutarían jamás?

5. Slavoj Žižek: “Dije economía, estúpido”, *Escenario*, Uruguay, 2004. <http://www.escenario2.org.uy/numero2/zizek.html>

Últimamente sin embargo asistimos a un giro irónico: los países desarrollados empiezan a tratar a sus habitantes como los de nuestros países por lo general tratan a los suyos, en un momento en que algunos organismos multilaterales empiezan a hacer correcciones en la dogmática que han defendido por años.

Dos casos ilustran esto, respecto al primero, refiere Noam Chomsky:

Basta analizar lo que ocurre con la salud pública (en EEUU) un importante asunto interno. Los costos se han disparado en el sistema norteamericano, en su mayoría en manos privadas, mucho más que en sociedades comparables. Y además, con resultados relativamente pobres. Las encuestas muestran de manera regular que la mayoría de los estadounidenses están a favor de algún tipo de seguro de salud nacional. Pero la perspectiva parece ser políticamente imposible. Las empresas de seguros sanitarios y la industria farmacéutica se oponen. Con una efectiva erosión de la cultura democrática, no tiene importancia qué desea la población.⁶

Aquí se cruzan los dos temas: no solo la elite político-corporativa en EEUU está desmantelando lo poco que quedaba de la salud pública y la seguridad social, sino que tal decisión quedó completamente al margen del debate público:

El logro del actual sistema político es convertir los temas de gobierno en algo irrelevante. Tanto la publicidad como los medios de comunicación no se concentran en asuntos sino en cualidades, en el estilo de los candidatos, su personalidad y otras irrelevancias.⁷

Respecto al otro, basta anotar este sorprendente cambio de dirección de parte del Banco Mundial:

El Banco Mundial reconoce que el sistema privado de jubilación «no está funcionando bien» en Latinoamérica, donde en la década pasada el orga-

6. Noam Chomsky: "La democracia empieza en casa", *El Periódico*, 06 de septiembre, 2004.

7. *Ibíd.*

nismo presionó a los gobiernos por su instauración. Tan impactante como la admisión del error es la propuesta para corregirlo. Dice que hay que «reconstruir» el sistema público para universalizar la cobertura a los millones de trabajadores/futuros jubilados marginados de la seguridad social. El régimen de capitalización privado, en tanto, quedaría acotado al aporte voluntario de los trabajadores de mayor capacidad contributiva.

El documento del Banco Mundial, titulado «Manteniendo la Promesa de la Seguridad Social en América Latina» (Keeping the Promise of Social Security in Latin America), fue elaborado por los funcionarios Indermit Gill, Juan Yermo y Truman Packard. Ya causó un enorme revuelo entre los ejecutivos de los fondos de pensión de la región, a quienes fue presentado en un seminario.⁸ Puede decirse entonces, que en el momento de mayor radicalización del neoliberalismo, es el momento en que se devela su inconsistencia: La emergencia del proyecto bolivariano y de su idea jurídico-política, en esta coyuntura, constituye un acontecimiento revolucionario porque la única manera de crear una sociedad donde las decisiones críticas de largo plazo surjan de debates públicos que involucren a todos los interesados es poner algún tipo de límite radical a la libertad del Capital, subordinar el proceso de producción al control social. La repolitización radical de la economía.⁹

La revolución bolivariana es este límite radical al poder del capital que inversamente expresa la radicalización de la libertad y el poder de lo excluidos y explotados, del pueblo. Se entiende entonces el gran entusiasmo, el gran malestar, el miedo y las esperanzas que ha desatado a nivel continental las cuales trascienden mucho más allá del resentimiento de una clase política desplazada o de los prejuicios de los sectores medios. Se entiende por qué una gran cantidad de mecanismos técnico-políticos de gestión pública que, de por sí, no tienen implicaciones revolucionarias, se convierten en estas condiciones en armas prodigiosas de transformación social.

8. Maximiliano Montenegro, "El Banco Mundial admite el fracaso de la jubilación privada", *Página 12*, 25 de septiembre, Buenos Aires, 2004.

9. Zizek, Op. cit.

II. La nueva definición de la gestión pública

Cuando la Revolución Bolivariana, presidida por el proceso constituyente de 1999, determina sus coordenadas jurídico-políticas se ubica a contracorriente respecto al estado de cosas establecido en el continente y el mundo en general, desde los tempranos setenta. Sectores económicos, académicos y políticos de orientación neoconservadora, desplegaron desde entonces una efectiva estrategia para reorientar las políticas económicas y sociales, esta estrategia se basó en la privatización como medio para obtener un efecto flexibilizador y la desregulación en la economía.

Esto respondía a la idea de que la intervención del Estado afectaba la libertad de los individuos, incluidos sectores vulnerables, como pobres o trabajadores. Así que, al privatizar, no solo se suplantaban estructuras ineficientes por otras eficaces y efectivas, sino que se aumentaba las opciones de unos y otros individuos de «decidir» por sí mismos su destino. No es difícil ver por qué estas ideas están tan desprestigiadas. En principio parten de una idea de libertad que, en síntesis, no es más que el poder o la capacidad pensada desde su restricción.

Esto nos ponía en la ridícula situación de decirle a un ama de casa, viuda y desempleada que escogiese «libremente» a qué sistema de seguridad social quería afiliarse, o a un joven sin preparación laboral que optase «con libertad» a un trabajo decente, o peor a un miembro de un pueblo indígena que era libre de integrarse al mundo «civilizado».

Se puede decir en este sentido que el neoliberalismo es la reducción de la esfera pública, a fin, tanto de liberar a operadores económicos y políticos de limitaciones y regulaciones, como para permitirles la apropiación por diferentes medios de la gran riqueza social acumulada en muchos países mediante inversiones estatales o cotizaciones.

El avance progresivo del neoliberalismo durante los años ochenta representa un momento sintético que recoge la prolongada decadencia de los servicios públicos y las políticas sociales. Así, tanto en Venezuela como en diversos países, incluso del primer mundo, el abandono y el deterioro devienen estrategias destinadas a desvalorizar las infraestructuras públicas en beneficio de eventuales gestores privados. El paradigma programático de esta política está representado en El Gran Viraje, política del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

En América Latina, los partidos políticos, las academias, los medios de comunicación, la sociedad civil e incluso los sindicatos, aceptaron como un hecho la imposibilidad e indeseabilidad de una gestión social pública, el neoliberalismo se atribuyó, no solo la explicación de las lacras del pasado, sino el monopolio del futuro, si algo era moderno, era privado y, si era público, resultaba sin duda atrasado y corrupto.

Pero a partir de 1998, intempestivamente, se abre paso una nueva idea jurídico-política, irrumpe un proyecto contrahegemónico, en el buen sentido del término, una nueva racionalidad, al tiempo que como proyecto político concreto: frente a una idea unilateral del ciudadano como propietario y consumidor, una totalizante que lo considera en tanto que ser humano; frente a la aceptación de la incapacidad fiscal del Estado de pagar la deuda social, afirmación de los derechos sociales en el corazón del nuevo orden jurídico; frente al desplazamiento de los costos hacia el ciudadano y del control y los beneficios al interés privado, financiamiento como obligación del Estado y gestión en coordenadas de participación ciudadana, apuntalamiento del carácter público de los sistemas de seguridad social.

El proceso constituyente del 99 plantea esta nueva racionalidad la cual no tiene sentido para la tecnocracia: que la política financiera y el régimen fiscal han de supeditarse al cumplimiento de los derechos sociales. Si esta nueva lógica choca a la mente del planificador tecnócrata, o del no-planificador neoliberal, es porque para ellos el ámbito de lo posible está signado por la dinámica financiera y monetaria que se autonomiza y se enfrenta al resto de las dinámicas sociales.

III. La Salud en el Gobierno Bolivariano

Nuestro nuevo orden jurídico, por el contrario, establece que el desarrollo social y el bienestar son potenciadores e intensificadores del desarrollo económico. Es en este cuadro general donde entra el derecho a la salud como: «un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida» (Art. 83).

El planteamiento constitucional implica un desarrollo fundamental: la garantía del derecho a la vida no solo atiene a la problemática jurídica, o del orden público, sino al del desarrollo social. Cualquier planteamiento jurídico,

que reduce el derecho a la vida al momento excepcional en que esta es amenazada por un particular o el Estado, es hipócrita, pues las amenazas que pesan contra la vida son múltiples, y anidan en el tejido social, la pobreza, la contaminación, la explotación, amenazan y degradan la vida, no solo la vida digna sino la vida en general al potenciar la morbilidad, la violencia, las carencias y debilidades de todo tipo.

El derecho a la salud está garantizado constitucionalmente por un Sistema Nacional de Salud: «de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad» (Art. 84). En otras palabras un sistema global, articulado con el conjunto de la seguridad social y abierto y disponible para los ciudadanos sin ninguna limitación.

Respecto al financiamiento, administración y gestión de los recursos la constitución es taxativa: el Estado lo financiará integrando: «los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley». Por otro lado está obligado a garantizar: «un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria».

Las definiciones de una democracia como la nuestra, puesta bajo la lupa por el Gobierno de Estados Unidos, contrasta con las que allá se imponen, de forma sumaria, dice uno de los principales asesores políticos de Bush:

La clave son las pensiones y la sanidad. El año pasado Bush aprobó la creación de cuentas personales en las que cada ciudadano acumule ahorros para pagarse la asistencia sanitaria. Y en el programa electoral para la reelección se incluye una privatización parcial de las pensiones. Esos dos capítulos son un tercio del gasto público en este país. En 20 años, la mitad de la población estará en sistemas asistenciales y de pensiones privados. Y el Estado de Bienestar ya no será necesario. A eso se sumarán reformas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, y la reducción de competencias de la Administración Federal de Medicamentos (FDA), que autoriza la comercialización de fármacos.

Son muchos los sectores que atentan contra este proceso, en principio los múltiples factores económicos que se habían venido beneficiando del fraccio-

namiento de las estructuras sanitarias: listas interminables de proveedores del Estado, de sindicatos corrompidos, seguros privados que consiguieron a través de las instituciones de salud el medio ideal para transferir recursos del Estado. Esta mentalidad parcelaria es común tanto a un esquema estatista de corte vertical, como a uno neoliberal.

En las críticas de los sectores privatizadores hay algo de cierto: que los pobres y los grupos vulnerables fueron, en Venezuela y Latinoamérica, objeto de políticas verticalistas y burocráticas que muchas veces decidían su sino a sus espaldas, hay muchos ejemplos de esto, pero no tenemos necesidad de irnos lejos, el paternalismo peyorativo del Estado puntofijista sobre sectores como los aborígenes y las mujeres o los niños y niñas es una buena muestra de ello. Lástima que las elites económicas y sociales que se beneficiaron de él, lo denunciaran cuando ya no les reportaba beneficio y no en su ápice.

El efecto de un esquema burocrático y verticalista en la gestión pública en salud es el asistencialismo y, entre un régimen asistencialista y uno liberalizado, existe más de una línea de continuidad. Es la idea de la salud pública como combate o control de la enfermedad y, en el límite, de la mortalidad. El objeto de las políticas sea cual fuere su alcance y sus recursos, es restituir la normalidad o equilibrio perdidos por el cuerpo enfermo, y garantizar una proporción entre natalidad y mortalidad favorable al crecimiento económico, en el límite se trata en uno y otro caso de la mera prolongación de la vida a despecho de su calidad o de sus condiciones.

En un régimen público, la gestión se reduce al tratamiento de las enfermedades más comunes, el ciudadano se convierte en objeto de atención por el sistema de salud en tanto que enfermo o convaleciente y la prevención se reduce a ámbitos como el epidemiológico, rango de acción que progresivamente se reduce al irse mermando la inversión del Estado. En uno privado o semiprivado, políticas débiles de prevención enmarcan una atención diferenciada según el sistema o régimen al que se afilien los particulares y, al que entrarán o serán conducidos cuando se reconozcan a sí mismos como enfermos o, cuando ocurra una contingencia, con el agravante de que el régimen está atravesado por requerimientos comerciales y financieros inmediatos, por eso no extraña que los hospitales y clínicas se inclinen por métodos cada vez más interventivos, pues por naturaleza, estos permiten mayores ganancias en un menor tiempo.

En ambos casos se está ante una atención reactiva, restringida y sobre

todo hospitalaria. Tiene como modelo y centro una institución que —ya lo dice su nombre— recibe y acoge a los enfermos y heridos, el vasto campo donde operan las causas de los accidentes, violencias y la morbilidad en general, queda por definición fuera de su alcance.

Si una de las pocas áreas donde la salud pública tuvo una postura activa fue el de las epidemias, eso porque debido a su naturaleza no resulta suficiente un tratamiento hospitalario y es forzoso remitirse al ambiente propio del agente infeccioso y sus vectores.

En este sentido, se puede decir que en un régimen hospitalario, asistencialista y reactivo, la privatización es la conclusión necesaria o potencial para un sistema que nunca tendrá mas que un impacto limitado. Si este es el caso particular de, nuestros países, es porque aquí, el establecimiento de los sistemas de salud pública no vino acompañada de las vastas reformas sociales y el desarrollo económico que saludaron su advenimiento en Europa y Estados Unidos.

La salud asistencialista interventora y reactiva deviene en uno u otro caso un producto —de calidad cada vez menos regulada— o un gesto caritativo y, el ciudadano, ya objetivado como enfermo, elemento más o menos pasivo de su propio proceso, se enfrenta a la asistencia ya como un lujo que debe costearse, ya como una dádiva, mientras el verdadero escenario en que se debaten la vida, la enfermedad y la muerte se extiende a extramuros del hospital.

Y es que la problemática de la exclusión, a la que nos referimos antes, atañe en realidad a dos exclusiones consecutivas: en principio, la del hospital del tejido social, que genera la exclusión de todos aquellos que no pueden salvar esa distancia y, en todo caso, su inserción en él como sujetos pasivos; además, la salud reactiva y asistencialista privada o pública, excluye porque ella misma está de antemano apartada, reclusa en emplazamientos que —sobre todo en sector público— la población asocia con sufrimientos y tragedia y que en el privado solo pueden ocultar ese carácter con procedimientos expeditos y atenciones hoteleras.

Se excluyen así mismo las causas de la morbilidad, la mortalidad, de los siniestros y accidentes, garantizando que el régimen completo repose en cierta impotencia constitutiva.

IV. Sentido y fines de la misión Barrio Adentro

El pilar de un modelo alternativo de gestión en salud es la recolocación de lo sanitario en el contexto amplio de la vida social y de las políticas destinadas a enriquecerla. En un contexto como el venezolano, la cuestión es la integración de las personas, ya no en tanto que enfermos, sino en tanto que ciudadanos desde una perspectiva integral donde son elementos activos de la gestión.

En este sentido la mejor política sanitaria es aquella que se implica en las restantes políticas sociales interviniendo en las causas de la morbilidad, los accidentes y las dolencias, interviene en el proceso vital de un modo constante fortaleciendo al individuo y la población. La idea fundamental es entonces evitar la enfermedad, prevenir las dolencias y accidentes más que atenderlos o repararlos, mejorar las condiciones de vida en su globalidad: medio ambiente, dieta, etc.

En 1978, la declaración de Alma Ata marca un nuevo entendimiento del problema de la salud basada en la estrategia de atención primaria, la cual definió como:

[...] atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los individuos y las familias en la comunidad a través de su completa participación, y a un coste que la comunidad y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada nivel de su desarrollo, un espíritu de autodependencia y autodeterminación. Forma una parte integral tanto del sistema sanitario del país (del que es el eje central y el foco principal) como del total del desarrollo social y económico de la comunidad. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el sistema nacional de salud, acercando la atención sanitaria al máximo posible al lugar donde las personas viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del proceso de atención sanitaria continuada.

Con esta estrategia se emplaza la salud en el hábitat y la cotidianidad de la comunidad, en la vecindad, proveyéndola de la atención esencial, evitando así que el individuo ingrese al sistema sanitario directamente como enfermo.

Ahora bien, los principios de la atención primaria que hemos asumido incluyen la prestación de servicios curativos, rehabilitadores y preventivos, la educación sobre la problemática sanitaria, el saneamiento del medio ambiente, la inmunización, la planificación familiar, y articula los esfuerzos y saberes de los distintos profesionales de la salud, bien sean médicos, enfermeras, comadronas, etc.

La importancia de esta propuesta, es que supone la definición por parte de las comunidades de sus propias necesidades, de acuerdo a su especificidad cultural, en este espíritu el Artículo 122 de la Constitución reconoce y valora el conocimiento tradicional en medicina de estos pueblos.

La participación de la comunidad en la planificación y aplicación de las políticas sanitarias que le conciernen, es un requisito fundamental para la integración de las grandes mayorías, el cual es, en síntesis, el sentido del proyecto bolivariano, ya el presidente Chávez lo ha planteado claramente: el medio para combatir la pobreza es darle poder a los pobres, la posibilidad de controlar sus condiciones de vida, en todos los sentidos, es el requisito para que los individuos y la sociedad, establezcan el balance adecuado del que será efecto la salud.

La Misión Barrio Adentro implica entonces ambos imperativos: el de atender la vida y la salud de la población en el laboratorio mismo de la enfermedad, de acuerdo a la definición de Alma Ata, el de evitar que por falta de los controles adecuados el Sistema de Salud atienda solo enfermos y, más aun, enfermos crónicos y, por otro lado, entregar a la población poder sobre los mecanismos de atención, para que esta no sea una prestación que llueva del cielo y cuyas características los ciudadanos no puedan modificar. Sacar a los ciudadanos de las estructuras que los objetivan como enfermos es combatir, a la vez, el carácter curativo, reactivo y asistencialista de la salud, y los modelos de planificación burocrática.

V. Misiones y participación popular

El presidente Chávez, ha planteado claramente cuál es la vía bolivariana para la superación de la pobreza: darle poder a los pobres. La razón de esto es obvia, los pobres no son pobres por su naturaleza, por taras, por su «mentalidad» o por culpa del Estado que les quita su libertad, lo son por que están excluidos, dominados, explotados, doblegados por relaciones asimétricas e

injustas, no solo con el Estado o sectores más privilegiados, sino por relaciones que ¿necesario es decirlo? contraen entre sí.

Rechazamos por tanto esta idea de la pobreza como un estado de cosas dado y, por tanto, de la pobreza como un objeto, como algo objetualizable, pues es la premisa teórica de la consideración práctica del «pobre» como un ente pasivo; se llega así al pobre que recibe asistencia, al pobre que recibe caridad, al pobre que es objeto de políticas públicas, pues la objetivización de la pobreza es objetualización del pobre.

Queremos entonces reiterar: no hay pobres, hay explotados, hay excluidos, personas que trabajan por salarios de hambre para patronos que incumplen las leyes 128 laborales o evaden impuestos; hay universidades públicas copadas por la demanda de los liceos privados; hay mujeres sometidas a la discriminación de género; hay ciudadanos maltratados por autoridades ineptas que solo acuden a ellos para buscar votos, eso hay junto al efecto acumulado de estos procesos por largo tiempo, no pobres.

En este sentido la importancia de las misiones está en que son la primera iniciativa donde el pueblo se ha integrado de una forma orgánica a la gestión pública, el que esto haya sido posible fuera de la estructura formal de los ministerios, el que estas iniciativas urgentes solo hayan sido posibles manobrando alrededor de la estructura formal del Estado, demuestra hasta qué punto las instituciones actuales están desfasadas de las exigencias jurídico-políticas del proceso.

No se trata de que los ministerios, por ejemplo, no se adecúen a la contraloría social, sino que conspiran contra ella y, más allá de ella, contra todos los mecanismos de participación y cogestión que la Constitución establece. Tenemos ministerios e instituciones áridas, donde los ciudadanos difícilmente consiguen información u orientación, estructuras paranoicas desde las cuales se reivindica la participación popular pero donde se la posterga o se la hace imposible. Si el espíritu del Estado venezolano corresponde a la v república, su carne es sin duda, fundamentalmente de la iv.

El rasgo más característico de esto es la lógica parcelaria que tantas instituciones públicas empiezan a mostrar, el Estado parece fragmentarse en un sinfín de instancias con políticas propias que, no solo no cooperan entre sí, sino que se recelan mutuamente. Esto trasciende mucho los conflictos entre el gobierno central y los estatales, asistimos a luchas a muerte por control de espacios, recursos y visibilidad política entre instituciones con funciones

específicas que deberían colaborar.

El MSDS es testigo de excepción de los alcances que puede tener la fragmentación del Estado las cuales dificultan enormemente la misión de constituir un Sistema Público Nacional de Salud. Las dificultades en la implementación de las primeras clínicas populares, los innumerables tropiezos sufridos ¿que en su momento el presidente denunció? muestran cómo los obstáculos del proceso se han desplazado de una resistencia externa de los factores de poder tradicionales a una interna que, no solo se ancla en estructuras reaccionarias como ciertos sindicatos, sino a limitaciones de la subjetividad política de los mismos elementos internos al proceso.

Esto remite a una problemática en el terreno de la formación: los funcionarios públicos, los activistas sociales, aún están atados a unas perspectivas cercanas tanto al neoliberalismo como al asistencialismo y el estatismo que como vimos tienen la misma matriz, el Estado aparece en esa mirada más como un conjunto de espacios que como un conjunto de funciones.

Propuesta:

La respuesta a esta problemática en el ámbito de la salud pasa por los comités de salud, pues son sin duda la organización más idónea a los fines de organizar la confluencia entre todos los implicados en los procesos de salud y calidad de vida de las comunidades. Caracterizados por ser una instancia altamente responsable, organizada, integradora, con conciencia política y por tratar de dar respuesta a las necesidades sociales más urgentes de la comunidad, no solo se han encargado de las políticas en el área de la salud, sino también han influido y ejecutado políticas en las áreas de educación, deporte, cultura y en fin, con todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Apoyarse en los comités de salud, la conciencia de que la comunidad no es un adversario que interpela o toma por asalto la gestión «propia» es un requisito fundamental para crearle un cuerpo o una carne, a la idea constitucional bolivariana.

De cualquier forma, tanto las limitaciones que determinaron que el Estado recurriese a las misiones, como las potencialidades que estas demostraron, nos muestran hasta qué punto necesitamos y cuánto necesitamos inventar una república: una cosa pública, espacio colectivo e indivisible gestionado de acuerdo a criterios comunes, atravesado sin duda por juegos de poder, por

luchas y diferencias, pero articulado en torno a criterios comunes producto del debate democrático y no sometido a ningún elemento externo que quiera condicionarlo, unificado como un solo espacio social y económico donde el patrimonio y la riqueza de la sociedad no se privatice ni se parcialice. En otro tiempo circuló cierta consigna «nada fuera del Estado» la superación de esta idea parcial, derrotada por otra «todo para el mercado» está en la nueva idea constitucional venezolana: nada fuera de la democracia y una sola democracia, la participativa.

La transformación de la gestión pública en una auténtica gestión integrada, con expresiones básicas de la vida comunitaria, como los comités de salud, hará de los excluidos, esos «seres invisibles», cómo los llama Gustavo Pereir, unos protagonistas reales, para los que solo podemos:

[...] esperar que la democracia participativa y protagónica allí consagrada (en la Constitución) consolide en sucesivas etapas los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien colectivo, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley y asegure y garantice cuanto le fuera menoscabado o suprimido a esas ahora de nuevo visibles mayorías: el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación...

Discurso del profesor Wladimir Ruiz Tirado con motivo de la celebración del Natalicio del Libertador Simón Bolívar, 24 de Julio de 2005

Nos convoca hoy el espíritu libertario, democrático e independentista de Simón Bolívar. El Libertador nos legó una agenda hace doscientos años, la cual tenemos pendiente casi en su totalidad. No se trata de deslizarnos hacia un análisis pesimista de nuestra calamitosa historia, sino, por el contrario, afincarnos en intentar determinar con la mayor claridad posible los retos del presente.

Desde el *Manifiesto de Cartagena* hasta el *Discurso de Angostura*, pasando por toda su actuación política y militar, Bolívar enfatizó el carácter nacionalista y democrático de su proyecto. Adicionando a esto, una necesidad perentoria de potenciar la integración y la unidad hispanoamericana para hacer

una realidad tales designios. El imperio de la ley, la igualdad ciudadana y la justicia social aparecen con inusitada constancia en su discurso.

Hoy, a tantos años de su desaparición física, la discusión y los temas de su agenda y de su pensamiento nos obligan a contextualizarlos en esta etapa de nuestra vida republicana, no sin antes, «repensar esa herencia», tal como lo formula el filósofo Gianni Vattimo.

De entrada, podemos apreciar que, en la actualidad, es imposible pensar una revolución de contenido popular, si ella no va más allá del capital y de los modelos hegemónicos imperiales.

Desde 1961, cuando apareció publicada la obra póstuma de Franz Fanon, *Los condenados de la Tierra*, quedó absolutamente claro, para los revolucionarios del mundo, la asociación estratégica entre las luchas populares y las de liberación nacional. Quizás, en tiempos de Zamora o en otros precedentes, era pertinente plantearse la separación entre ambos procesos, pero no hoy, cuando el imperio utiliza toda su panoplia económica, política y militar para intentar aniquilar cualquier proyecto democrático y nacional.

Ya escogimos un camino, la encrucijada que se nos presentó fue precisamente esa. O nos uníamos alrededor de los intereses de los trabajadores y el pueblo y radicalizamos el ejercicio de la democracia profunda u optábamos por las fórmulas y las recetas del imperio y sus secuaces criollos.

No se trataba, tal como lo han venido sustentando los ideólogos opositores, Germán Carrera Damas y Máximo Desiato, de ir hacia un proyecto nacional de corte «moderno», capitalista, sino de potenciar el empuje y el arraigo popular de este proceso político y producir un modelo inédito, de corte democrático, asociado a la integración latinoamericana, tal como lo propugnaba Simón Bolívar y como lo ha retomado muy acertadamente el presidente Chávez, en el marco de un mundo donde prevalecen las hostiles banderas neoliberales. A fin de cuentas, una revolución que se precie de tal debe ser inédita, tal como lo expresa Ricardo Reis, heterónimo de Pessoa, en la novela de Saramago: *El año de la muerte de Ricardo Reis*. O, como muy bien lo indicó Simón Rodríguez, cuando señaló que estamos obligados a ser originales en la formación de nuestras repúblicas.

O, como también lo expresara Andrés Bello, debemos respirar en nuestras obras con pensamiento propio, original; debemos aprender a chupar los jugos de nuestra tierra y nuestra gente. Idea similar también desarrolló posteriormente el filósofo Leopoldo Zea.

Vivimos un momento estelar de nuestra historia. Por largos períodos de ella, esos condenados a quienes hace referencia Fanon, los excluidos de siempre, el pueblo llano y los trabajadores, no habíamos tenido ni el protagonismo ni la presencia en los timones de mando del Estado y en los ejes de las decisiones políticas fundamentales. Hoy ello ha sido posible.

No quiero decir con esto que estemos ante un hecho cumplido, una realización definitiva, pero sí andamos en la senda de los anhelos de redención social secularmente postergados.

Andamos en la vía correcta. Hoy, más que en cualquier etapa de nuestro devenir, la dimensión de la responsabilidad de quienes hemos asumido esta ciclópea tarea es de tal magnitud que obliga a ponderar y a calibrar cada uno de nuestros pasos.

Son varios los factores y las voluntades que se han conjugado para ubicarnos en la etapa actual. En primer lugar, una crisis profunda, histórica, de carácter estructural, en los ámbitos económico y político, sacudió los cimientos de la anterior república. Hizo aguas el rentismo petrolero y con él el sistema político fundado en el Pacto de Punto Fijo. El saldo de este período histórico fue trágico. Dejó una deuda externa muy voluminosa y unas finanzas públicas en bancarrota, un precio petrolero en sus más bajos niveles históricos y una desaceleración del aparato productivo sin precedentes. El reflejo de esa honda crisis se hizo patente en un incremento drástico de la pobreza y la exclusión social. La expresión primera de rechazo colectivo a este escenario fue la revuelta popular de 1989, la cual fue masacrada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

En segundo término, en el marco anteriormente descrito, se desarrollaron múltiples y diversos movimientos populares, luchas sostenidas a lo largo del tiempo y del espacio nacional, con variadas historias y con propósitos distintos, pero con una clara tendencia a la sedimentación y a la síntesis de experiencias.

Podemos apreciar, de igual manera, que la emergencia de la oficialidad patriótica, encabezada por el hoy presidente Chávez, pasó a convertirse en referencia obligada a la hora de aglutinar los movimientos dispersos y sin coordinación entre sí.

En cuarto lugar, la unificación de los factores políticos, partidos y organizaciones hizo posible una plataforma política blindada para la consecución de los objetivos propuestos.

Y, finalmente, el ascenso al gobierno por parte de Chávez y las fuerzas políticas y sociales unificadas en este proyecto, potenciaron extraordinariamente el avance del movimiento patriótico y terminaron de cohesionar un sólido liderazgo aglutinante de los factores populares y bolivarianos.

Sin embargo, hay que ser cautelosos en la evaluación de estos avances. Por una parte porque son muchos los poderes y los intereses de la anterior república que permanecen intactos y, por la otra, porque si bien es cierto que hemos alcanzado posiciones de poder, aún falta mucho trecho para consolidar las bases de poder del proceso. Tener el gobierno no es aún tener el poder o, al menos, posiciones decisivas de él que garanticen el avance definitivo del proyecto.

La crisis anteriormente descrita también generó la conformación de nuevas corrientes en el seno de la derecha. Ante el avance de las fuerzas del cambio revolucionario, simultáneamente se gestó la aparición de nuevos actores y sectores que, en alianza con la fuerza del pasado e interpretando los tiempos del neoliberalismo y las redefiniciones de las políticas imperiales, le han dado programa y sentido a las acciones golpistas y contrarrevolucionarias.

De allí que son muchas las amenazas y las acechanzas.

Como sabemos ya hubo un golpe de Estado y un intento por perpetrar el segundo. En ambos nos salvó el instinto, la sagacidad política y la intuición de Chávez y, junto a él, la activa acción protagónica del pueblo, de los trabajadores y la corriente patriótica dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales.

No debemos olvidar la experiencia histórica. La liquidación física de Zamora, cual «gaitanazo» del siglo XIX, descabezó el federalismo y condujo al Tratado de Coche. Son muchas las formas como los imperios y las oligarquías liquidan las iniciativas populares. El movimiento popular de las décadas del cincuenta y sesenta fue bloqueado por el Pacto de Punto Fijo. Queremos alertar con relación a esto, porque aun cuando la historia es irrepetible, debemos considerar sus enseñanzas, como lo decía Chessnaux, no podemos hacer tabla rasa del pasado, y la idea del magnicidio es una carta que han venido sopeando sectores de la ultraderecha.

Tampoco debemos olvidar que en nuestro país se libra una confrontación de carácter internacional. Son los intereses de las transnacionales los que están en juego y, por supuesto, estamos en presencia de una nueva modalidad de la doctrina Monroe, como lo es el ALCA, sin dejar de lado la estrategia del Plan Colombia. De allí que no sea casual la presencia de tan variada y abierta opo-

sición, tanto interna como externa, así como las opiniones permanentes de altos funcionarios del Departamento de Estado y la presencia activa de la CIA.

Los retos que tenemos por delante son materia de alto interés en esta panorámica política.

Estamos avanzando en la construcción de un nuevo Estado. Una herramienta que conceptual y políticamente le dé cuerpo al ámbito de lo jurídico, lo político y lo administrativo en estrecha armonía y vinculación con el protagonismo del pueblo y sus actores. Quizá más adelante tengamos que pensar en una reforma de la Constitución para apuntalar el proceso.

Es preciso apuntalar una dirección política unificada del proceso. La definición de una estrategia y un programa mínimo de acción son indispensables. De la misma manera, adelantar criterios para la articulación de un gran bloque de fuerzas y activistas populares bajo la óptica de una gran plataforma unitaria.

También, en la misma dirección, hay que profundizar la revolución cultural. Es impensable el avance del proceso sin que ocurra una ruptura con los paradigmas del pensamiento y la ciencia occidental. La lógica bivalente y el conocimiento disjunto no pueden continuar como únicos instrumentos para la producción del conocimiento y la conciencia que requerimos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por liberarnos del persistente conflicto de identidad que muy elocuentemente ha descrito el filósofo de Palmarito, José Manuel Briceño Guerrero, en su obra *El laberinto de los tres minotauros*, donde hace explícita la permanente controversia entre un NOS que nos es esquivo y un OTROS que se nos ha impuesto en forma avasallante.

No basta con denunciar el neoliberalismo, hay que construir y diseñar el modelo alterno. Tenemos las herramientas y las condiciones para ello. Disponemos de una industria petrolera que es palanca nacional y regional para ello. Así mismo, disponemos de un patrimonio estratégico en el parque de las empresas básicas del Estado. Se han ido perfilando, además, movimientos empresariales y de trabajadores asociados a los intereses estratégicos de la nación y del Estado, así como, una política de diversificación de la propiedad social cuyo ejemplo más ilustrativo son las cooperativas. A la par, la política integracionista del Gobierno nacional, aún cuando de difícil y compleja concreción, apunta como una necesidad insoslayable.

Sin embargo, es conveniente observar que, cualquiera sea el modelo que adoptemos, si este no procura la elevación de la conciencia política, será in-

consistente. Ya lo decía sabiamente Ernesto «Che» Guevara, la formación de una nueva economía requiere de «una conciencia nueva frente a la sociedad», este no es un problema solo de la producción. La fórmula propuesta fue simplificada así: «Productividad, más producción, conciencia, síntesis sobre la que se puede formar la sociedad nueva».

Quiero finalizar estas palabras haciendo referencia al tema del socialismo del siglo XXI. Es obvio que esta no era la discusión decimonónica, en los tiempos de Bolívar. Pero, sí lo es, el que todo apuntaba hacia acá, porque a fin de cuentas, el fondo de los problemas planteados tanto ayer como hoy son de una recurrencia pasmosa: sobre todo los temas democráticos y antiimperialistas.

La idea del hombre por la construcción de una sociedad igualitaria, democrática e independiente ha sido inmanente a la humanidad misma. La idea misma de establecer una relación solidaria entre sus miembros y una relación de equilibrio con la naturaleza ha sido un norte estratégico de inacabable sucesión en la historia de los pueblos. Sin embargo, esta no ha sido tarea fácil.

De hecho, hay que evaluar con el rigor del caso, tanto la teoría como las realizaciones concretas del denominado «socialismo real», pues sin identificar las rémoras y las desviaciones que frustraron tales iniciativas estaríamos pecando por omisión.

Lo que sí tenemos claro es que no queremos ser administradores de Estados fundados sobre la lógica del capital, eso que han denominado el socialismo democrático, el cual funciona como el modelo a seguir por la ortodoxia neoliberal. Está bien, administren el gobierno, pero no toquen los resortes del capital en lo económico, nos dicen los iconos del libre mercado.

De lo anterior se desprende la complejidad y las enormes dimensiones de la construcción de un modelo que a la par de ser democrático, incluyente, y solidario; tenga, además, la exigente virtud de ser original y autónomo. Esto último como muy bien lo dijo Simón Rodríguez nos coloca en la obligación de ser inventar absolutamente todo. Por supuesto, como muy bien lo acota Rigoberto Lanz, no estamos partiendo de cero.

Carora, 24 de julio de 2005.

Alfredo Maneiro, un filósofo

Fue un filósofo. Alfredo Maneiro fue ante todo un auténtico filósofo. No al estilo de los constructores de grandes sistemas interpretativos, aquellos quienes han pretendido abarcar el conocimiento de todo lo existente, reduciendo la actividad filosófica a un ejercicio meramente intelectual, sino definiendo un campo de estudio cuya razón es producir criterios, es decir, perfeccionándolos y adecuándolos para un fin determinado.

Esa fue la tarea que se impuso. Por eso, la clave, o al menos una de ellas, para encontrar las pistas de la vigencia de su pensamiento y de su propuesta está precisamente en el considerar que la filosofía, a diferencia de la ciencia, trabaja en la dirección de producir un sistema de criterios en vez de uno de conocimientos.

Adentrándose en la polémica acerca del uso práctico de la filosofía, llegó a la conclusión según la cual el campo de utilidad de esta es la de producir criterios políticos refinados, esto es, asumir la filosofía de la praxis «no solo como supuesto, como fin y como objeto sino además, como conocimiento». Es por ello que Maneiro destaca que esta filosofía incluye el cálculo de su propia realización dentro de los términos de su reflexión.

En su obra *Maquiavelo, política y filosofía* reivindica el carácter de pionero que tuvo el florentino en el surgimiento de la filosofía política, pero, además, le permite concluir que si bien existe una rama de este pensamiento de corte evolutiva y conservadora, existe otra, de carácter revolucionaria cuando su tarea es dar origen a un nuevo Estado o modificar su precedente. Aunque señala que Maquiavelo enlaza ambas concepciones nos dice que en las condiciones que le tocó actuar, él asume la segunda.

Lo anteriormente expuesto explica el porqué en Maneiro existe una plena coherencia, una fluida relación entre teoría y práctica. No hay campo para la retórica ni para la fraseología hueca, mucho menos para la especulación discursiva. Cuando asumió el proyecto de construir un instrumento político para transformar la sociedad lo hizo con coordenadas bien claras, absolutamente definidas. Sus pasos, tanto teóricos como prácticos, estaban milimétricamente elaborados. Hay quienes admiran su sagacidad y su genio para actuar y desenvolverse en las condiciones más adversas posibles, como efectivamente

te ocurrió, sin embargo, además de eso, nosotros subrayamos su carácter de visionario, de hombre con el talento y el talante adecuado para aportar una concepción del mundo que trascendiera su época.

Quien lea el libro *Notas políticas*, sin ser un avisado cuadro político o sin tener referencias puntuales acerca de de la importancia del mismo, tendrá entre sus conclusiones que allí no hay lugar para la improvisación o el azar. Cada uno de sus escritos, sean ensayos, entrevistas, artículos de opinión o documentos, están en perfecta sintonía con los problemas o situaciones políticas a resolver.

Como ejemplos de lo anterior podemos tomar dos. En un primer caso, «Notas negativas», el subtítulo es elocuente en lo que afirmamos: «¿Por qué y para quiénes son estas notas?» Allí, Maneiro acotaba perfectamente cuál era el sentido y los destinatarios de este ensayo, escrito en medio de la división del Partido Comunista y cuyo objeto era plantearse los problemas políticos y organizativos de ese entonces. El otro, fue el documento político «Ante la situación nacional y el desconcierto de la izquierda», publicado el 2 de junio de 1974, en el cual no solo hace un diagnóstico atinado del país, sino que desnuda la disminuida estatura de la izquierda de la época y propone una política como fue la reducción drástica de la producción petrolera.

Igualmente, de ambos textos, anteriormente precitados, podemos retomar algunas de las contribuciones políticas más importantes, tanto de la época que le tocó vivir, como para constatar su vigencia plena en la Venezuela de hoy.

La primera de ellas, en «Notas negativas», tiene que ver con la creación y desarrollo de la categoría: calidad revolucionaria. Decía Maneiro que cualquier organización política con no importa qué ideología puede llegar a ser eficaz políticamente, es decir, alcanzar posiciones de gobierno o de poder. Sin embargo, ello no es una condición suficiente para calificar la calidad de un proyecto de cambio revolucionario, si se entiende como tal, la capacidad de los miembros de una organización para transformar realmente a la sociedad y a ellos mismos como sujetos del cambio.

Como quiera que, en su concepto, tal realización solo podría ejecutarse desde una posición de gobierno, en su tiempo, la única vía era diferenciar con el análisis y el estudio de las organizaciones existentes las características no deseables para una organización revolucionaria. Y así lo hizo. Criticó acerbamente aquellas organizaciones que se constituían en unos aparatos conce-

bidos como un fin en sí mismos, convirtiendo el ejercicio de la militancia en una pesada obediencia burocrática, limitando severamente las capacidades creadoras de ella, a la vez que restringiendo su espíritu crítico. No se puede, señalaba, confundir obediencia con disciplina porque ello implica atrofiar el libre juego de las ideas y las opiniones en el seno de un colectivo o de una organización política determinada.

A la luz de las realidades de hoy, donde el proceso político ha permitido a diversas fuerzas políticas, sociales y militares asumir posiciones de gobierno y de poder, vale la pena dar una ojeada a las características generales de la dirección política de esta. Ensayando, por supuesto, y bajo nuestra absoluta responsabilidad, la utilización del termómetro de la calidad revolucionaria.

Una de ellas tiene que ver con la dirección política del proceso. Si alguna característica se ha manifestado en relación al tema de la dirección entre los actores revolucionarios en el proceso político venezolano, luego del golpe de Estado del 11 de Abril, y en forma más patente, durante la segunda intentona, con el paro petrolero de 2002-2003, y en algunos otros eventos políticos subsiguientes, ha sido el de su incoherencia y dispersión.

Incoherencia y dispersión que se manifiestan en la inexistencia de una dirección unificada, colectiva, con unidad de propósitos y, sobre todo, con un programa político único. A este proceso lo ha venido salvando el olfato político de parte de su dirigencia y la incuestionable presencia del liderazgo de Chávez, se ha necesitado mucho de lo anterior para superar o, al menos minimizar, el tremendo impacto de los golpes opositores.

De la misma manera se manifiesta una relación asimétrica y desigual entre los principales actores que fungen como rectores del proceso. En el cuadro general de la dirección encontramos: actores con mucha fuerza física y militar sin la pericia y la formación para el liderazgo político; con mucha fuerza social, influencia política en las bases sociales pero sin la visión estratégica del proceso; con clara visión política y fuerte formación pero sin arraigo social desarrollado; un liderazgo como el del presidente Chávez con un enorme peso específico en la conducción del proceso pero con excesiva valoración personal de su papel en la dirección; en fin, múltiples variedades de roles y papeles por diferentes agentes del proceso que han derivado en un cuadro muy disperso para centralizar políticas.

Plantearse estos problemas supone la evaluación crítica de las organizaciones políticas que se asumen como dirección del proceso. El debate es nece-

sario, a este proceso político le falta la confrontación sana de ideas en esta materia. El tema de la calidad revolucionaria debe ser abordado sin complejos, sin temor a traumas. Si no queremos copiar los modelos de organizaciones que terminaron reproduciendo lo que pretendían cambiar este es un tema necesario de la agenda política revolucionaria de hoy. El tema de la unidad, tan machacado por el presidente Chávez, sobre todo recientemente, está igualmente asociado estrechamente al de la calidad revolucionaria.

La otra tiene que ver con la gestión de gobierno, es decir, la calidad de ella. Si el propio presidente reclama persistentemente a sus funcionarios, tanto el marcado burocratismo como la ineficacia en el cumplimiento de los objetivos, ello debe ser motivo de gran preocupación entre todos aquellos quienes apostamos al futuro y a la consolidación de la revolución. En el año 2004 se hizo un taller de alto nivel para producir las ideas y objetivos del salto adelante; está uno pendiente, por efectuarse, este es uno de los escenarios para una evaluación, ampliación y corrección de políticas públicas. Escenario apropiado para la elaboración de criterios políticos refinados como lo subrayamos al comienzo. Por razones de espacio no podemos analizar con detalle este tema, solo queremos decir que, en materia de agenda política, la evaluación de la calidad de gestión del Gobierno es primera prioridad. Honraremos con ello la herencia política de Maneiro.

En relación al segundo documento al cual hicimos referencia: «Ante la situación nacional y el desconcierto de la izquierda», solo queremos acotar lo siguiente. Si en aquella oportunidad Maneiro retrató al país, resaltó su condición petrolera y, sobre todo, vaticinó la debacle económica, política y moral de la república como consecuencia de la bonanza petrolera, alertándonos acerca del espejismo que representaba la riqueza fácil, y, en especial a los revolucionarios acerca de la difícil circunstancia para emprender el camino de la revolución, hoy, más que nunca está vigente este alerta. Por una doble razón. En primer término, porque estamos en una posición de gobierno, en una circunstancia donde se está repitiendo una coyuntura de gruesos excedentes petroleros y, si bien es cierto que se ha reiterado que ellos serán utilizados como palancas para la transformación social, también lo es el que los peligros del envilecimiento del proceso están al acecho, vale aquí el «ojo pelao».

Sería largo inventariar la obra completa de Maneiro. Una temática rica y compleja para el desarrollo de la filosofía política. Sería más bien materia para un estudio de unas proporciones distintas a un prólogo, sin embargo, hay que

señalar que toda ella, vista en su conjunto, ofrece al estudioso de los procesos políticos de la Venezuela contemporánea una herramienta de primer orden. De igual manera, es una propuesta metodológica para afinar el ejercicio de la política y su elaboración teórica, a la vez, un aporte que ha enriquecido su patrimonio mundial. Sobran las razones para una reedición de esta obra que prologamos, pero hay una que resalta sobremanera: salvo excepciones, hay escasa producción y elaboración de obras teóricas y políticas que estén a la altura de los grandes desafíos de hoy, el ensayo permanente de la relación entre teoría y práctica, valga decir, el desarrollo de una filosofía de la praxis. Es decir, la continuidad de la obra de Maneiro. Puede interpretarse esta edición como una invitación para hacerlo.

Fue Maneiro un filósofo que pensaba y actuaba a la vez, sin disociar pensamiento y acción. Organizaba juegos con pelotas de goma en Catia; se reunía con los obreros siderúrgicos; buscaba con lupa a algún intelectual que pudiera servir de interlocutor con los sectores populares; viajaba a Maracay para conocer al entonces subteniente Hugo Chávez; criticaba la escasa estatura moral y política de la izquierda; escribía y elaboraba teoría política y filosófica; estudiaba el legado de Maquiavelo; buscó el centro político con Jorge Olavarría; deslindó con el modelo soviético. Estas, entre tantas otras actividades de su vida, estaban orientadas a un fin: construir una organización para transformar la sociedad. En esa tarea lo sorprendió la muerte.

Wladimir Ruiz Tirado, Barinas febrero 2006.

En torno al debate sobre el socialismo del siglo XXI

I. Preámbulo

Desde hace algún tiempo, concretamente desde el 10 de diciembre del 2003, en la oportunidad cuando pronunciamos el discurso de orden en el 144 aniversario de la batalla de Santa Inés, en esa población del estado Barinas, comenzamos a hacer hincapié en la necesidad de comenzar un debate alrededor del modelo de sociedad que queríamos construir. Luego, en forma reiterada lo hemos hecho en otros escenarios como, por ejemplo, en Carora el pasado

24 de julio de 2005, fecha para la cual ya se había abierto la discusión pública alrededor del tema del socialismo del siglo XXI, alentada por el camino abierto por el presidente Chávez.

Nos parecía que habíamos llegado a un punto donde el discurso bolivariano tenía sus límites. Sin desconocer, por supuesto, la importancia que tiene y ha tenido como ideología nacional y como palanca política para cohesionar a los venezolanos alrededor del movimiento transformador de la sociedad.

Señalamos en Santa Inés y en Carora que, luego de la aparición de la obra póstuma de Franz Fanon, *Los condenados de la Tierra*, quedó claro, al menos para los revolucionarios del mundo, la asociación estratégica entre las luchas populares y las de liberación nacional. Es decir, concluimos, siguiendo a este revolucionario africano, que toda revolución antiimperialista es de por sí también anticapitalista. O, como ha sido una constante histórica, la lucha antiimperialista obliga, como mínimo, a plantearse el modelo alterno de sociedad que se aspira construir.

Hemos seguido con atención los diversos enfoques que diferentes autores han utilizado para referirse al tema del socialismo en la Venezuela de hoy, desde luego, incluyendo las opiniones y discursos del presidente Chávez, pero también analistas de distinto y diverso signo ideológico y político, desde la extrema izquierda, pasando por los centristas, hasta la extrema derecha. La idea se ha discutido en libros, foros, seminarios, revistas, periódicos, partidos políticos de Gobierno y de oposición, en fin, a numerosos autores que a esta fecha le convierten en una realidad pública y notoria.

No pretendemos en el presente escrito hacer una exhaustiva investigación de cada uno de los textos que se han planteado el tema. Solo queremos ensayar, a manera de síntesis personal, algunas ideas que puedan ayudarnos a ordenar esta compleja temática. Entendemos que esta es una discusión de larga y antigua data y, sin intención de agotarla, intentamos acercarnos a ella. No pretendemos elaborar una receta pero, sí explorar, al final, un croquis de agenda temática.

II. Socialismo

Socialismo significa propiedad social de los medios de producción, acota de entrada Luis Brito García, acogiénose a la definición clásica del marxis-

mo decimonónico, y agrega que la forma en que el hombre se relaciona con la naturaleza define la manera en que el hombre produce o destruye su vida. Asimismo, indica que la forma en que el hombre trabaja define la forma en que vive y conforma la sociedad y, en consecuencia, determina sus actos políticos y de gobierno (*Últimas Noticias*, 24 de abril de 2005). Además, señala que el conocimiento necesario para el siglo XXI deberá ser holístico, es decir, no se considerará conocimiento «hasta que no se exploren sus relaciones y repercusiones con la totalidad».

Aun corriendo el riesgo de que se nos tilde de atávicos, en principio, compartimos estas definiciones y criterios generales. Porque, digamos que, en términos gruesos, esta ha sido la teoría que ha servido de guía para iluminar la ruta de los diversos prototipos de socialismo que hemos tenido como experiencia histórica y lo seguirá siendo hasta tanto la humanidad corrija los desafueros que ella misma ha engendrado, incluyendo aquellos que desnaturalizaron la teoría hasta el punto de vaciarla de sentido y darle un uso ambiguo al concepto.

Hay quienes asumen que debemos partir de cero y nos invitan a borrar de un plumazo la experiencia anterior. Nos parece esta posición inconveniente porque evita la identificación de las rémoras del pasado, nos remite a un ahistoricismo negativo, improductivo desde el punto de vista político. En nuestra opinión hay que debatirlo todo, sin excluir la línea de tiempo histórico que ha supuesto el ensayo de construir el socialismo en el mundo y, por supuesto, a considerar las especificidades nacionales e internacionales donde debatimos el tema.

Esto nos lleva, por un lado, a considerar las razones de los fracasos, inconsistencias y desviaciones de las experiencias que han ensayado la construcción del modelo, es decir, a evaluar y verificar qué cosas no debemos incluir en el socialismo del presente, o al menos, aquellas más ilustrativas del modelo criticado. Y por el otro, a evaluar lo que tenemos en Venezuela hoy, en lo económico, político, social y cultural, entre diversas variables a sopesar. Como lo dijo recientemente el poeta Antonio Trujillo, durante foro realizado en el marco de la III Biental de Literatura Orlando Araujo, en Barinas el día 24 de febrero de 2006, «para pensar lo que queremos ser, debemos saber lo que somos y lo que tenemos».

En cuanto a lo primero, en forma panorámica, la mayor parte de los autores coincide en señalar los siguientes rasgos: a) Desarrollo del capitalismo

burocrático de Estado, con fuerte centralización de la actividad productiva, en un modelo altamente controlado por la nomenclatura partidista; b) Reproducción del modelo industrialista capitalista con serias repercusiones en la organización autónoma de los trabajadores y las comunidades, así como en su desempeño en la toma de decisiones colectivas; c) Reproducción, en consecuencia, de un tipo de relaciones con la naturaleza igualmente destructivas y nefastas para el equilibrio ecológico; d) En el plano político nos topamos con un desarrollo del dogmatismo intransigente, propio del esquema de partido único, castrador de las libertades individuales y del pensamiento crítico; y e) Reproducción de la racionalidad científica del mundo capitalista lo cual está asociado a la permanencia de los patrones culturales del mismo.

Este breve esquema apenas esboza lo que, en nuestra opinión, han sido los principales elementos de un modelo que pudiéramos deducir como «no deseable», esto es, como una vía ya transitada, cuya experiencia nos dice a las claras qué cosas no debemos repetir. Sin embargo, esta no es una discusión puramente abstracta porque ella se realiza en una sociedad real y concreta como la Venezuela de hoy que, como veremos, tiene muchos de estos rasgos, independientemente de los propósitos y de las buenas intenciones de quienes aspiramos a la transformación de ella.

En cuanto a estos rasgos pudiéramos anotar los siguientes: a) Un sistema económico donde prevalece el capitalismo de Estado y el régimen de la propiedad privada (transnacional, nacional, grande y pequeña,), incluso consagrada constitucionalmente; capital mixto; cooperativismo; asociativismo; incipiente cogestión y autogestión; empresas de producción social; entre otras modalidades de la gestión económica. b) Un sistema político que consagra el principio de la democracia participativa, con rango constitucional, hasta ahora un ejercicio muy limitado a los escenarios electorales y con asomos muy tímidos en las áreas de la economía y de la sociedad. Sumado a esto un Estado con fuerte dosis de presidencialismo. c) Un sistema social que consagra la igualdad de derechos y de deberes, pero, fuertemente determinado por la pobreza y la exclusión histórica. d) Una cultura altamente influenciada por los patrones «occidentales», tanto en sus patrones históricos tradicionales como las más recientes implantaciones del coloniaje imperialista americano y europeo. e) y, por último, una realidad internacional con predominio del unilateralismo imperial de los Estados Unidos de América, amenaza creciente a la estabilidad política en nuestro país.

III. Socialismo en Venezuela, qué debe tener

Teniendo en consideración las anotaciones anteriores podemos inferir que la transformación revolucionaria de Venezuela constituye una empresa de descomunales dimensiones. Por un lado debe criticar y superar los errores y limitaciones de las experiencias fallidas de socialismo y, por el otro, plantearse la superación de su propia realidad en un entorno internacional fuertemente hostil. En atención a lo arriba expuesto es indispensable plantearse algunas premisas básicas sin las cuales esto no sería posible. Una primera, sería dotar el proyecto de una orientación estratégica con clara dimensión antiimperialista, democrática y popular. Se ha avanzado en ello, sin embargo, hay que afinar criterios y, sobre todo, concluir que ello no sería posible sin una dirección política cohesionada y unificada alrededor de un programa político que aglutine a los diversos actores del proceso.

La otra tiene que ver con la evaluación de la *calidad revolucionaria* de los principales agentes que hasta ahora han sido vectores fundamentales del proceso. Estado, Chávez, Fuerzas Armadas, trabajadores, comunidades, partidos políticos, misiones, Asamblea Nacional, organizaciones económicas de diverso signo, diversas formas de organización popular, que de alguna forma han encarnado y sostenido el proceso político bolivariano.

En una relectura del país encontramos dos referencias políticas que pueden contribuir a esclarecernos, tanto dicha orientación estratégica, como la calidad del proyecto y sus agentes. Una, la obra *Venezuela violenta*, publicada por Orlando Araujo en 1968, cuya agenda temática y analítica nos proporcionan, en medio de la derrota política de la opción revolucionaria de entonces, no solo un diagnóstico de la Venezuela de la época, sino un programa político de proverbial claridad estratégica. Lucha contra el latifundio, contra el coloniaje de la industria nacional, lucha por la nacionalización petrolera, y, sobre todo, un llamado a la unidad política de los revolucionarios para enfrentar los retos políticos que suponía tal programa. La otra, el desarrollo de la categoría *calidad revolucionaria*, planteada por Alfredo Maneiro, quien sostuvo que esta no podía suponerse a priori, ni en una organización ni en un proyecto revolucionario, sino que, más bien, debía ser evaluada a la luz de su gestión política, como dirección, como pensamiento, como ejercicio de gobierno y de poder popular.

En cuanto a lo primero, tenemos avances. Se hizo un primer Mapa Estratégico que orienta en relación a los aspectos centrales de la orientación de la gestión y del papel de los actores en la etapa actual del proceso. Está por hacerse un segundo encuentro. Estos escenarios deben aprovecharse para potenciar la calidad de la gestión, afinar la estrategia y caracterizar los rasgos de la etapa actual del proceso político. Y, en lo que respecta a lo segundo, hay que propiciar la discusión de dos temas sin los cuales no habría revolución que valga la pena: la dirección política y la organización popular. Ambos componentes prefigurarían la sociedad futura, le otorgarían las claves para su permanencia en el tiempo y le blindarían ante las distorsiones y los adversarios del proyecto. Serían la única garantía para la navegación en las aguas revueltas y turbulentas del proceso de cambio.

IV. Socialismo, propiedad privada y solidaridad

A juzgar por lo acordado por el presidente Chávez con el empresariado privado nacional, en reunión efectuada el 24 de octubre de 2005 en el palacio de Miraflores, en Venezuela habrá propiedad privada y régimen capitalista de producción para rato. En efecto el presidente fue enfático al señalar: «Ese capital nacional no monopolista lo necesitamos en una verdadera alianza estratégica de una vez y para siempre y que no caigamos más nunca en los cantos de las sirenas del infierno». Agregó el presidente: «Una verdadera alianza estratégica: el gobierno y el sector privado con nuestras empresas básicas, con nuestros trabajadores, para seguirle dando forma al modelo de desarrollo endógeno potenciando al máximo nuestras capacidades» (*Quinto Día*, 28 de octubre de 2005, p. 16).

Interrogante: ¿Es contradictoria esta alianza asumida por el presidente con la propuesta de debatir para la edificación de un sistema socialista? Definitivamente no. No solo porque la *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela* instituye el derecho a la propiedad privada, sino además, porque liquidarla de plano significaría dismantelar el aparato productivo del país, a la par que, desconocer la importancia que en esta etapa del proceso tienen el empresariado y los trabajadores en la consolidación de una economía fuerte, consolidada. Está claro que una iniciativa de este tipo tiene sentido estratégico si los sectores empresariales se acogen a la rectoría del Estado en materias como planificación, cooperación y solidaridad social.

Estas preocupaciones fueron recogidas por Luis Ugalde (*El Nacional*, 23 de junio de 2005) en un artículo titulado «Interés propio y solidaridad», en el cual intenta conciliar ambos términos de esta ecuación cuando afirma que «Con realismo podemos aspirar a construir un proyecto político de democracia social que combine la economía competitiva, con la institucionalidad solidaria para lograr una sociedad sin pobreza, con libertad y justicia social». Al final de su escrito, termina diciendo «El otro socialismo de Estado totalitario no pasó el examen y murió». Es decir que su paradigma, el de la «libre competencia», sin controles estatales y políticos, sí produciría soluciones reales ante problemas como la pobreza y la desigualdad. Nada más alejado de la realidad. Ha sido justamente este régimen neoliberal a ultranza el que ha condenado a los pueblos a la desigualdad y al infortunio de la pobreza. El principio de solidaridad en este esquema económico es inexistente. Por eso sostenemos que una alianza estratégica, como la formulada por el presidente, rebasa el marco del denominado «interés propio» para otorgarle primacía no al mercado sino a la solidaridad, tanto desde las políticas del Estado como del empresariado que se ajuste a este principio.

V. *¿Inventarlo todo?*

Es una pregunta que se han hecho algunos autores. Habría que decir con respecto a esto que, por esta vía, se desconocería el extraordinario legado de la humanidad por definir sus modos de existencia, fallidos o exitosos. Igualmente, se desconocería que el conocimiento avanza, más por el descubrimiento de sus limitaciones que por el surgimiento de nuevas propuestas teóricas, científicas, filosóficas o metodológicas. Ciertamente, hay que plantearse un debate que permita discernir los criterios más acabados para transitar el reto que supone una revolución social. ¿El conocimiento holístico del cual no habla Brito García?

1. El modelo económico.

Si partimos del criterio según el cual las formas de propiedad sobre los medios productivos determinan las relaciones sociales de producción, es decir la base fundamental de la economía, sumadas a las tecnologías y a las fuerzas de la producción, unos de los temas a discutir, y no solo como ejercicio teórico, sino con los sujetos económicos de por medio, valga decir, los

trabajadores, los empresarios privados y el Estado u otros actores, es el de la propiedad, la solidaridad, la participación popular y la planificación . Hasta ahora lo consagrado constitucionalmente es limitado, así como los avances concretos en materia de cogestión y autogestión.

Hay quienes afirman que en esta etapa lo fundamental son los índices de productividad, el crecimiento. Al respecto cabe considerar la formula de Ernesto Guevara, quien sostenía que a la producción y a la productividad había que agregar la conciencia política. Y esto último no es un aditivo fácil de obtener, es, más bien, el resultado de un proceso.

Como observamos, no estamos considerando el carácter estatista o liberal de la economía, solo los fundamentos a partir de los cuales podríamos ordenar el sistema económico. Lo que sí esta claro, partiendo del principio expuesto al comienzo, es que la estrategia de una economía socialista tiene que estar fundada en la democratización de la propiedad, el principio de la solidaridad, la participación popular y la planificación estratégica. Estos deben ser unos de los temas centrales a debatir a lo efectos de fundar un nuevo sistema económico.

El taller realizado el 12 de noviembre de 2004, donde se presentó el diseño del Nuevo Mapa Estratégico, plantea en su aparte III «Avanzar aceleradamente en la construcción del Nuevo Modelo Democrático de Participación Popular», orienta claramente en la concreción de estos lineamientos referidos al simultáneo desarrollo ideo-político a la par con el enfoque del «desarrollo endógeno», piso económico-social y político de la revolución.

2. La transformación social:

Más allá de las consideraciones formales, sean constitucionales, legales o de cualquier otro orden, las condiciones actuales de exclusión y de pobreza, parecen sugerir que, una transformación radical de la sociedad solo será posible con una revolución social y, aparejada esta, la económica y la política. Sería iluso pensar que en el actual marco económico y político superaríamos tal rémora (Ver objetivos I y III del Mapa Estratégico).

3. El sistema político:

Constituir un nuevo Estado implicaría o una reforma constitucional profunda o una nueva constituyente. La necesidad dirá cuál será el camino a seguir, pero, lo que sí debe quedar claro es que el actual no constituye la

herramienta adecuada para las transformaciones radicales requeridas por un proceso cuyo objetivo sea el socialismo.

A la instituida democracia participativa le falta profundidad y desarrollo. Tanto en el plano de la participación económica como en el ámbito de la toma de decisiones por parte de los distintos y diversos sujetos del colectivo social. Si socialismo, en lo económico, es democratización de la propiedad, en lo político debe traducirse en ejercicio democrático de las decisiones en todos los escenarios posibles de la vida social.

Consecuencia de lo anterior sería el cuestionamiento de la existencia de un partido único como rector de la vida política nacional. Podría pensarse en una dirección política unificada, alrededor de un programa, que pueda expresar los intereses de diversos actores y sujetos de la colectividad. Los partidos políticos deben fungir como entes articuladores entre el Estado, el Gobierno y las organizaciones populares, como lo refiere Margarita López, pero no copar la escena (*El Nacional*, 29 de enero de 2006, D6). ¿Suena esto a utopía?

4. Las relaciones con la naturaleza.

Si asumimos que actualmente predomina la lógica del capital en el sistema económico, es perfectamente comprensible que las relaciones entre el hombre y su entorno ecológico, el cual le incluye como componente, no son armoniosas, como en efecto ocurre. Objetivo de primer orden en un proyecto de cambio radical de la sociedad es el restablecimiento de este equilibrio. No podemos imaginarnos a un hombre como depredador de su ambiente en una sociedad socialista.

5. La nueva cultura:

Una nueva cultura en un proceso de edificación socialista solo será posible si desmontamos las claves de la racionalidad científico-técnica del capitalismo, la gran ideología del capital. La lógica de su funcionamiento no solo ha llevado a la fractura de los intereses colectivos de la sociedad, sino que, además, ha colocado al hombre como un objeto, despojado de su subjetividad. Construir una nueva cosmovisión, para utilizar el término acuñado por Humberto Febres Rodríguez (*Los llaneros, límites y alcances de una investigación*, Unellez, Barinas, 1992), lleva implícito el desarrollo simultáneo y paralelo de los anteriores componentes del modelo.

Pero, a la vez, la restitución de las claves del pensamiento complejo desa-

rrollado por Edgar Morin, en especial, la superación del conocimiento disjuntivo, separador, fundado en la exclusiva racionalidad de la lógica bivalente occidental, y al restablecimiento de la dialógica hombre- naturaleza.

VI. *Post-data*

“El socialismo del siglo xxi es un concepto en gestación”, tituló *El Nacional*, el 27 de julio de 2005, a manera de síntesis interpretativa de un foro realizado en la sede la Asamblea Nacional, donde participaron: Giulio Santossuso, el general Alberto Muller Rojas, Ramón Sánchez Noda de Cuba y Heinz Dieterich. Y efectivamente es así. No de otra forma podemos entender este esbozo de discusión política y teórica que se ha abierto en torno al modelo a construir en Venezuela y, por qué no, en el mundo. Estamos apenas en el preámbulo, de un proceso de transición hacia una etapa superior en el proceso político venezolano. Donde, si bien es cierto que se ha abierto un alentador panorama a futuro, también lo es el que está rodeado de incertidumbres. El mismo Dieterich, días antes, había señalado que «si el presidente desaparece, el proyecto colapsa» (*El Nacional*, 24 de julio de 2005, A2).

Como lo escribía Alfredo Maneiro, sobre todo en el campo de la filosofía política, y de allí su importancia, «...el valor de la filosofía no está en las certezas que proporciona, sino en la incertidumbre que estimula» (Maneiro 1997). Ciertamente, lo dicho por Dieterich es un posible escenario, en ningún caso deseable, pero en cualquier caso nada desdeñable a la hora de considerar el rumbo de esta revolución.

Resumen de la charla dictada el 18 de enero de 2006 en la Universidad Bolivariana, municipio Cruz Paredes, Barrancas, estado Barinas.

Bibliografía Capítulo I

Briceño Guerrero, José Manuel. *El laberinto de los tres minotauros*, Monte Ávila, Caracas, 1994.

Castro G. Santiago. "Los desafíos de la posmodernidad en la filosofía latinoamericana", *Dissens*, nro. 1.

Febres, Humberto. *Digresión enciclopedante*, nro. 1, UNELLEZ, 1991.

Gomariz, Enrique. *Mientras tanto*, Clacso, 1991.

Hobsbawn, Eric. *Entrevista sobre el siglo XXI*, al cuidado de A. Polito, editorial Crítica, Barcelona, 2000.

Mignolo, Walter. "Espacios geográficos y localizaciones Epistemológicas", *Dissens*, nro. 3.

Montiel, Nelson. *El Llano en voces*, AEEB, 2001.

Nietzsche, Friedrich. *La gaya ciencia*, citado por Y. Yirmiyamu, en Spinoza *El marrano de la razón*, Amaya, Madrid, 1995.

Rodríguez, Simón. *Inventamos o erramos*, Monte Ávila, Caracas, 1992.

Vattimo, G. *El fin de la modernidad*, Gedisa, Barcelona, 1990.

Vilas, Carlos M. "La sociología política Latinoamericana y el 'caso' Chávez", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*.